



**REVISTA  
DE CRÍTICA  
CULTURAL**

NOV. 2003 N° 27 \$ 3.000

1970-2003

CeD

**QUIEBRE HISTÓRICO Y FUERZAS POLÍTICAS**

# Postgrados 2004

Nº 27

## MAGÍSTER EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES

Director: GABRIEL SALAZAR

DURACIÓN: Tres semestres de cursos más el tiempo de preparación de la tesis.

FECHA DE POSTULACIÓN: Noviembre 2003 a Marzo 2004.

COORDINADOR ACADÉMICO: Sergio Grez Toso

TELÉFONOS: (56-2) 3866438 - 3866439 - 3866436 / E-MAIL: gsalazar@universidadarcis.cl / sgrez@universidadarcis.cl

## MAGÍSTER EN SOCIOLOGÍA

TRANSFORMACIONES SOCIO-POLÍTICAS  
Y PRÁCTICAS DE RESISTENCIA

En convenio con la Universidad de París VIII - Vincennes-Saint Denis- Francia

Directora: MARÍA EMILIA TIJOUX

DURACIÓN: Cuatro semestres

BENEFICIOS: Convenio entre la Universidad de París VIII y la Universidad ARCIS que permite, una vez terminado el proceso de formación, optar al Doctorado de Tercer Ciclo que otorga dicha Institución académica. Cursos de francés gratuitos entregados por el Instituto Chileno-Francés de Cultura.

FECHA DE POSTULACIÓN: Marzo - Agosto 2004

TELÉFONOS: (56-2) 3866505 - 3866517 / E-MAIL: mtijoux@universidadarcis.cl / sociologia@universidadarcis.cl

## DOCTORADO EN EL ESTUDIO DE LAS SOCIEDADES LATINOAMERICANAS

Director: JACQUES CHONCHOL

DURACIÓN: Tres semestres lectivos (cada semestre con tres materias, lo que totaliza nueve seminarios).

Una vez rendido los tres semestres, el candidato dispondrá de tres años para completar su tesis.

POSTULACIONES: Noviembre 2003 a Enero 2004

BECAS: Fundación Volcán Calbuco o becas de organismos internacionales o ONG gestionados por el candidato.

Convenios universidades extranjeras: Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad de la Sorbonne. (I HEAL)

TELÉFONOS: (56-2) 3866432 - 3866437 • Fax: (56-2) 3866433 / E-MAIL: doctorado@universidadarcis.cl

## MAGÍSTER EN PSICOLOGÍA SOCIAL

Impartido conjuntamente por la Universidad ARCIS y la Universidad Autónoma de Barcelona

Directora: ISABEL PIPER

DURACIÓN: Plan de estudios de dos años de duración más la realización y defensa de una tesis.

POSTULACIONES: Noviembre - Marzo

BECAS: Es posible concursar a las becas ofrecidas por las fundaciones Ford, Calbuco y Andes. Seminarios con código SENCE.

TELÉFONO: (56-2) 3866410 / E-MAIL: ipiper@universidadarcis.cl

## Salvador Allende, a treinta años de su muerte

- Sergio Grez (7) - Jacques Chonchol (10) - Ricardo Núñez (12) - Sergio Micco y Mauricio Jelvez (15)

## Antes de... : los estados de ánimo de los actores políticos en los últimos días de la Unidad Popular

- Ricardo Hormazábal (21) - Jorge Insunza (23) - Jaime Gazmuri (24)

## El pensamiento de la derecha en Chile y la UDI

- Sofía Correa Sutil (27) - Rodrigo Baño (32) - Alfredo Joignant (34) - Antonio Cortés Terzi (37) - Carlos Ruiz S. (38)

## Transformaciones históricas y cambios de identidad cultural

- Jorge Larraín (44) - Maximiliano Salinas (46)

## Redemocratización y pacto neoliberal

- Manuel Antonio Garretón (49) - Carlos Huneeus (50) - José Antonio Viera-Gallo (52)

## El discurso público sobre la moral sexual

- Kathya Araujo (55) - Guadalupe Santa Cruz (58)

## Reimaginar la izquierda

- Carlos Ruiz (62) - Tomás Moullan (64)

## Debate historiográfico y pasado nacional

- María Eugenia Horvitz (67)

## Crímenes, justicia y reparación

- Carmen Hertz (71) - Miguel Vicuña (72) - Roberto Garretón (74)

Las imágenes que ilustran este Número documentan el proceso de construcción del Edificio de la UNCTAD III (1971 - 1972) y pertenecen al archivo fotográfico de Sergio González, uno de sus arquitectos.

UNIVERSIDAD  
ARCIS

Casa Central: Huérfanos 1710, Santiago  
Sede Libertad: Erasmo Escala 2728, Santiago

www.universidadarcis.cl

Directora: NELLY RICHARD

Consejo Consultivo: JUAN DÁVILA / DIAMELA ELTIT / FEDERICO GALENDE /  
CARLOS PEREZ V. / CARLOS OSSA / MARISOL VERA / WILLY THAYER

Diseño Gráfico: JOSÉ ERRÁZURIZ

IMPRENTA SALESIANOS

Casilla 50736, Correo Central, Santiago de Chile  
www.revista-de-critica-cultural.cl

Distribución:  
EDITORIAL CUARTO PROPIO  
Keller 1175, Providencia, Santiago de Chile  
Fono: 204 7622  
e-mail: cuartopropio@cuartopropio.cl

Publicidad y suscripciones:  
ANA MARÍA SAAVEDRA, LUIS ALARCÓN  
Fono/Fax: (56-2) 563 0506 / e-mail: anamariasaa@hotmail.com

# Magister en Pensamiento Contemporáneo

El Magister en Pensamiento Contemporáneo tiene por objetivo abrir un espacio de conocimiento, debate y reflexión multidisciplinarios, teniendo como eje central a la Filosofía, y particularmente a aquellas tendencias y escuelas de pensamiento (fenomenología, teoría crítica, hermenéutica, estructuralismo y post-estructuralismo, pragmatismo) al interior de las cuales se articulan cuestiones que, de una u otra manera, definen la problemática contemporánea, desde la ética hasta la tecnología.

El Magister se articula en torno a dos ejes:  
Un eje temático, a lo largo del cual se propicia la reflexión en torno a tópicos centrales del debate de ideas contemporáneo.  
Un eje multidisciplinario en el cual la Filosofía, a la vez de profundizar en las preguntas que le son propias, hace de articulador de las demás disciplinas (Historia, Literatura, Ciencias Sociales).

Duración:  
Tres semestres de formación teórica, más un semestre para la realización del proyecto de Tesis de Grado.

Plazo de inscripción:  
noviembre de 2003 a marzo de 2004  
Fecha de inicio: abril de 2004  
Requisitos de ingreso: Licenciatura, título profesional o equivalente.  
Informaciones: 676 2295  
e-mail: pensamiento@udp.cl



UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES  
FACULTAD DE HUMANIDADES

## Seminarios

### I. FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA

Tendencias fundamentales de la Filosofía Contemporánea I (Fenomenología, Post-estructuralismo): Manuel Jiménez Redondo (U. de Valencia)

Tendencias fundamentales de la Filosofía Contemporánea II (Pragmatismo, Filosofía Analítica): Juan Ormeño

Tendencias fundamentales de la Filosofía Contemporánea III (Teoría Crítica, "Hermenéuticas de la sospecha"): Eduardo Sabrovsky

### II. SOCIEDAD Y CULTURA CONTEMPORÁNEA

Ciudad y ciudadanía en el mundo contemporáneo: Humberto Giannini

Experiencia, Identidad y Memoria: Margarita Palacios

Imagen, visión y visualidad en la cultura contemporánea: Roberto Aceituno, Guillermo Machuca

### III. SOCIEDAD Y CULTURA EN LATINOAMÉRICA

Temas de Historia Latinoamericana del siglo XX: identidad vs. globalización, ciudad y movimientos sociales, género, democratización: María Antonieta Huerta

Literatura e identidad latinoamericana: Kate Jenckes (Rice University).

Pensamiento latinoamericano: Cecilia Sánchez

Nota: cada una de estas líneas puede ser cursada independientemente, a nivel de diplomado.



Universidad de Chile



Facultad de Artes  
Departamento de Teatro  
Universidad de Chile

Magister en Artes, con mención en

# Dirección Teatral



Eugenio Guzmán



Pedro Orthus



Agustín Siré



Andrés Pérez



Pedro de la Barra



Víctor Jara



Alejandra Gutiérrez



Fernando González



Alberto Kwapel



Abel Carrizo-Muñoz



Alfredo Castro

**REQUISITOS DE ADMISIÓN:**  
**Alumnos Regulares:** Título profesional o Grado académico otorgado por Universidades Nacionales o Extranjeras e Institutos de Educación Superior debidamente reconocidos por el Ministerio de Educación de Chile.

**Alumnos Libres:** Quienes no cumplan con los requisitos de alumno regular podrán cursar el Programa, accediendo a todos los servicios académicos, obteniendo la certificación respectiva emitida por el Departamento de Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.

**DURACIÓN** mínima / máxima del Programa: 4 a 7 Semestres

**COSTO:**  
**Matrícula:** US 90.- aprox.  
**Arancel Anual:** US 1.500.- aprox. en 9 mensualidades.

**ADMISIÓN 2004**  
Período de Postulación.  
**Inscripciones:**  
05 de Enero al 13 de Marzo de 2004  
**Exámenes:** 15 al 20 de Marzo de 2004.  
**Matrículas:** 23 al 30 de Marzo de 2004.

**Examen de Admisión:**  
Para ser admitido en el Programa, los postulantes deben presentar y rendir satisfactoriamente lo siguiente:  
· Currículum Vitae  
· Anteproyecto de Tesis  
· Ejercicio de Dirección 1  
· Ejercicio de Dirección 2  
· Entrevista

**PROGRAMACIÓN AÑO LECTIVO 2004**  
**Primer Semestre:**  
3 de Abril al 31 de Julio.  
Vacaciones de Invierno:  
1 al 15 de Agosto.  
**Segundo Semestre:**  
16 de Agosto al 18 de Diciembre.

**Horario de Clases:**  
Sábados:  
10:15 a 13:30 hrs.  
Lunes:  
19:00 a 22:15 hrs.  
Martes:  
15:00 a 18:15 - 19:00 a 22:15 hrs.

**Informaciones:**  
Departamento de Teatro,  
Universidad de Chile,  
Morandé 750, oficina 38,  
Santiago centro, Chile.  
**Teléfonos:**  
fono fax directo 56-2- 671 6873  
(56-2) 696 5142 / 696 4929  
email: acarrizo@uchile.cl

"Para ejercer la función más importante en el teatro, cual es la de la Dirección, estamos convencidos que no basta el talento o la intuición, el informarse por manuales o el practicar con los amigos. Pensamos que es imprescindible cultivar y sistematizar el aprendizaje del arte de la puesta en escena al calor de un programa de formación teórico - práctico en la principal universidad del país y la que tiene mayor tradición y capacidad en el área artística."

ABEL CARRIZO-MUÑOZ

Director Académico

MAGISTER en Artes con mención en DIRECCIÓN TEATRAL

Lecturas para ser partícipes  
del mundo en que vivimos.

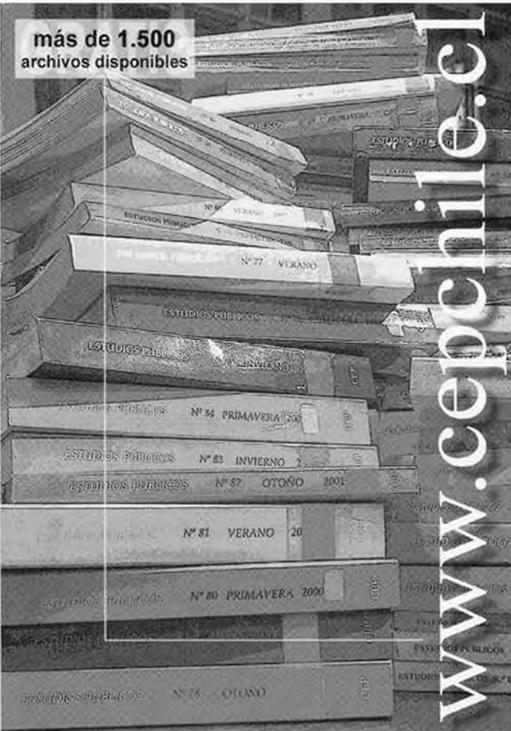


www.lom.cl / lom@lom.cl

**LOM Ediciones**

Librerías LOM: Maturana 19 - Moneda 650 interior Biblioteca Nacional

más de 1.500  
archivos disponibles



www.cepochnile.cl



## Licenciatura en Arte Educación Continua

Diplomados en Pintura, Dibujo, Escultura,  
Fotografía, Gráfica Digital, Estudios Generales.  
Conservación y Restauración.



Licenciatura: El Comedador 1916 tel: 686 7717  
e-mail: mabumava@poc.cl  
Educación Continua: Av. Carlos Casanueva 0365  
tel: 686 5648 fax: 232 2502  
Providencia, Santiago.  
www.poc.cl/artes

# MAGISTER EN ESTUDIOS DE GÉNERO Y CULTURA

## MENCIÓN HUMANIDADES Período 2004-2005

Coordinadora Magíster: Kemy Oyarzún

Comité Académico:  
Lucía Invernizzi, Kemy Oyarzún, Loreto  
Rebolledo, Sonia Montecino.

Académicas Permanentes:  
Pilar Errázuriz, Olga Grau, Margarita Iglesias,  
Irma Palma, Patricia Soto

### ASIGNATURAS:

#### Troncales Obligatorias:

- Teoría del Género y Estudios Culturales
- Teoría del Género y Ciencias Sociales
- Metodología General de Género

#### Obligatorias de la mención:

- Historia y Género
- Estudios Culturales

### Electivas:

- Globalización y Género
- Género, Participación y Poder
- Sexualidad y Género
- Psicoanálisis y Género
- Filosofía y Género

### Seminario de Tesis

Duración: 4 semestres

Requisitos de postulación: Grado de Licenciado o Título profesional.

Fecha de postulación: hasta el 15 de marzo 2004 (exceptuando mes de Febrero)

Informaciones, Fono: 678 7148 e-mail: violeta@uchile.cl

## DIPLOMA ESTUDIOS DE GÉNERO IGUALDAD Y DIFERENCIA EN EL ENFOQUE DE LAS POLÍTICAS SOCIALES 2004

Duración: 2 semestres (14 semanas c/u)

### Cursos

- Primer Semestre
- INTRODUCCIÓN TEÓRICA A LOS ESTUDIOS DE GÉNERO: EL TRABAJO DE LOS CUERPOS.
  - SALUD Y SEXUALIDAD EN LA HISTORIA.
- Segundo Semestre
- MICRO Y MACROFÍSICA DEL PODER: SALUD DE LOS CUERPOS Y LAS SUBJETIVIDADES.
  - DISCIPLINAMIENTOS Y RUPTURAS EN LOS DISCURSOS, PRÁCTICAS E INSTITUCIONES EN EDUCACIÓN.

Coordinadoras  
Olga Grau y Pilar Errázuriz

INFORMACIONES Y POSTULACIONES  
Capitán Ignacio Carrera Pinto 1025,  
3º Piso Ñuñoa, Santiago  
Fono: 6787145 / e-mail: genfil@uchile.cl

UNIVERSIDAD DE CHILE

Facultad de Filosofía y Humanidades



## COLECCIÓN CRÍTICA Y ENSAYOS

Directora: Nelly Richard



**Nelly Richard**  
**RESIDUOS Y METÁFORAS**  
(Ensayos de crítica cultural  
sobre el Chile de la transición)  
274 páginas / 13,5 x 21 cms.  
ISBN: 956-260-126-9  
[1ª edición, 1998. 2ª ed. 2002]



**Jean-Louis Déotte**  
**CATÁSTROFE Y OLVIDO**  
Las ruinas, Europa, el Museo  
320 páginas / 13,5 x 21 cms  
ISBN: 956-260-143-9  
[1ª edición, 1998]



**Patricio Marchant**  
**ESCRITURA Y TEMBLOR**  
449 páginas / 13,5 x 21 cms  
ISBN: 956-260-200-1  
[1ª edición, 2000]



**Idelber Avelar**  
**ALEGORÍAS DE LA DERROTA**  
La ficción postdictatorial y el  
trabajo del duelo  
337 páginas / 13,5 x 21 cms  
ISBN: 956-260-192-7  
[1ª edición, 2000]



**Nelly Richard y Alberto Moreiras / editores**  
**PENSAR EN/LA POSTDICTADURA**  
332 páginas / 170 x 24,5 cms.  
ISBN 956-260-237-0  
[1ª edición, 2001]



**Hermann Herlinghaus / editor**  
**NARRACIONES ANACRÓNICAS  
DE LA MODERNIDAD**  
Melodrama e intermedialidad en  
América Latina  
388 páginas / 13,5 x 21 cms.  
ISBN 956-260-270-2  
[1ª edición, 2002]



**Julia Kristeva**  
**SENTIDO Y SINSENTIDO  
DE LA REBELIÓN**  
Literatura y psicoanálisis  
368 páginas / 13,5 x 21 cms.  
ISBN: 956-260-157-9  
[1ª edición, 1999]



**Max Colodro**  
**EL SILENCIO EN LA PALABRA**  
Aproximaciones a lo innombrable  
134 páginas / 13,5 x 21 cms.  
ISBN: 956-260-190-0  
[1ª edición, 2000]



**Nelly Richard / editora**  
**POLÍTICAS Y ESTÉTICAS DE  
LA MEMORIA**  
252 páginas / 17 x 24,5 cms  
ISBN: 956-260-191-9  
[1ª edición, 2000]



**Mabel Moraña / editora**  
**NUEVAS PERSPECTIVAS DESDE/  
SOBRE AMÉRICA LATINA**  
El desafío de los estudios culturales  
514 páginas / 17 x 24,5 cms  
ISBN: 956-260-185-4  
[1ª edición, 2000]



**Sergio Villalobos-Ruminott/ editor**  
**HEGEMONÍA Y ANTAGONISMO: EL  
IMPOSIBLE FIN DE LO POLÍTICO**  
(Conferencias de Ernesto Laclau en  
Chile, 1997)  
212 páginas / 13,5 x 21 cms.  
ISBN: 956-260-271-0  
[1ª edición, 2002]



**Julio Ramos**  
**DESENCUENTROS DE LA MODER-  
NIDAD EN AMÉRICA LATINA:**  
Literatura y política en el siglo XIX  
326 páginas / 13,5 x 21 cms  
ISBN: 956-260-298-2  
[1ª edición, 2003]

Editorial Cuarto Propio • Keller 1175 • Providencia • Santiago de Chile  
Teléfono (56-2) 204 7645 • Fax (56-2) 204 76 22





## Sergio Grez

Director Museo Nacional Benjamín Vicuña Mackenna;  
Coordinador Académico Magíster en Historia y Ciencias Sociales Universidad ARCIS

(...);Cómo abordar desde un punto de vista ensayístico al personaje histórico Salvador Allende? Me propongo adoptar una perspectiva de larga duración que lo inserte en el transcurrir general del movimiento popular en Chile, y sostener tres premisas:

1) Salvador Allende encarnó mejor que nadie desde mediados de la década de 1930 y hasta su muerte en 1973 la continuidad histórica y la línea central de desarrollo del movimiento popular.

Como es sabido, las raíces de este movimiento se hunden hasta mediados del siglo XIX cuando algunos contingentes de artesanos y obreros calificados levantaron un ideario de “regeneración del pueblo” en base a una lectura avanzada y popular de los postulados liberales. El mutualismo y otras formas de cooperación fueron la expresión práctica de este proyecto de carácter laico, democrático y popular. Con el correr del tiempo, el desarrollo del capitalismo y la llegada de las ideologías de redención social provocaron desde fines de ese siglo el ascenso del movimiento obrero y con él una metamorfosis de la doctrina, las formas de organización y de lucha del mundo popular. Desde comienzos del siglo XX el *ethos* colectivo del nuevo movimiento se sintetizó en la aspiración (más radical) de la “emancipación de los trabajadores” y se expresó en el surgimiento del sindicalismo y la adopción por parte del movimiento obrero y popular de las nuevos credos de liberación social del anarquismo y el socialismo. Con todo, a pesar de la mutación en un sentido de mayor radicalidad (de la “cooperación” a la lucha de clases), un hilo conductor de tipo ilustrado, regenerativo y emancipador representó una cierta continuidad entre esas dos fases o momentos del movimiento popular<sup>1</sup>.

Salvador Allende hizo sus primeras experiencias políticas cuando el movimiento popular se aprestaba a transitar por los cauces institucionales que no abandonaría hasta que el golpe de Estado de 1973 lo interrumpiera brutalmente. Así, después de más de una década de convulsiones sociales y políticas, a mediados de los años 30, el movimiento popular y la izquierda, dando su “brazo a torcer”, optaron mayoritariamente por incorporarse al juego político institucional, retomando – después de algunas veledades rupturistas- un transitar más evolutivo, pacífico, parlamentario y reformista, que era, en definitiva, el que siempre había sido el preferido por el movimiento popular toda vez que las clases dirigentes se lo habían permitido.

Desde este “gran viraje” (según la acepción de Tomás Moulian) de mediados de los años 30 que inauguró la política de Frente Popular, la izquierda y el movimiento popular asociado a ella, optó clara y mayoritariamente por aceptar las reglas puestas por el “Estado de compromiso” proclamado por la Constitución de 1925, pero que recién por esos años empezó a hacerse realidad<sup>2</sup>. Allende, como es sabido, jugó un papel destacado en esta “nueva” estrategia ya sea como ministro de Estado, parlamentario, dirigente partidario y – más allá de sus cargos formales- como líder político popular. El Frente Popular, luego el Frente del Pueblo, el Frente de Acción Popular y, finalmente, la Unidad Popular, fueron los hitos aliancistas a través de los cuales la política de la izquierda y del movimiento popular se hicieron realidad. Esto fue, en síntesis, el contenido más esencial del “allendismo” como sentimiento y corriente política de masas. En este sentido, la acción y la persona de Allende –persistente hasta el último de sus días en un camino de unidad- fueron la expresión más paradigmática de una vía y de una estrategia para alcanzar el ideal de la emancipación popular.

2) Salvador Allende encarnó la dialéctica no resuelta de reforma o revolución.

Aún cuando el apego de Allende a la vía parlamentaria y a las reglas del juego del Estado de compromiso” fueron permanentes, la izquierda y el movimiento popular en los últimos años de la vida de este líder se vieron envueltos en un debate y en una encrucijada no resuelta que anuló los esfuerzos que en distintos sentidos se hicieron para dar conducción al movimiento y una salida al *impasse* político. Es el “empate catastrófico” entre las dos vías –la rupturista revolucionaria y la “moderada revolucionaria” del cual nos ha hablado Tomás Moulian en su *Conversación interrumpida con Allende*<sup>3</sup>. A 30 años de distancia, la disyuntiva ¿reforma o revolución? pierde los contornos que en la década de 1970 nos parecían tan nítidos. Si bien la revolución “con empanadas y vino tinto”, en esencia la vía electoral reforzada por la movilización popular, preconizada por Allende, mostró

sus límites en un contexto internacional de gran polarización, la "revolución" tal como la concebíamos entonces, ya no es posible — más aún — ni siquiera descabable.

La "caída de los muros", la terciarización de las economías, los cambios tecnológicos y de las estructuras sociales a nivel nacional e internacional, la emergencia de nuevas problemáticas y de un mundo unipolar dominado por un gran Imperio, amén de un sinnúmero de razones que apuntan en su gran mayoría a la consolidación del modelo de dominación, hacen de la "revolución" según el esquema clásico, un fetiche puramente nostálgico más allá de la eficiencia técnica (a estas alturas bastante hipotética) de sus métodos para asaltar el poder.

La oposición entre la vía reformista electoral y la vía revolucionaria armada no es ya un punto de quiebre al interior de la izquierda y del movimiento popular, pero sí lo son, por ejemplo, la adhesión o el rechazo al modelo neoliberal y a la dominación imperial. A la luz de esta nueva problemática, la política de Allende adquiere una nueva relevancia histórica. Su "reformismo rupturista" o "reformismo revolucionario" nos parece hoy día — incluso a sus críticos de izquierda de entonces — el *sumun* a lo que podríamos aspirar en estos tiempos de globalización neoliberal. Curiosa paradoja de la historia: lo que antes era considerado altamente insuficiente llega a ser "el bien mayor". El allendismo del período de la Unidad Popular fue la expresión de una tentativa abortada por resolver en una síntesis dialéctica la disyuntiva entre reforma o revolución que el contexto histórico de los años 70 — hoy día lo percibimos con claridad — no permitía solucionar. Con todo, a pesar de verse atrapado en ese callejón sin salida, Allende en el día de su muerte, y con su muerte, intentó dejar una herencia política de contenido "reformista revolucionario".

3) Desde la perspectiva de la historia del movimiento popular, el golpe de Estado de 1973 representa un quiebre total, un "puente roto" que no se ha vuelto a reparar.

En su mensaje de despedida Salvador Allende vaticinó que "otros hombres" superarían ese momento gris y amargo. Esos nuevos hombres retomarían la senda interrumpida de la izquierda y del movimiento popular. Los heroísmos, sacrificios y reencantamientos militantes de la lucha de resistencia contra la dictadura parecieron reanudar el hilo conductor del movimiento popular. El combate contra la opresión de la tiranía se inscribía perfectamente en la perspectiva general — y de muy larga duración — en pro de la emancipación popular. Pero la infinita "transición a la democracia" que vino enseguida, los acomodos y reacomodos de la clase política, la decepción y desmovilización popular, demostraron que sólo por un efecto de espejismo el movimiento popular había parecido rearticularse duraderamente al calor de las protestas de la década de 1980. En realidad, una vez que el "enemigo visible" se metamorfoseó tras el discurso de reencuentro y reconciliación nacional, el movimiento popular perdió su norte, quedando en evidencia que el *ethos colectivo* de la emancipación de los trabajadores que lo había animado durante tanto tiempo, se había extraviado o difuminado en medio del derrumbe ideológico que acompañó al fin del llamado "campo socialista" y en el empeño criollo por recuperar la democracia.

¿Cuál es el *ethos* colectivo del mundo popular en el Chile actual? ¿Hay un cuerpo de ideas básicas que articule sus demandas? ¿Se manifiesta una aspiración común — como fue en la época de Allende la conquista de un gobierno popular — que cristalice en un objetivo político fácilmente identificable las distintas reivindicaciones sectoriales? ¿Y si esto no es así, sin ese *corpus* mínimo de ideas y anhelos compartidos, es posible concebir la existencia de un movimiento popular?

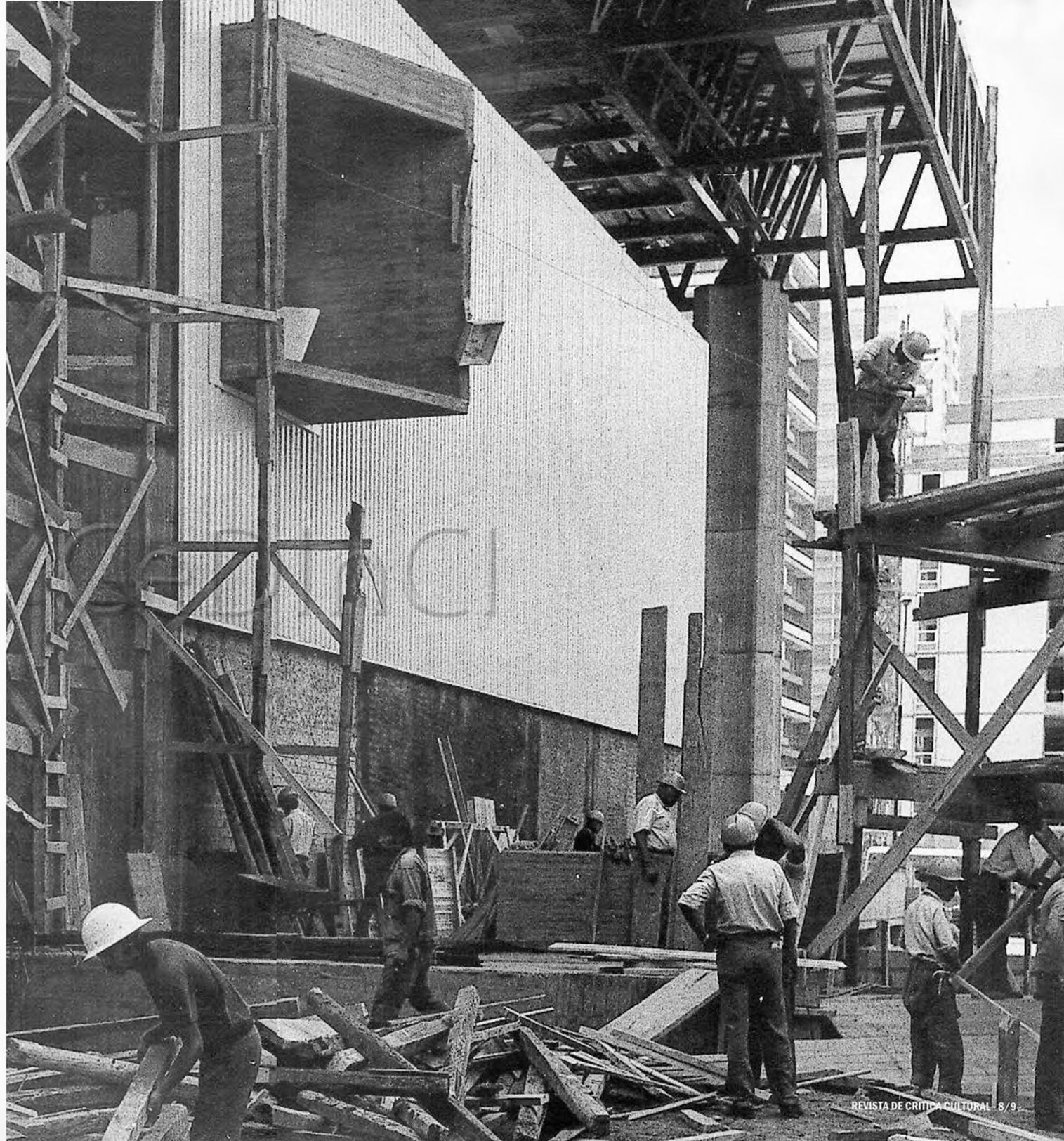
La verdad es que los sectores populares han desaparecido en tanto sujetos políticos, quedando reducidos a la categoría de clientela que oscila entre las alternativas de administración "progresista" del modelo o gestión "populista" de derecha del mismo. El mercado ha reemplazado a las formas de asociatividad que hicieron posible la existencia de un movimiento popular que tuvo expresiones sociales y políticas, una de cuyas vertientes históricas más caudalosas y persistentes fue el allendismo. (...)

#### Notas

Sergio Grez Toso, *De la "Revolución del pueblo" a la huelga general: Génesis y contenido ideológico del movimiento popular en Chile (1919-1990)*, Santiago Ediciones de la DIBAM - RIL, Ediciones, 1998. "Una mirada al movimiento popular desde la izquierda", *Coloquio* (Santiago, 1995), en *Cuadernos de Historia*, N° 19, Santiago, diciembre de 1999, pp. 157-193. "Transición y crisis: tensiones de fondo, conflictos personales y huelgas obreras en Chile (1981-1993)", en *Historia*, vol. 33, Santiago, 2000, pp. 141-225.

Tomás Moulian, "Violencia, gradualismo y reformas en el desarrollo político chileno", en *Adrián Fontana, Ángel Fariña y Tomás Moulian, Estudios sobre el sistema de partidos en Chile*, Santiago, FLACSO, 1995, pags. 13-68. La idea del "gran trabajo" descrita en esta respuesta me es específicamente de pags. 49 y 50.

\* Tomás Moulian, *Gobernación autoritaria y populismo*, Alianza, Santiago, LOM Ediciones - Universidad ARCIS, 1996.



## Jacques Chonchol

Ex-Ministro de Salvador Allende;  
Director del Doctorado en el Estudio de las Sociedades Latinoamericanas, Universidad ARCIS

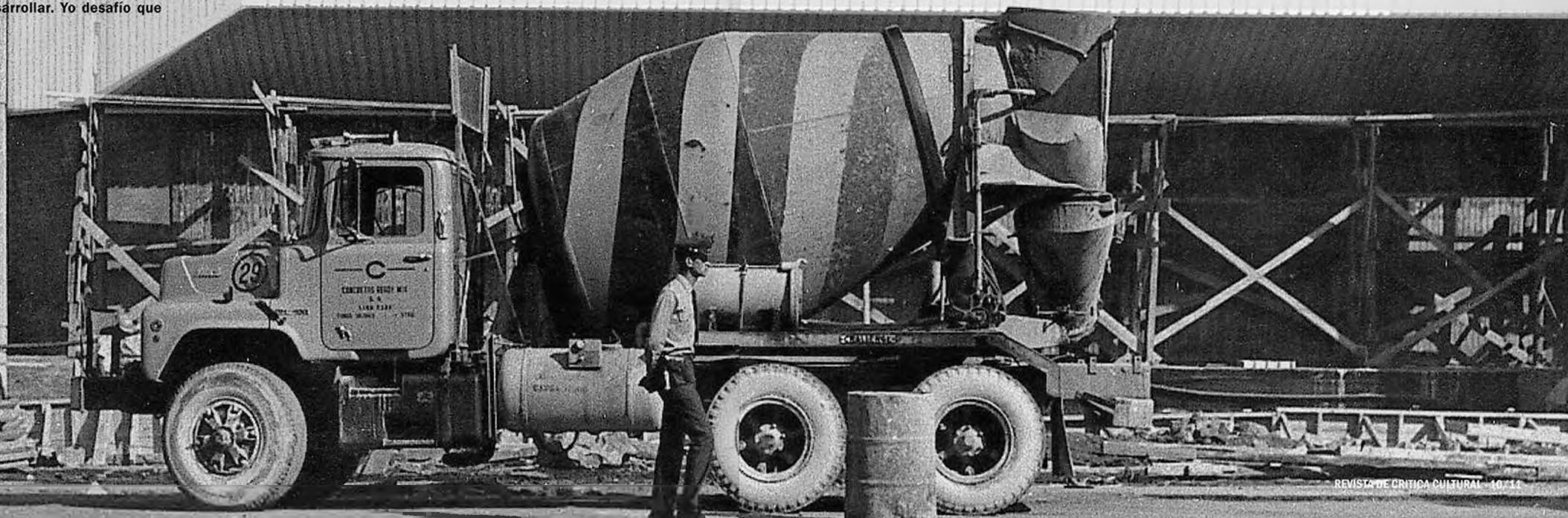
Yo no voy a hacer un análisis ni de la persona ni de la trayectoria política de Salvador Allende. Primero, no soy historiador ni tampoco fui compañero de Allende toda su vida. Lo conocí fundamentalmente en los últimos años. Yo venía de otra corriente política que era la Democracia Cristiana en cuyo partido, a fines del 68, se produjo una ruptura: salimos un grupo de militantes para constituir el Mapu que fue parte de la Unidad Popular hasta que una parte del Mapu se transformara en Izquierda Cristiana que también formó parte la Unidad Popular.

El contacto que yo tuve con Allende fue fundamentalmente durante la campaña presidencial en que colaboramos estrechamente y durante los dos años de su gobierno en que fui Ministro de Agricultura. Yo quiero testimoniar de dos cosas que me parecen importantes. Primero, de lo que fue ese gobierno desde el punto de vista de la realización porque uno tiene la impresión, al ver los programas de televisión hoy día, que ese gobierno de la Unidad Popular fue puro caos, desorden y anarquía. Ese gobierno fue extremadamente realizador y, en un período muy breve (en menos de tres años), hizo una serie de transformaciones de extraordinaria importancia para este país. Primero, nacionalizó el cobre: lo que era la gran riqueza de Chile todavía parcialmente en manos de compañías extranjeras. Lo hizo a través de una reforma constitucional que prácticamente todo el país tuvo que apoyar porque era un reclamo fundamental que, desde ya, estaba también contenido en el programa del otro candidato demócrata-cristiano Rodomiro Tomic. Segundo, profundizó el proceso de reforma agraria y prácticamente terminó con el latifundio en Chile. La agricultura en Chile se desarrolló sobre las bases de una agricultura moderna que hubiera sido imposible con el sistema latifundiarío. Ese sistema es una lacra que permitía que la gente acumulara tierras sin pagar impuestos, explotara a los campesinos como siervos, dándole así una sobre-representación a los partidos de derecha porque manipulaban el voto de los campesinos. Se nacionalizó la banca porque se tenía el concepto, en esa época, de que los recursos financieros de este país les daban un poder grande a ciertos capitalistas privados en lugar de estar en manos de la nación a través del estado. Se expropiaron algunas grandes industrias, no todo el sistema industrial, pero sí se pensaba que los grandes monopolios industriales debían estar en manos del estado. Se mejoró los salarios y las previsiones sociales de un modo incluso desbordante que trajo varios problemas después. Se hizo una gran política cultural, con el ejemplo de dos grandes realizaciones: la editorial Quimantú que colocó miles de libros al alcance del pueblo chileno y el auge de la Nueva Canción chilena. Aumentó considerablemente la construcción de viviendas para los más necesitados y se le dio participación a los obreros y los campesinos en la construcción de las políticas a desarrollar. Yo desafío que

me digan qué otro gobierno, en tan corto espacio de tiempo, ha logrado tantas realizaciones en este país.

Quiero hacer también un testimonio personal respecto de una experiencia que viví con Salvador Allende y que demuestra su profundo espíritu de justicia. Una de las cosas de las que poco se habla y que, sin embargo, tenía una dimensión simbólica profunda es la restitución de tierras al pueblo mapuche. Por la guerra que se llamó de manera eufemística "Pacificación de la Araucanía", se les fueron quitando las tierras a las comunidades indígenas para dárselas a colonos chilenos o extranjeros. S. Allende se dio cuenta primero, durante su campaña, de esta legislación indígena absolutamente discriminatoria. Cuando asume el poder, Allende responde a una invitación que le hacen las Asociaciones Mapuches de Cautín para asistir a una gran manifestación, en diciembre del 70, en el Estadio de Temuco, donde las comunidades mapuches le entregaron su nuevo proyecto de ley pidiéndole que lo hiciera suyo como Ley de la Unidad Popular. Allende les dijo que sí y, después de darle una forma legal, mandó ese proyecto al Parlamento donde fue posteriormente revisado y modificado. Creo que es la única ley en la historia de esta república que no fue elaborada por los diputados y senadores, por el ejecutivo político, sino por el propio pueblo. También le preguntaron los mapuches qué hacer para recuperar las tierras usurpadas, ya que la legislación existente no lo permitía. Allende propuso aplicar la ley de reforma agraria para que los predios expropiados permitieran devolverle esas tierras usurpadas al pueblo mapuche. Y me ordenó que trasladáramos el Ministro de Economía a Temuco...

Estaba el tema de las múltiples tomas: tomas de terreno, de fábricas, de fondos, etc... No hay proceso de transformación en el mundo que se haya hecho sin una presión social desde la base. Aunque esas tomas correspondían a razones de justicia profunda, muchas veces esas tomas eran ilegales. Aquellos que se oponían reclamaban a los tribunales de justicia para que se mandara la fuerza pública a desalojar a los ocupantes. Allende se preguntaba qué hacer. El decía que, en su gobierno, no iba a aceptar jamás que se usara la fuerza pública para desalojar al pueblo. Indudablemente que esto trajo varios problemas porque, a medida que iban proliferando las tomas, crecía la sensación de desorden y anarquía de la que se aprovechaba la oposición contra el gobierno para acentuar su imagen de inestabilidad. Allende vivía la disyuntiva moral de saber si dejar al pueblo usar de la libertad e, incluso, muchas veces, abusar de ella, o si reprimirla. Quiero terminar esta intervención subrayando ese espíritu libertario profundo de Allende. Su principal temor era no parecerse a tantos gobiernos de Chile y América Latina que empezaron como gobiernos de izquierda y terminaron como gobiernos conservadores de derecha bajo las presiones del contexto nacional e internacional.



## Ricardo Núñez

Senador de la República, Partido Socialista

Desde el punto de vista histórico, creo que es muy poco objetivo que nosotros sólo miremos a Salvador Allende disparando desde la Moneda el 11 de septiembre contra los tanques que asediaban el palacio presidencial. Allende es mucho más que eso. Fue mucho más que aquel día que lo inmortalizara.

Desde luego fue hijo de las grandes contiendas sociales, de las luchas populares de fines de los 20 y principios de los años 30. Siendo estudiante de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, fundó el grupo Avance; espacio de jóvenes universitarios que, proviniendo de sectores acomodados de nuestra sociedad, poseían un fuerte compromiso con las ideas de izquierda, con las ideas progresistas, con la lucha por la liberación de los más explotados de nuestra patria. Ese grupo tuvo un rol protagónico en la derrota de la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo en 1931 y en la recuperación de la libertad y la democracia.

Durante la guerra civil española vibró por la causa republicana. Como tantos hombres y mujeres de ideas de avanzada, sintió profundamente su derrota. Movido por la preocupación que le suscitaba el avance que el fascismo experimentaba en Europa y en Chile, se dio a la tarea de crear, junto a otros preclaros dirigentes progresistas de la época, el Frente Popular -coalición de fuerzas políticas de centro-izquierda -ocupando luego de su triunfo la cartera de Ministro de Salud. Desde esa alta responsabilidad impulsó un conjunto de medidas destinadas a enfrentar la desnutrición infantil, la carencia de medios hospitalarios y el abandono sanitario que padecían millones de chilenos.

Luego de la inédita pero abortada experiencia de la República Socialista de los 12 días, Allende participó desde su joven entusiasmo a construir una fuerza política capaz de representar las ansias de cambio que se anidaban en vastos sectores de nuestra población. Nació así, un 19 de abril de 1933, el Partido Socialista de Chile. Siendo su subsecretario General, es elegido por primera vez diputado por Valparaíso en 1937, cargo en el cual es reelegido, para convertirse desde 1945 en Senador de la República.

Durante su larga trayectoria como parlamentario y dirigente político, Allende siempre fue un gran animador de la unidad de la izquierda, de la unidad del pueblo. Mas allá de las diferencias políticas e ideológicas buscó, no siempre con éxito, alcanzar los más altos niveles de unidad posible, entendiendo que esas diferencias no debían hacernos olvidar que lo principal era derrotar a la oligarquía prepotente, al gran capital y al imperialismo. Esa invariable conducta lo llevó a convertirse en cuatro oportunidades candidato a la Presidencia de Chile, encabezando en cada oportunidad entendimientos partidarios que fueran más allá del propio Partido Socialista. Desde allí proyectó su creciente liderazgo sobre un vasto movimiento popular que lo llevó a conquistar la primera magistratura de la nación en 1970.

Al contrario de lo que muchos han señalado ya sea por ignorancia o por el afán de distorsionar los hechos, Allende nunca fue marxista-leninista. Algunos dicen que era marxista. Sin embargo, yo tengo la impresión de que Allende sólo tenía una aproximación general a las ideas fundamentales de la teoría social, política y económica de Carlos Marx. No conozco discursos de Salvador Allende donde él reivindicara el marxismo como una cosmogonía que nos pudiera explicar los avatares del capitalismo. Y por cierto, menos fue leninista.

No son sólo las figuras de Fidel Castro y del Che Guevara las que marcan la vida de Salvador Allende. Con mucha antelación, Salvador Allende se sintió muy cercano a hombres como Lázaro Cárdenas que no tenía precisamente la imagen del revolucionario que cambia la estructura de dominación en México. Salvador Allende tenía esa relación tan estrecha con Lázaro Cárdenas porque es el hombre que nacionaliza



el petróleo en México, tal como él nacionaliza el cobre en Chile. Tuvo también una relación bastante estrecha con una figura muy controvertida por la izquierda chilena, el peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador del APRA, que tampoco era el símbolo del revolucionario latinoamericano, muy por el contrario, ya que era anticomunista y antisoviético.

Salvador Allende nunca fue Secretario General o Presidente del Partido Socialista. Incluso en los últimos años, curiosamente nunca fue miembro de la dirección máxima del Partido. En los últimos congresos del Partido Socialista, desde aquel celebrado en 1965 en Linares para adelante, nunca ocupó un cargo significativo al interior del Partido debido fundamentalmente a que un sector importante de éste, incluso antes del Congreso de Chillán de 1967 donde el partido se abre a que la posibilidad de que el cambio del país pase por la vía armada, consideraba a Salvador Allende como un gran reformista. Por ello, no es de extrañar que al interior del Comité Central del PSCH, del que Carlos Altamirano y yo éramos miembros, perdiera por un voto su designación como candidato socialista a la Mesa de la Unidad Popular.

Que el Partido Socialista ponga en la mesa de la Unidad Popular a una figura como Salvador Allende, que no tiene una mayoría fuerte dentro de la superestructura del Partido, es evidentemente una contradicción, que explica de alguna manera otras contradicciones posteriores que se manifiestan durante su mandato presidencial. El liderazgo de Allende era cuestionado desde el punto de vista ideológico, aunque no desde el punto de vista de su enorme prestigio en las clases populares. No había ninguna otra figura del Partido Socialista que compartiera estos rasgos de liderazgo popular. Tanto es así que cuando se hace un plebiscito interno en el PS, Allende gana abrumadoramente en las bases del partido. Esta es una contradicción que explica entre otros el desenlace final del 11 de septiembre donde Salvador Allende queda prácticamente solo en La Moneda. No avanzan las columnas de la izquierda chilena a través de las calles de Santiago para defender su gobierno.

Respecto de su pensamiento político, Allende era un convencido que la llamada vía pacífica era factible de implementar sin traumas, que la "vía chilena al socialismo" tenía sentido en realidades como la nuestra, que no era un mero artificio para engañar incautos. Creía sinceramente en la existencia de condiciones por las cuales era posible dar cabida a un cambio de naturaleza revolucionaria que estableciera las bases de una sociedad socialista en "pluralismo, democracia y libertad". Esta frase, llena de contenido conceptual, era la síntesis de sus más íntimos convencimientos. "Pluralismo, democracia y libertad". Ella la repitió hasta la saciedad sin que fuera asumida no sólo por los lógicos adversarios que tenía nuestra experiencia, cuestión entendible por quienes no cejaron un instante de complotar contra su gobierno, sino por parte significativa de la propia izquierda que apoyaba el gobierno, de muchos que como yo pensábamos que solo extremando las contradicciones, sin romper con nuestra institucionalidad democrática, podíamos superar las dificultades de todo orden que ahogaban el camino transformador.

La demostración más evidente de esta contradicción insalvable que se vivió al interior de los partidos de la Unidad Popular es el hecho que Allende jamás pronunció una sola frase, una sola opinión que llevara a pensar que él estaba por una definición diferente al camino democrático. Prueba evidente de esta afirmación es que en Chile se respetó hasta el último día del Gobierno Popular la libertad de prensa, de reunión, los derechos de las personas establecidos en la Constitución vigente; que el parlamento funcionó normalmente, que el poder judicial lo hizo de igual manera aunque ambos poderes estatales asumieran conductas que, miradas desde la perspectiva del tiempo, coadyuvaban a propiciar el golpe de Estado en el que se comprometieron las FF.AA. de Chile.



## Sergio Micco y Mauricio Jelvez

Centro de Estudios para el Desarrollo, CED

No es fácil hablar de Salvador Allende para quienes no fuimos sus partidarios. Menos en esta fecha en que se conmemoran treinta años de su trágico suicidio. No lo es tampoco porque se trata de la vida pública que se prolongó por más de cuatro décadas. Y a un hombre no se le puede juzgar por el destello final de su vida, por fulgurante que este haya sido. Los griegos sólo proclamaban felices a los hombres que ya muertos habían hecho de sus vidas un relato digno de ser contado y admirado. Y los católicos proclaman santo a quienes ya largamente se han separado, primero espiritualmente y luego corporalmente, de la condición humana.

Quisierámos entonces hablar de Allende a la luz de la mirada larga de su vida entera y hacerlo utilizando como prisma los valores que la tradición republicana dice deben caracterizar al líder de un pueblo.

Salvador Allende es un hombre dotado de las virtudes de la política en forma eminente. Pero también de sus defectos.

Se trata de un hombre prudente, es decir, que posee la sabiduría práctica que le permite calibrar medios idóneos y viables con fines nobles y valiosos. El sabía de la dura dialéctica entre realidades muchas veces exasperantemente limitantes con sueños siempre desbordantes en quienes tienen el corazón generoso. No se dejaba embotar por teorías delirantes, abstracciones ideológicas ni políticas que no tenían en cuenta la dura realidad de las correlaciones de fuerzas, magnitud e intensidad de los intereses encontrados o pasiones involucradas.

Jorge Arrate y Eduardo Rojas recuerdan a Oscar Waiss cuando dice que “En una asamblea estudiantil decidimos lanzar a Salvador a la tribuna, porque su lenguaje de ‘burgués bien educado’ facilitaría la recepción de parte de estudiantes no izquierdistas”: “... tenía un aspecto de pije, no lo conocían y su origen social era claramente burgués. Subió el Chicho –ya lo llamábamos así- al sitio señalado y comenzó su intervención diciendo con voz sonora: ‘Señores’. Los radicales, que eran el núcleo principal de la derecha, se callaron pensando que se trataba de uno de ellos; nosotros permanecemos en silencio muy desconcertados, pues en esos tiempos decir ‘señores’ en vez de ‘compañeros’ significaba una herejía repudiable. Pero Salvador tenía una notable inteligencia y agilidad mental extraordinaria; se lanzó pues a hablar de la libertad, tema en que nadie se atrevía a manifestar discrepancias o reservas y, en nombre de esa libertad reconquistada, pidió respeto para exponer sus ideas. Logró el milagro y, desde ese día, se convirtió en un líder universitario”.

Se trataba también de un hombre que buscaba

la justicia. Que el hombre dé al hombre lo que a éste le corresponde: he aquí la base de toda ordenación justa de la sociedad. No debemos quitarle al otro lo que en justicia le corresponde: su vida, dignidad, derechos y propiedad. El hombre justo es aquel que es movido por una voluntad constante e inalterable de dar a cada cual su derecho. Justa es la mujer que no se reconoce sierva de nadie pues sabe de su dignidad como un derecho y un deber. Justa es la mujer que reconoce los derechos del otro, particularmente del extraño, que no es cubierto por el amor, o del más débil, que no se puede defender.

En eso creía Salvador Allende y por eso optó por la causa de los trabajadores. Su madre católica, según Eugenio González le habría puesto por nombre en el certificado de nacimiento el de Salvador Isabelino del Sagrado Corazón de Jesús Allende Gossens. Ese pije terminó optando libremente por ser el “compañero Presidente”. Es bueno recordar que Salvador Allende como Ministro de Salud logró conciliar una reforma con personas como el conservador socialcristiano Carlos Cruz Coke o el liberal Arturo Alessandri cuyos beneficios aún gozan los más pobres de Chile. El escribe el libro *Realidad médico social de Chile* y traza un programa político de reforma que hará realidad.

Salvador Allende también demostró tener un corazón fuerte. Los pueblos requieren de jefes fuertes, que hagan de la fortaleza virtud. Esta consiste en la capacidad de estar dispuesto a sufrir y ser herido una vez más, con tal que nuestra dignidad y derechos personales y comunitarios no sean pisoteados. Por cierto la fortaleza, en cuanto virtud, supone un fin noble. E igualmente la fortaleza debe ser conducida por la prudencia. Esta es aquella sabiduría práctica que nos enseña en cada caso a distinguir la cobardía y la temeridad de la fortaleza. Quien entra al campo de batalla en condiciones absolutamente adversas, pudiendo evitarlo noblemente, es un temerario. Quien huye de él, debiendo y pudiendo combatir, es un cobarde.

Eso fue lo que permitió, una y otra vez ser derrotado y volver a pararse. Allende afirma ya en 1952 su confianza en que la opción que ha hecho crecerá, y muestra una firme voluntad y determinación de ser Presidente de Chile: “... voy a ser candidato a la Presidencia de este país. No quiero ser Presidente de este país por ser Presidente. Quiero ser Presidente de este país para cambiarlo. Yo quiero ser el Presidente de Chile (...) porque quiero convertir a este país en lo que siempre debió haber sido, en un gran país (...) Aún somos pocos, pero llegará el día en que seremos muchos”.

Si ese era el hombre, ¿por qué tan grave fracaso, el de los "mil días"? Quizás justamente porque sus virtudes, como ocurre con los grandes hombres, siempre van acompañadas de graves defectos.

Es cierto que la intervención de la CIA en Chile fue condicionante central en el Golpe de Estado. Pero no es menos cierto que todo su fuerza ya había sido puesta a prueba en 1970 con el asesinato de el Comandante en Jefe del Ejército, pero la democracia chilena no sucumbió en esa oportunidad. Pero sí lo hizo mil días después. Es cierto que jamás la Unidad Popular contó con una mayoría política, social e institucional capaz de llevar a cabo un proyecto revolucionario. Sin embargo, no es menos cierto que Salvador Allende logró llegar al poder con el voto unánime de los parlamentarios del PC, del PS y de la DC en el Congreso Pleno de 1970. Y es además cierto que logró nacionalizar el cobre por la casi totalidad del Congreso y del pueblo de Chile a su favor.

¿Qué pasó entonces entre 1970 y 1973? Muchas y muy desgraciadas cosas pasaron, sin embargo y si de Salvador Allende debemos de hablar, entonces diremos que sus virtudes se hicieron defecto y el exceso de prudencia, justicia y fortaleza lo condujeron a la muerte a él y a la democracia chilena al matadero, como lo dijera proféticamente Radomiro Tomic.

Cuando Allende llega al poder, Chile ya era un escenario más de la "guerra fría" y de un alarmante quiebre del Estado de compromiso y de la capacidad de llegar a acuerdo. Se había desatado una espiral de intransigencia. Eduardo Frei M. proclamó, en su campaña presidencial de 1964, que "ni por un millón de votos cambiaría una coma de mi programa"; Aniceto Rodríguez, secretario general del PS, señaló ese mismo año que "a la DC le negaremos la sal y el agua"; Luis Corvalán expresó en 1969 su oposición a un acuerdo de centro-izquierda diciendo "con la DC nada y con Tomic ni a misa".

El gobierno de la Democracia Cristiana había colaborado en el proceso de polarización política al actuar como fuerza disruptiva entre 1964 y 1970, provocando una doble centrifugación; empujó a la derecha hacia la derecha, y a la izquierda hacia la izquierda. La derecha se sintió amenazada y violentada por las reformas estructurales que promovió el gobierno de Frei Montalva, particularmente la reforma agraria y la sindicalización campesina. De otro lado, las iniciativas gubernamentales más radicales obligaron a la izquierda a diferenciarse, haciendo aún más explícito un programa extremo. De no hacerlo así, corría el riesgo que la DC le expropiara su discurso revolucionario<sup>2</sup>.

La izquierda chilena también sufrió un proceso de ideologización extrema. En rigor, la radicalización socialista tuvo lugar a fines de los años cincuenta. La influencia de la revolución cubana fue evidente y fundamental, sobre todo en el caso del Partido Socialista<sup>3</sup>. La revolución cubana



planteó a la izquierda chilena la posibilidad y la obligación de acceder en forma rápida al socialismo, desechando todo planteamiento gradualista. En este contexto, el Partido Socialista se declaró marxista-leninista, reveló la ilusión de la vía pacífica y llamó a prepararse para vencer militarmente en el inevitable enfrentamiento con la burguesía. El Partido Comunista comenzó a ser desbordado por la ultra-izquierda y por su propia retórica y definición marxista-leninista<sup>4</sup>.

La derecha, después de sus reveses electorales, particularmente el que sufrió en las elecciones parlamentarias de 1965, experimentó una total transmutación. Los antiguos y democráticos partidos de la derecha tradicional, el Liberal y el Conservador, se fusionaron, creando el Partido Nacional. La nueva organización fue progresivamente controlada por grupos nacionalistas de franca tendencia autoritaria. Ello, sumado a la creciente sensación de amenaza que experimentaba su base social, producto de las reformas estructurales promovidas por el gobierno de Eduardo Frei y del agresivo discurso y comportamiento de la izquierda, haría de la derecha un actor político radicalizado y proclive al autoritarismo<sup>5</sup>.

El Estado de compromiso mesocrático comenzó a experimentar una tensión que corroía sus cimientos. La dinámica política que lo sustentaba, basada en el arreglo y la transacción, fue reemplazada por la lógica de la guerra, del conflicto total. Tres tercios irreconciliables, dotados de proyectos comprensivos y excluyentes en su contenido y/o estilo, hicieron de la tolerancia, el diálogo y el acuerdo -instrumentos democráticos imprescindibles-, defectos políticos a erradicar.

Hasta hoy se debate la relación existente entre el régimen democrático y la Unidad Popular, como formulación teórica en cuanto vía chilena al socialismo y como experiencia concreta de gobierno. Para sus más decididos opositores, el proyecto socialista chileno resultó absolutamente irreconciliable con la democracia y la legalidad. La declaración de la Cámara de Diputados del 23 de agosto de 1973, y los pronunciamientos de la Corte Suprema, particularmente el que denunció un perentorio o inminente quiebre de la juridicidad del país, constituyeron las expresiones más claras de ello. Para otros, sus partidarios más cercanos, el gobierno de la Unidad Popular fue víctima de una legalidad que respetó, pero que sus adversarios estuvieron dispuestos a acatar sólo en la medida que defendiera sus privilegios e intereses. Cuando la institucionalidad demostró ser incapaz de jugar este rol, no dudaron en destruirla. El golpe de Estado contra un gobierno constitucional, legítimo en su origen y ejercicio, así lo probaría. Según esta visión, los enemigos de la democracia estuvieron ubicados en la oposición al gobierno de Salvador Allende y no al interior de éste.

En el pensamiento de Allende, la vía chilena al socialismo, que supuestamente constituía el marco

ideológico-estratégico de la coalición de gobierno, era genéricamente una opción democrática que buscaba terminar con las estructuras económicas tradicionales, para iniciar la construcción del socialismo. Consistía en una propuesta de democratización no capitalista<sup>6</sup>. El objetivo era transitar por una vía que no empleara la violencia física organizada ni la ruptura violenta del orden institucional. Se rechazaba la tesis del partido único y de toda forma dictatorial de gobierno, apostando en cambio a la democracia y al uso recto de la institucionalidad y legalidad vigente como medios para acceder al socialismo. Quedaban así desechadas las tesis marxista-leninistas ortodoxas que veían en el Estado sólo una superestructura de dominación clasista. Asimismo, era rechazada la idea de concebir la democracia como simple realidad formal, desprovista de contenidos sustantivos.

Lamentablemente el pensamiento de Salvador Allende era minoritario en la coalición de gobierno, e incluso al interior de su propio partido. Los principales partidos de la Unidad Popular - Socialista y Comunista- divergían entre sí y con el Presidente de la República en puntos cruciales. Las discrepancias eran posibles, pues el programa básico de la Unidad Popular, aprobado por unanimidad el 17 de diciembre de 1969, representó una solución de compromiso entre las discrepancias estratégicas y tácticas existentes en las organizaciones de izquierda. Especialmente, entre los partidos Socialista y Comunista que representaban más de las tres cuartas partes del contingente electoral de la coalición gubernamental<sup>7</sup>.

El Partido Socialista quería ver en el programa de gobierno un mandato claro para iniciar de inmediato la construcción del socialismo. Era la revolución, no el reformismo; el socialismo y el poder popular los que harían avanzar al proletariado en su lucha contra la burguesía. Su exigencia era categórica: avanzar sin transar.

Para el Partido Comunista, en cambio, la táctica consistía en unir a los más amplios sectores y aislar a los enemigos fundamentales de la revolución. Esto exigía la gradualidad del proceso, al que sólo se le pedía crear las condiciones previas para la transición al socialismo. La tarea era avanzar consolidando.

Las divergencias fueron resueltas mediante una opción negociada en la que se optó por imprimirle un carácter revolucionario al discurso programático de la Unidad Popular, como lo proponía el Partido Socialista<sup>8</sup>. A cambio, el Partido Comunista logró incluir a radicales y socialdemócratas en la coalición, a pesar de la oposición socialista.

Por otra parte, en el debate en torno al camino a seguir -institucional o insurreccional- se reflejó con más claridad aún el cuestionamiento a la ideología democrática. Pese a que, como vimos, la opción allendista era categórica, la tradición marxista-

leninista y la propuesta socialista oponían objeciones fundamentales. Basándose en los predicamentos clásicos, un sector de la Unidad Popular -su polo insurreccional o extremista- sostenía la imposibilidad de acceder al Estado burgués y controlarlo sin destruir tales poderes e instituciones opresoras. Era necesario crear un poder dual, alternativo al burgués. En esta posición se ubicó el Partido Socialista. Sin embargo, texto en mano, se alzó en contra el Partido Comunista, recurriendo al propio Lenin. "Mientras sea un instrumento mediante el cual la burguesía ejerza violencia sobre el proletariado, no había más consigna revolucionaria que una: destruir ese Estado. Pero cuando el Estado sea proletario, cuando sea para el proletariado un instrumento de violencia sobre la burguesía, entonces seremos partidarios, íntegra e incondicionalmente, de un poder firme y del centralismo", había sostenido el líder de la revolución de octubre<sup>8</sup>.

No es de extrañar entonces que Salvador Allende, el más ardoroso contradictor de la tesis insurreccional, y a quien incluso se le quiso negar la palabra en el Congreso de Chillán, se sintiera absolutamente minoritario en su partido. Tanto así que, en 1969, los miembros del Comité Central Socialista lo nombrarían candidato presidencial, con 12 votos a favor y 13 abstenciones, aunque a esas alturas era candidato único, ante el retiro de Aniceto Rodríguez<sup>9</sup>. Al 11 de septiembre de 1973 el Partido Socialista prácticamente había roto relaciones con Allende, quien estaba decidido a llamar a plebiscito para resolver el conflicto sobre las tres áreas de la economía, aun contra la opinión de su partido<sup>10</sup>.

Desde otro ángulo, el debate en torno a si la "vía chilena al socialismo" optaba por un modelo de sociedad democrático como proyecto final, no posee respuesta clara. Ello jamás fue dilucidado al interior de la Unidad Popular, pues en este vital aspecto no había acuerdo y todo quedaba en la semi oscuridad. A tal extremo alcanzó la ambigüedad dentro de la coalición gubernamental, que la polémica estalló a raíz del Mensaje del Presidente Allende al Congreso Pleno el 21 de mayo de 1971, que es un texto fundamental del proyecto "allendista". En aquella oportunidad algunos dedujeron que el segundo camino al socialismo no desembocaba en la dictadura del proletariado.

Este recuento muestra que para algunos miembros de la Unidad Popular el socialismo debía construirse en democracia, pluralismo y libertad. Para otros, su inicio pasaba por una dictadura que desembocaría, como en las otras experiencias históricas, en una sociedad totalitaria.

De esta forma, la opción revolucionaria y socialista del programa básico de la UP, la ambigüedad en torno al respeto o quebrantamiento de la institucionalidad del '75 y el jamás esclarecido objetivo final del gobierno de Salvador Allende, conforman un cuadro de cuestionamiento

ideológico de la democracia y de fuerte deslegitimación de este régimen político.

No es de extrañar que este debate no resuelto jamás restó toda coherencia a la acción del gobierno. Aumentó las desconfianzas en la Democracia Cristiana cuyos líderes de 1970 y 1971 le pidieron que los "ayudara a ser allendistas" y que a partir del paro de octubre de 1972 se empezaron a pasar en masa a la salida extrainstitucional. Y, por cierto, tal ambigüedad contribuyó a enajenar a las capas medias y al propio Ejército, cuyo Comandante en Jefe fue nada menos que Carlos Prats hasta agosto de 1973.

¿Y Salvador Allende, dónde estaba Salvador Allende, en medio de este conflicto? El era el Presidente de Chile, Jefe de Estado y de Gobierno, nominaba a más de 120 mil funcionarios de su exclusiva confianza y dirigía un Estado que controlaba abrumadoramente la economía nacional. Gozaba del cariño popular y de una oratoria envidiable. Y era el presidente en una cultura ultra presidencialista que lo erigía como "el resorte principal de la máquina". No estábamos frente a un desprotegido hombre, sin capacidad de gobierno.

Creemos que Salvador Allende fue víctima de su autoimagen del compañero Presidente que jamás transigiría sus ansias de justicia y cambio. Y que su proverbial prudencia y capacidad de llegar a acuerdos lo salvarían. Mal que mal el había sido elegido con la derecha Presidente del Senado en el mismo momento que la izquierda latinoamericana lo hacía líder de OLAS. Y se sabía fuerte a tal punto que podía resistir mil golpes, incluso los proferidos por sus compañeros de partido. Siempre podría dar una batalla más y ser herido de nuevo. Y era tal su fortaleza que estaba dispuesto a morir por lo que creía era su deber.

Por el contrario tenía mucho sentir el fracaso de Pedro Aguirre Cerda. Este, y vuelvo al magnífico libro de Jorge Arrate y Eduardo Rojas, *La Memoria de la Izquierda chilena 1850-2000*<sup>11</sup>, en una de sus últimas reuniones con sus ministros, poco antes de morir, dice, relatando un paseo que había efectuado con su esposa: "Ayer domingo salí a andar en automóvil con la Juanita. Como de costumbre, hicimos el recorrido hasta Conchalí. En el camino encontramos a muchos obreros. Iban tan pobres, tan borrachos, tan tristes, como antes de que yo llegara al Gobierno. Le prometimos al pueblo sacarlo de la miseria, levantarle su nivel social, económico y moral... Me embarga el alma una profunda pena porque me imagino que el pueblo, al que tanto amo, pudiera pensar que lo he engañado".

Y sobre todo tenía ser recordado por la historia como el traidor. Romper la Unidad Popular y negociar con sus adversarios le pareció volver a repetir la vivencia de Gabriel González Videla. De él Neruda había partido por escribir durante la campaña: "Como a hermano, hermano fiel, y entre todas las cosas puras, no hay como este laurel,

el pueblo lo llama Gabriel". Y tras la Ley maldita, pasará a ser "el judas chileno": "... fue sólo un aprendiz de tirano y en la escala de los saurios no pasaría de ser un venenoso lagarto (...). El Presidente de la República, elegido por nuestros votos, se convirtió, bajo la protección norteamericana, en un pequeño vampiro vil y encarnizado".

Salvador Allende entonces optó por no optar. Salvador Allende aceptó una especie de gobierno colegiado con cuatro partidos, dos movimientos y ...el Presidente<sup>12</sup>. Las sesiones de gabinete eran verdaderas asambleas deliberativas donde concurrían no sólo los ministros, sino que también los presidentes de partidos, e incluso los líderes de las fracciones internas de cada partido de la Unidad Popular. En ellas Salvador Allende era un "compañero más". Muchas veces se retiraba de las mesas de reuniones y se iba al balcón que daba al Patio de los Naranjos diciendo: "sigan no más", "pónganse de acuerdo".<sup>13</sup> Y allí jamás se tomaron las decisiones que pudieron haber salvado la democracia chilena.

En efecto, el acuerdo con la Democracia Cristiana o la convocatoria a plebiscito pudieron haber salvado a la democracia chilena. Y Salvador Allende, como principal garante del Bien Común, debió haber optado. Pero el sabía que el acuerdo o el plebiscito conducirían al quiebre y derrota política de la Unidad Popular. Y ese fue un precio que no quiso pagar. Y preparó en silencio su discurso final. En él paradójicamente invocó la libertad de los hombres y de los pueblos que hacen su historia. El que había optado por el fatalismo. Entre tableteos de metralletas y estruendos de cohetes decidió, en último y trágico gesto, suicidarse junto con la democracia chilena.

En medio de las llamas y del humo, el republicano Maquiavelo lo habría acusado de haberse convertido en un triste "profeta desarmado" y de "haber amado más la salvación su alma, su lugar en la historia, que a la propia república cuya integridad debía cautelar". Pero su gesto final se realizó en medio de una cultura que no ama a los maquiavélicos profanos y sí a los que fundaron religiones y filosofías muriendo trágicamente por lo que creían justo.

Salvador Allende, maldito profeta desarmado, pero ante millones salvado en la cultura del "Sagrado Corazón de Jesús".

Notas:

<sup>8</sup> Molano, Tomás. *Estabilidad democrática en Chile: Una mirada histórica*. En: Walker, Ignacio y otros. *Democracia en Chile: Doce conferencias*. Ediciones Cuzilam. Santiago de Chile, 1986, pp. 135-138.

<sup>9</sup> Polizer, Patricia. *Altamirano*. Grupo Editorial Zeta. Buenos Aires, 1989, pp. 109.

<sup>10</sup> Molano, Tomás. *Estabilidad democrática en Chile*. Op. cit. pp. 137-139.

<sup>11</sup> Sobertasson, Justo. *La derecha democrática en Chile*. Mimeo. ICHEH. Santiago de Chile, sin fecha.

<sup>12</sup> Garetón, Manuel. *Autismo. El proceso político chileno*. Ediciones FLACSO. Santiago de Chile, 1983, pp. 44.

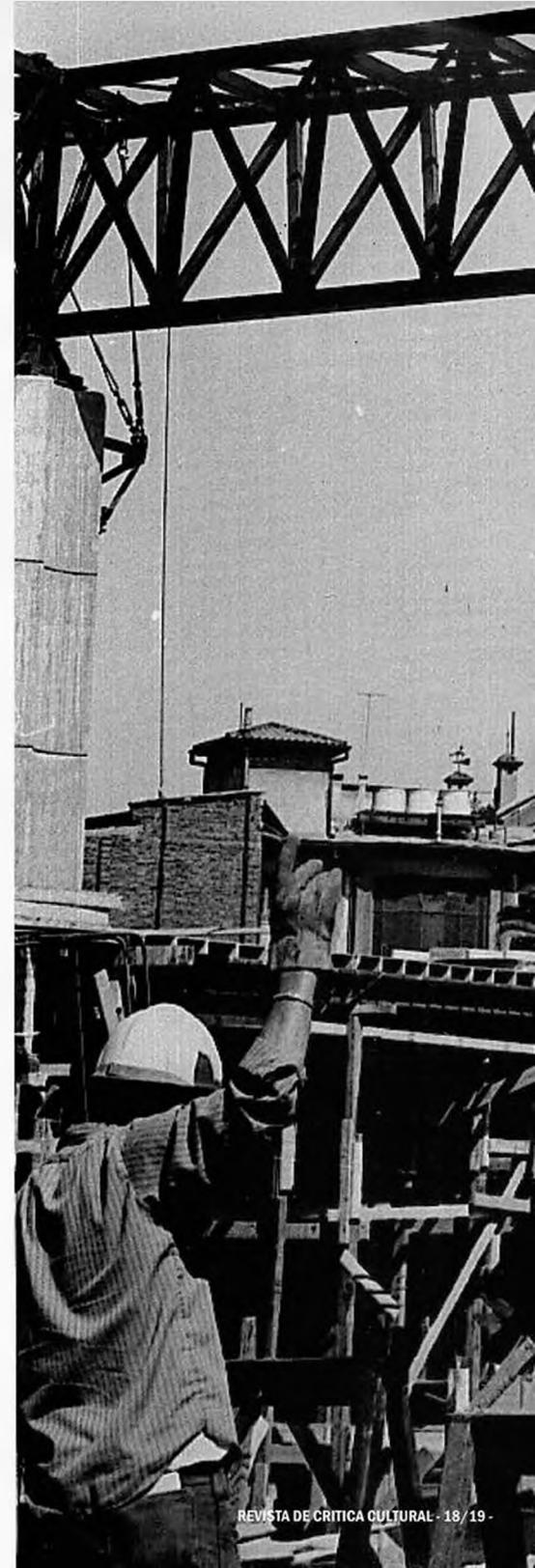
<sup>13</sup> Estamos considerando la elección municipal de 1971.

<sup>14</sup> Silva Solar, Jellio. *Programa de la Unidad Popular*. En: Gil, Federico. *Chile 1970-1973. Lecciones de una experiencia*. Tecnos. Madrid, 1975.

<sup>15</sup> Cárdenas, Gerardo. *Jonas Vía insurreccional y vía política: dos téticas*. En: *Revista de la UTE* N° 13-14. Santiago de Chile, 1973, pp. 21.

<sup>16</sup> Ver: Arruquidán, Gerardo. *De la vía chilena a la vía insurreccional*. Editorial del Pacífico. Santiago de Chile, 1974, pp. 70.

<sup>17</sup> Las difíciles relaciones entre Salvador Allende y el Partido Socialista chileno son tratadas extensamente en Walker, Ignacio. *Socialismo y Democracia*. Cuzilam-Hachette. Santiago de Chile, 1989, pp. 153-171.



# ANTES DE ...

LOS ESTADOS DE ÁNIMO

DE LOS ACTORES POLÍTICOS

EN LOS ÚLTIMOS DÍAS DE

LA UNIDAD POPULAR

**Ricardo Hormazábal**

Profesor del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile

Me enteré del golpe a las siete de la mañana. Me encontraba en Costa Rica: yo era el presidente de la Juventud Demócrata Cristiana y había informado la noche anterior que estábamos buscando los acuerdos para una salida democrática a una situación política que era angustiosa. Sólo pude volver a mi patria en el avión que salió a dejar a la Selección Chilena el 18 de septiembre para ir a jugar a Moscú...

Quiero recordar a alguien que no está en esta mesa, el General Carlos Prats, y lo quiero recordar a través de sus Memorias. En la página 509 de su libro, él relata que fue invitado por el Presidente Allende el 8 de septiembre. Cuenta que, " pese a lo cansado de su apariencia, Allende me sorprende por su optimismo, en medio de tan lúgubres momentos para él. ... Me expone su tesis sobre la situación. El P.D.C. tratará de convocar su renuncia, logrando una declaración de "inhabilidad" del Parlamento... Me dice que él se adelantará, llamando el lunes 10 a un plebiscito popular. Piensa que en este veredicto saldrá perdedor pero será una honrosa derrota para la U.P., porque habrá una expresión mayoritaria del pueblo que le permitirá evitar la guerra civil. Tragedia que ni la más cara consideración partidista lo induciría a promover. Lo contemplo estupefacto, dice Prats, como si mis oídos hubiesen malentendido sus palabras. Me observa interrogadoramente con sus ojos penetrantes. "Perdone Presidente" -digo lentamente, mientras Flores se echa atrás en su silla- "usted está nadando en un mar de ilusiones, ¿Cómo puede hablar de un plebiscito que demoraría 30 o 60 días en implementarse, si tiene que enfrentar un Pronunciamiento Militar antes de 10 días?" Esto fue el 8 de septiembre. Sigue Prats: "Me exployo en mi convicción de que es inminente un golpe "blando" o "cruento", según quienes sean los que den el empujón decisivo a las FF. AA.: el sector duro de la D.C. o la derecha económica. Me dice, "¿Entonces, usted no cree que habrá algunos regimientos leales al gobierno, capaces de contener a los golpistas? ¿Entonces no cree en la lealtad de Pinochet y Leigh, a quienes yo nombré como Comandantes?", me dice en tono alterado. "Presidente" -le respondo con calma- "yo creo en la lealtad de Pinochet y también en la de Leigh, pero ellos serán sobrepasados por los generales golpistas como lo será Montero por Merino en forma tan sorpresiva que no se producirá hacia abajo el quiebre de la verticalidad del mando, porque hasta los oficiales más constitucionalistas entienden que la división de las Fuerzas Armadas es la guerra civil". Con un tono sutilmente sarcástico, el Presidente me pregunta: "¿Qué salida ve usted entonces al problema que enfrenta la Unidad Popular, partiendo de la base que he tratado hasta el último de lograr un entendimiento con la Democracia Cristiana y que no quiero la guerra civil?". Y Prats le dice: "Que el lunes usted pida permiso constitucional por un año y salga del país. Es la única fórmula para que pueda preservar la estabilidad de su gobierno porque así volverá en gloria y majestad a terminar su período", le responde. "El Presidente alza

el busto en su asiento y me mira con una expresión que nunca olvidaré porque son sus ojos y no sus labios los que me dicen "¡Jamás!".

En los días antes del golpe, cuando el General Prats hacía este diagnóstico, nosotros nos sentíamos conmovidos, porque el golpe de estado era como una de esas tragedias griegas que Rodomiro Tomic siempre nos relataba. En la tragedia griega, no sólo el autor sabe lo que va a ocurrir, lo saben los actores y el público y nadie hace nada por impedirlo.

Desde septiembre del 70, los demócrata-cristianos teníamos la impresión que el gobierno de Allende podía terminar en un golpe de estado. Hay un documento del 25 de agosto de 1971 que ustedes pueden investigar, un discurso que yo hice a nombre de la Juventud Demócrata Cristiana, donde recordando un documento del año 70, la J. D. C. dice que el gobierno de Allende puede tomar tres caminos posibles: el de la revolución democrática, el de la revolución totalitaria o el de la indefinición. Si adopta el primer camino, a Chile le va a ir bien y haría un gran aporte; si adopta el camino de la ultraizquierda, tendría como única perspectiva ganar una guerra civil, lo que es imposible, y si adopta el camino de la indefinición, va a caer por un golpe de estado. Dejo constancia que los redactores de este documento son los principales líderes de la Izquierda Cristiana que se fueron de la D.C en abril del 71. Este documento fue redactado por Pedro Felipe Ramírez que era el Presidente de la J. D.C cuando yo era el vicepresidente, y por el Presidente de la Comisión Política de la D.C que era en ese tiempo Luis Badilla Morales. Entonces, no está aquí la mala fe de los vendidos a los Estados Unidos, de los agentes de la CIA o los comprados por la derecha, como se usaba y aún se usa estigmatizar. Un análisis objetivo mostraba claramente las contradicciones de Allende y sus alianzas. Hasta donde recuerdo, el titular del diario *El Siglo* del 11 de septiembre de 1973 era "Todos a sus puestos de combate". El titular del diario *La Prensa* del mismo día, que tampoco circuló, decía: "Que renuncie Salvador Allende y todos los parlamentarios". El día anterior, todos los que éramos parlamentarios (yo era diputado a los 26 años, elegido por Santiago) renunciamos para que el pueblo chileno tratara de resolver una situación tan grave que el mismo Carlos Prats decía que no se solucionaría con un plebiscito. Eduardo Cerda que, en ese tiempo, era Secretario General del partido y diputado dice que la D.C, conversando con Carlos Briones, Ministro del Interior hasta el golpe, trató de buscar una salida en la línea del plebiscito que se iba a anunciar el lunes 10. Eduardo Cerda cuenta que, a las 6 de la tarde del lunes, lo llama Briones, para decirle que no se iba a poder anunciar el plebiscito debido a problemas internos. La verdad es que había un debate en la UP porque el Partido Socialista estaba en contra, la Izquierda Cristiana y el Mapu que dirigía Oscar Guillermo Garretón estaban en contra y sólo estaban dispuestos a apoyar esa salida el Mapu que dirigía Jaime Gazmuri, el Partido Comunista, el API y

el Partido Radical. En uno de los documentos escritos por el Partido Comunista, se pregunta porqué Allende demoró tanto en decidir lo que el P.C le había planteado como una opinión el lunes 10 a las 12. La respuesta fue que Allende no quería romper con su partido. Mirando la historia, cada uno tiene que asumir sus responsabilidades. Es cierto que en la Democracia Cristiana había golpistas, y yo podría dar los nombres de los demócrata-cristianos que se sorprendían de que uno se opusiera al golpe. Pero yo creo que el modo en que la D.C enfrentó al gobierno de Salvador Allende fue popular y democrático. Revisemos la historia. ¿Es verdad o mentira que los norteamericanos trataron de echar al gobierno de Frei Montalva en 1969? Estudien el libro de Armando Uribe, militante de la Izquierda Cristiana y Embajador de Salvador Allende en China. La intervención norteamericana ya se había hecho presente porque nosotros no respaldábamos la invasión en Santo Domingo ni la guerra de Vietnam, y porque habíamos herido los intereses de la derecha reaccionaria con la reforma agraria. Cuatro días después del intento de Viaux contra la Moneda, ante 10 dirigentes estudiantiles, Frei nos da las gracias porque junto a comunistas, socialistas, radicales y otros, salimos a la calle en los denominados "tanques del pueblo", los camiones de la basura, para enfrentarnos a todo un ejército que no estaba dispuesto a moverse para parar a Viaux. Cuando yo le pregunto a Frei quien estaba detrás de Viaux, me dice: "la CIA, Ricardo, la CIA".

Creo que los demócrata-cristianos quisimos la unidad social y política del pueblo: una alianza desde el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Radical y la Democracia Cristiana, para avanzar en un proceso de transformación revolucionaria y para afianzar la democracia frente a los intentos del imperialismo y de la derecha que querían destruir nuestro basamento institucional. ¿Cuál fue la respuesta de la izquierda? La de Luis Corvalán, a quien respeto mucho fue: "Con Tomic, ni a misa". De haber ido a misa con Tomic, nos hubiéramos ahorrado no sé cuantas misas por las víctimas que la dictadura provocó.

Cuando la izquierda en Chile rechaza la unidad con la Democracia Cristiana, ahí comienza la gran división de las fuerzas populares que eran capaces de enfrentar juntas la ofensiva que realizaban Nixon y Kissinger como actores de una política brutal. Todos los demócrata-cristianos votamos por Allende, y no como se dice en la entrevista de Allende con Debray, publicada en *Punto Final*, " porque le teníamos miedo a la guerra civil", sino porque compartimos el mismo enemigo: la derecha y el imperialismo. Quisiera terminar diciendo que para una persona como yo, concertacionista desde 1969, esta alianza, para un país pobre como el nuestro y sobre todo en las actuales condiciones de hegemonía norteamericana, es la única manera de enfrentar a la derecha que ejerce su influencia en la economía y los medios de comunicación, que ha logrado hacer transversal el neoliberalismo, que influye en gente valiosa de mi partido y, para que decir, del Partido Socialista y otros (!!). Un neoliberalismo que están tratando de vendernos como una "muerte climatizada con el nombre de porvenir".



## Jorge Insunza

Ex - Diputado; Miembro de la Comisión Política del Partido Comunista

Efectivamente, la primera página del diario *El Siglo* -que nunca circuló- decía "Cada cual a sus puestos de combate", porque el riesgo del golpe estaba muy seriamente presente entre nosotros como una inminencia. Esa conversación de Prats con Allende a la que alude Hormazábal refleja la gravedad del momento que se vivía. Para ser claro y honesto, yo quiero decir, respecto del comportamiento de Hormazábal en esos días, que se parecía mucho más al comportamiento de los 13 que, con coraje, condenaron al golpe de estado el 13 de septiembre (Tomic, Leighton, Ruiz-Esquide, Huepe y otros) que al de la mayoría de la directiva demócratacristiana que pavimentó conscientemente el camino del golpe. Hay una intervención de Hormazábal donde él busca distanciarse del contenido real de la resolución del 22 de agosto del 73 en la Cámara de Diputados: una resolución que genera la legitimidad ética del golpe al decir que el gobierno de Salvador Allende violentaba las normas constitucionales y al dirigirse de manera grosera y provocativa a los cuatros ministros militares que se habían incorporado al gobierno para tratar de buscar una salida democrática que incluía el plebiscito. En su intervención, Hormazábal se desvinculó de la matriz orientada por el Partido Nacional, cuyos argumentos fueron expuestos por Hermógenes Pérez de Arce (!!). Lamentablemente, a la hora de votar, pese a declarar no estar de acuerdo con el contenido que le daba Pérez de Arce a la declaración, Hormazábal levantó la mano con toda la bancada de la Democracia Cristiana (pese al dolor con qué lo hizo Bernardo Leighton) para aprobar con 81 votos contra 59 que el gobierno de Allende era ilegítimo, construyendo por lo tanto la base ideológica, junto con la Corte Suprema, de una salida de fuerza.

El día 10, estuvimos preparando una declaración donde se dice: "Los golpistas han avanzado peligrosamente. Algunos proclaman sin tapujos que ha llegado la hora de lograr su propósito por cualquier medio. Con tal fin, han concentrado todos sus esfuerzos para lanzar esta semana al paro sedicioso a cuantos sectores respondan a sus influencias o son arrastrados por la amenaza terrorista o el dinero extranjero que corre a caudales. Por eso maniobraron hasta lograr que el Colegio Médico cometiera la felonía de romper el acuerdo de retorno al trabajo al que el Colegio había llegado con el gobierno incluso a costa de echar el presidente demócratacristiano para instalar a otro demócratacristiano". Efectivamente, el demócrata-cristiano que echaron era parecido a Hormazábal mientras que él que lo reemplazó se parecía más a Frei, a Hamilton... que se habían reunido en estos mismos días con el Comando golpista de la Marina. Frente a eso, la Declaración dice: "la Dirección del Partido de la Democracia Cristiana se suma a los que quieren la caída del gobierno poniendo en práctica diversas fórmulas que revisten apariencias democráticas y hasta constitucionalistas. Este y no otro es el significado de la proposición que formulan para que renuncien simultáneamente el Presidente de la República y los parlamentarios de ambas bancadas del Congreso. La renuncia de los parlamentarios y la renovación del Congreso antes del plazo de la Constitución tiene escasa significación (habían sido electos hace 6 meses), en cambio la renuncia del Presidente de la República tiene como objetivo poner fin al proceso de cambio revolucionario. Por consiguiente, es una variante a penas solapada de la decisión reaccionaria y no constituye ninguna salida democrática, muy por el contrario".

Hay quienes hoy día dicen, a modo de autojustificación, que el proyecto de la Unidad Popular era un proyecto inviable. Yo quiero decir que el proyecto de la Unidad Popular era viable porque se correspondía con las necesidades de cambio de una sociedad podrida y, para venir en mi auxilio, voy a citar a un connotado agente del Comunismo Internacional (!!) que es el Cardenal Raúl Silva Henríquez. El 12 de noviembre de 1970, o sea 8 días después de la asunción de Salvador Allende como Presidente, el Cardenal dice lo siguiente: "las reformas básicas contenidas en el Programa de la Unidad Popular son apoyadas por la Iglesia Chilena. Nosotros las recibimos con inmensa simpatía porque estas reformas coinciden con los deseos y planteamientos de la Iglesia". Los que dicen que el Gobierno de la Unidad Popular fue un fracaso son los que buscan autojustificar su comportamiento en la ruptura del proceso de democratización del país que, con ires y venires, caminaba desde 1920 en adelante porque la Unidad Popular es la culminación de un largo proceso de acumulación de fuerzas en el que el movimiento de los trabajadores va adquiriendo relevancia. El gobierno de la Unidad Popular fue combatido con la ferocidad con la que lo fue por sus éxitos: la nacionalización del cobre, del salitre, del hierro, del carbón; la reforma agraria a fondo; la entrega de 150.000 hectáreas a los mapuches. Se hizo una redistribución del ingreso que significó que los trabajadores empezaran a participar con una cuota del Producto Interno Bruto como nunca había ocurrido antes. El primer año del gobierno de Salvador Allende, la economía en Chile creció en un 9% mientras que la cesantía bajaba a 3%. Eso desesperó a los reaccionarios porque la consolidación del poder popular significaba la liquidación de sus intereses. El golpe vino bajo la férula de los Estados Unidos y de los militaristas vestidos de civiles como Agustín Edwards que partió el día 6 de septiembre de 1970 a reunirse con Nixon y Kissinger para organizar el golpe ya.

Si la Unidad Popular cayó por sus errores, uno de estos errores fue la falta de unidad y la pretensión de los ultrarrevolucionarios de cambiar la orientación de un camino progresivo al socialismo sin tener en cuenta las condiciones reales ni la correlación de fuerzas existente, apostando al maximalismo como condición de éxito mientras que la posición de Allende y de las fuerzas responsables de la Unidad Popular era muy otra. (...)

## Jaime Gazmuri

Senador de la República,  
Partido Socialista

En los últimos días antes del golpe militar, yo tenía 29 años y era dirigente de uno de los partidos de la Unidad Popular, un partido nuevo surgido en 1969 de una escisión de izquierda de la Democracia Cristiana y de muchas otras fuerzas que militaban: un partido –el Mapu– que se dividió en Marzo del 73, quizás por ser un partido joven y frágil en el que se expresaban con particular intensidad las contradicciones que atravesaban la Unidad Popular. Esas contradicciones se daban entre los que Jorge Insunza acaba de llamar, en esta misma mesa, los “sectores responsables” (entre los cuales se encontraban, efectivamente, él y yo también, junto con los compañeros del Partido Radical y el Presidente Allende) y los sectores –a los que no me gustaría calificar– de aquellos que estaban fuera de la Unidad Popular y de su proyecto: el MIR.

Yo, por lo menos, tenía claro desde un comienzo que había un fuerte intento de terminar con el gobierno de Allende. Vivíamos una dura confrontación. La derecha había soñado con la votación de los dos tercios del Congreso para destituir constitucionalmente a Allende, pero después del Paro de octubre que casi paralizó completamente a la economía chilena, sacamos el 43 % de los votos, y se disipó así su última carta electoral.

Quisiera intentar relatar cuatro episodios personales relacionados con estos días del “antes de...”. Lo primero es lo mucho que me afectó en lo personal, en lo político, la renuncia del General Prats. Nosotros apostamos siempre a que no era posible consolidar el proceso de la Unidad Popular sin consolidar una dirección constitucionalista de las Fuerzas Armadas. Yo siempre pensé que no había condiciones para un enfrentamiento militar con el conjunto de las Fuerzas Armadas. Prats siempre le decía a Miguel Enriquez: “Miguel, con las armas que tienen ustedes, no aguantan ni medio día”. Pese a que el Presidente se resistió mucho a que renunciara, el General Prats se vio compelido a renunciar. Finalmente, me encontré con el General Prats en los pasillos de la Moneda después de que él había renunciado. Me dice: “No había solución, lo otro es la guerra civil” y agrega que “lo que hay que hacer en el Ejército, es decir, enfrentar a los golpistas más extremos que habían mandado a las mujeres a su casa para hacer la contra-manifestación que lo hizo renunciar, lo puede hacer mejor Augusto Pinochet”. Me acuerdo haberle dicho: “Pero General, su salida nos inflige una derrota muy sólida y va a significar que los muertos van a ser sólo nuestros”.

Mi recuerdo del 4 de septiembre del 73 fue la última marcha que hicimos. Se acordó no hacer una manifestación cerrada sino una marcha, inter-

minable, frente a la Moneda como una forma de reafirmación de nuestra capacidad de movilización y de respaldo al Presidente. Recuerdo que el estado de ánimo, para retomar el título de esta mesa, estaba muy contenido. Ya no era la alegría del 4 de septiembre en la Alameda. Era un estado de ánimo grave y combativo. Las consignas eran “Avanzar sin transar” y “No afloje Presidente”. Era un estado de ánimo crispado, con mucho temor de un desenlace negativo, aunque también estaba la disposición a resistir aunque no se supiera cómo ni por dónde.

Mi otro recuerdo es de una reunión de la Comisión Política del Partido que yo dirigía en esa época, el viernes anterior al golpe. Nos reuníamos casi diariamente los del Comité Político de la Unidad Popular. Hasta ahí siempre pensábamos –aunque fuera una idea que se iba debilitando progresivamente– que un sector del Ejército iba a estar detrás de Allende. Y recuerdo muy bien esa última reunión porque ahí nos planteamos por primera vez la idea del golpe institucional. Nos preguntamos qué iba a pasar si no hay un sector leal al gobierno. Se acordó allí un programa alternativo de seguridad, porque teníamos claro que, si el golpe era institucional, perdíamos el control de la ciudad en horas. El programa consistió en tratar de procurarnos documentación falsa porque habíamos tomado la decisión –la que cumplimos– de permanecer en el país para reconstruir lo que pudiéramos. Se operativizó esta hipótesis y yo estaba citado para la sesión de fotografía de un carné clandestino el martes 11 de septiembre en la mañana...

Mi última reunión con el Presidente Allende fue la noche del 10 de septiembre y, por cierto, es uno de los recuerdos más fuertes de mi vida. Debo decir, en todo caso, que el Presidente estaba, pese a todo, de muy buen ánimo porque eso no lo perdería nunca, como tampoco la capacidad de enfrentar las cosas con decisión tal como lo demostró al día siguiente en la Moneda. Habíamos discutido en la reunión política de la mañana que el golpe estaba en operación y que la cabeza del golpe, y en eso no nos equivocamos, era la Armada. Se acordó de que yo le fuera a proponer al Presidente de que destituyera a todo el alto mando de la Armada en un gesto de autoridad presidencial. Cuando se lo planteé al Presidente, él me dice: “Estás loco, Jaime, esto sería el Golpe”, y yo le contesté que el golpe viene de todas maneras y que la diferencia está entre un golpe contra la autoridad presidencial o a favor de ella. Me consta que, hasta el final, el Presidente nunca imaginó otra salida que no fuera la política.

Quisiera hacer solamente dos reflexiones sobre la dimensión política de la experiencia de la Unidad Popular. Primero, se trataba de una revolución democrática que no se había hecho

nunca en la historia del siglo 20 y, segundo, se trataba de un socialismo distinto: un socialismo pluralista con libertades políticas. Eso era lo atractivo y peligroso del modelo: la ambición de combinar dos principios que, en el siglo 20, anduvieron desentendidos: la igualdad y la libertad. Se construyeron regímenes bastante igualitarios como en el caso de los socialismos reales, pero no libertarios, y por eso quizás se derrumbaron.

Creo que no tuvimos suficiente fe en la originalidad del proyecto en el que participábamos. Pese a la poca comprensión de sus fuerzas de apoyo, Allende era el más lúcido y persistente en esa idea de combinar igualdad y libertad, como una idea totalmente vigente en el mundo de hoy. Nosotros no entendimos –y me incluyo– que las fuerzas del cambio debían expandirse mucho más allá de la Unidad Popular. Creo que nos equivocamos en el

tratamiento estratégico de la Democracia Cristiana. Aunque algunos hicimos esfuerzos por tender puentes, no lo hicimos con la amplitud necesaria y lo hicimos a destiempo. No le creímos a Tomie cuando decía que el capitalismo estaba agotado en Chile, que él estaba de acuerdo con la nacionalización del cobre y la reforma agraria, etc... Hay que acordarse de que la noche del 4 de septiembre, varios muchachos de la Democracia Cristiana también salieron a festejar con nosotros.

Mi convicción profunda es que no hay estabilidad democrática ni cambios en profundidad sin que estos se sostengan en mayorías muy amplias. Tuvimos en la mano haberlas podido construir y, desgraciadamente, no lo hicimos por exceso de ideologismo.



# EL PENSAMIENTO DE LA DERECHA EN CHILE Y LA

# UDI

**Sofía Correa Sutil**

Académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago

I. Hablar de la derecha en Chile significa remontarse a la década de 1930 cuando el control que la elite decimonónica ejercía sin contrapesos sobre el Estado es disputado seriamente por fuerzas de izquierda de inspiración marxista. No es casual que la retórica populista de Arturo Alessandri en 1920 se vertiera en un discurso en el cual estos conceptos estaban ausentes; en vez, el León de Tarapacá solía referirse, como bien sabemos, a la canalla dorada y a su querida chusma. La sublevación de la escuadra en 1931, y sobretudo la implantación de la República Socialista a partir de un golpe de Estado encabezado por un coronel de Ejército, dejaron meridionalmente claro que las fuerzas tradicionales no podían descansar sin más en los militares para contener los ímpetus revolucionarios de esos tiempos. Si bien la creación de un ejército paralelo formado por civiles en armas, la Milicia Republicana, es un reflejo de tal desconfianza, y aunque tanto Liberales como Conservadores propusieron la adopción del voto plural (más de un voto por cada hombre), en definitiva, la respuesta de la elite decimonónica al desafío de la izquierda socialista se terminó por plasmar dentro del orden institucional, en el sistema democrático representativo tal como había quedado consagrado en la Constitución de 1925, cuestión sobre la que volveré más adelante.

De modo que sólo desde comienzos de la década de 1930 se pueden distinguir en la política chilena los polos de la izquierda y la derecha. La misma polaridad la podemos encontrar en la esfera de las organizaciones sociales, pues a mediados de esa década el empresariado se ha agrupado en la Confederación de la Producción y del Comercio, y los obreros sindicalizados se han articulado en torno a la Confederación de Trabajadores de Chile. Entonces, parece necesario hablar de las derechas, en plural, como por lo demás se hacía en ese entonces, para diferenciar una diversidad de expresiones y de presencias.

Por una parte, tenemos que considerar el mundo del empresariado, o de los propietarios, el cual desde el siglo XIX ha contado con voceros sectoriales a través de asociaciones que hablan por la totalidad de un sector productivo aunque estén controladas por los grandes propietarios. Me refiero a la Sociedad Nacional de Agricultura, la Sociedad Nacional de Minería, la Sociedad de Fomento Fabril y la Cámara Central de Comercio. Agrupaciones éstas que podían discurrir y chocar puntualmente respecto a intereses económicos divergentes, pero que en lo fundamental estaban de acuerdo, lo cual quedó plasmado, como ya decíamos, en la creación de la Confederación de la Producción y del Comercio. Esos acuerdos fundamentales se referían, por ejemplo, a la limitación de las atribuciones del Estado en la esfera económica, a la limitación de las cargas tributarias, y al control del movimiento sindical (para lo cual, por cierto, requerían del Estado).

Paralelamente, en el espacio de la política, la derecha se hacía representar fundamentalmente por Conservadores y Liberales, no obstante lo cual, algunos partidos de escasa representación y de corta vida, de carácter nacionalista y corporativista, hacían su aparición de tiempo en tiempo. No eran intereses económicos sino

distintas tradiciones que hundían sus raíces en la historia de la elite decimonónica, lo que diferenciaba a Conservadores y Liberales entre sí. En ambos partidos sus dirigentes estaban vinculados a los diversos sectores productivos, cubriendo tanto el agro como los rubros de la economía urbana; y ambos mantenían vínculos estrechos con las asociaciones empresariales, con todas ellas sin excepciones. Es decir, terratenientes, industriales, banqueros, grandes comerciantes los había tanto entre los Conservadores como entre los Liberales, a la vez que, como ha hecho notar Paul Drake en su estudio sobre el socialismo chileno, la abrumadora mayoría de los dirigentes Conservadores, a diferencia de los Liberales, había estudiado en la Universidad Católica y no en la Universidad de Chile. Definitivamente, el Partido Conservador fue hasta fines de los años 50, la expresión política del catolicismo, a la que respaldaba la mayoría del clero y, por cierto, la jerarquía eclesiástica. Dice al respecto el Cardenal Raúl Silva Henríquez en sus Memorias:

En los púlpitos y en los templos había efectivamente una promoción del Partido Conservador y parecía un implícito fuera de discusión que la grey que quisiera participar en política tenía un cauce orgánico en esa colectividad. Otra cosa resultaba impensable.

De modo que, habiendo descartado diferencias socioeconómicas entre Conservadores y Liberales, hablar de derecha, y ahora sí podemos hacerlo en singular, significa referirse a una sola elite, compacta, homogénea, de intereses económicos diversificados, con tradiciones que se hundían en su condición de clase dirigente indispuesta en el siglo XIX, todo lo cual les lleva a compartir una común visión de los problemas del país y de su situación respecto a éstos, visión que se plasma, más que en un discurso teórico, en una identidad de clase, reflejada en hábiles estrategias políticas que les permiten enfrentar con éxito hasta mediados de los años 60, las demandas de redistribución del poder y de la riqueza provenientes de la izquierda.

Lo antedicho no niega, ciertamente, la existencia de pensadores nacionalistas, corporativistas e integristas católicos en el seno de la derecha. El ya clásico libro de Carlos Ruiz y Renato Cristi ha dado cuenta sobre estas vertientes doctrinarias. Sin duda, el corpus de ideas vinculadas a una visión nacionalista y autoritaria de la historia de Chile, elaboradas por Alberto Edwards y Francisco Antonio Encina, ha permeado al conjunto de la derecha chilena. Claro que no sólo a ésta, puesto que su visión histórica ha pesado más allá de sus fronteras, influyendo decisivamente en la Falange Nacional y luego en la Democracia Cristiana. No por casualidad Eduardo Frei Montalva escribe la continuación de la historia de los partidos políticos que Alberto Edwards había llevado hasta 1891. También, aunque sea sorprendente, la influencia de la historiografía nacionalista autoritaria ha llegado hasta pensadores de izquierda como Aníbal Pinto quien en su estudio sobre nuestro desarrollo frustrado descansa enteramente en Encina. Por otra parte, a lo anterior hay que agregar que, exceptuando la visión histórica de corte nacionalista y autoritaria que la derecha ha compartido con amplios sectores en Chile, una postura

doctrinaria opuesta a las concesiones pragmáticas ha tendido a ser marginal en la derecha. Por de pronto, el corporativismo, sea en su expresión católica o en su vertiente laica, fue siempre ajeno a las corrientes centrales de la derecha chilena, entendida ésta como una fuerza política relevante en el curso del siglo XX.

II. Volvamos, entonces, a la derecha como fuerza política, constituida como tal frente al polo de la izquierda, desde los años de 1930. Planteábamos inicialmente que ante el desafío que le presentó el desarrollo de una izquierda capaz de conquistar una significativa proporción del electorado y de articular alianzas amplias, llegando incluso a los sitiales de La Moneda en 1938, la derecha canalizó su respuesta dentro del orden institucional diseñado con la Constitución de 1925. Las palabras de un dirigente del Partido Liberal, citadas en *El Mercurio* de octubre de 1933, son elocuentes de esta disposición a dar la pelea en la arena electoral. Decía frente a las dificultades que se veían en el horizonte político:

Tenemos que aplacar a todas nuestras fuerzas, hacer los sacrificios que sean necesarios, penetrar las masas, acercarnos a la clase media y dar todo lo que tengamos que dar para que después no se nos quite todo. No podemos quedarnos tranquilos ni un solo instante.

Efectivamente, la derecha fue flexible y pragmática más que doctrinaria: los Liberales contribuyeron a elegir a Juan Antonio Ríos, junto a Radicales, Socialistas y Comunistas, y le dieron su respaldo a Gabriel González Videla aunque éste fuera el candidato de Radicales y Comunistas. La derecha estuvo dispuesta a dar todo lo que tenía que dar, para mantener lo esencial. Y tenía muy claro en qué consistía aquello que debía ser preservado, lo que estaba fuera de los límites de la negociación. Por cierto, constituían parte sustantiva de lo esencial que debía preservarse, tanto el orden hacendal y la libertad para emprender negocios, como también la preservación de los espacios institucionales desde donde podía hacer sentir su poder, tales como la prensa y el Congreso Nacional. Lo cierto es que su capacidad para neutralizar el reformismo descansaba en su fuerte representación parlamentaria, fruto a la vez de su control del voto campesino, de su capacidad y disposición a practicar la compra de votos en un mercado electoral urbano, más la articulación de redes clientelísticas, sumado a adhesiones de larga data en sectores medios preferentemente. La negociación política, esa lucidez para “dar todo lo que tengamos que dar para que después no se nos quite todo”, se realizaba de preferencia en el Parlamento. Ella se conjugaba con la capacidad de cooptación de los políticos reformistas, sobretodo, pero no únicamente, de aquellos pertenecientes al Partido Radical, cooptación que se ejercía abriendo los salones y las páginas de la vida social, a la vez que ofreciendo asientos en los directorios tanto de las empresas como de las asociaciones empresariales.

Al igual que la sociabilidad masculina de la elite, la vida política de los partidos de derecha sucedía en un ambiente de club: el Club Fernández Concha era el hogar político de los Conservadores; el Club de Septiembre, lo era de los Liberales. En cambio, decíamos, las dinámicas de la negociación política con las fuerzas reformistas tenían lugar en el Congreso Nacional, donde la derecha contó con una alta representación hasta los años 60. Como ha hecho notar Weston Agor en su estudio sobre



el Senado chileno, el espacio por excelencia de la negociación de los proyectos de ley se daba en las comisiones legislativas, donde los parlamentarios de derecha, por su larga permanencia en ellas, eran reconocidos como conocedores profundos de las materias que allí se decidían. Además se invitaba permanentemente a exponer sus puntos de vista, a los dirigentes del empresariado, a quienes se les reconocía por sus conocimientos tanto teóricos como prácticos, de la realidad económica.

De modo que la sólida representación de la derecha en el Congreso Nacional constituía a éste en el espacio por excelencia para la negociación política, la que a su vez le permitía a la derecha preservar lo esencial de su poder y situación social. Ello explica en gran medida, la adhesión profunda de la derecha chilena de mediados de siglo a la institucionalidad democrática representativa del país. De hecho, cuando a principios de 1950, la presión sindical en las calles llevó al Ejecutivo a embarcarse en políticas populistas que implicaban desentenderse de los procesos de negociación centrados en el Congreso Nacional, la derecha defendió airadamente la institucionalidad política. Declararon entonces sus parlamentarios que por haber cedido el gobierno ante la presión sindical se iniciaba en nuestra historia de país democrático, respetuoso de la Constitución y de la ley, una época desgraciada y un triste retroceso en nuestros hábitos democráticos y legalistas ... se ha abierto un amplio campo a la ilegalidad, a las arbitrariedades, a las presiones revolucionarias y a los abusos.

Al mismo tiempo, entendieron que la legislación económico-social acordada entre los partidos de centro y de izquierda con los sindicatos constituía la quiebra de nuestro régimen jurídico y democrático, el suicidio de los partidos políticos y la consagración por los propios representantes del pueblo de un franco sindicalismo revolucionario.

A pocos meses de la elección presidencial de 1952, *El Mercurio* caracterizaba, en su página editorial, la situación política como la de una crisis que ponía en peligro incluso al mismo régimen institucional, en la medida en que se estaba prescindiendo de la negociación parlamentaria. Decía al respecto:

La supeditación de los partidos por los sindicatos, la introducción de un elemento sedicioso en el cuerpo mismo del Estado y el desprecio hacia la independencia de los Poderes Públicos, son un conjunto de factores alarmantes cuyo desenvolvimiento parecía llevar al país cada vez más hacia el caos y la confusión.

Esta percepción de crisis se agrava cuando en la elección del 52 triunfa el populismo del “General de la Esperanza”, quien escoba en mano se declaraba dispuesto a barrer con los políticos. La derecha teme entonces que se entronice una dictadura, “se abre la posibilidad del ... sometimiento de los poderes del Estado que fueran altivos”, declaraba un diputado Conservador a fines del 53, situación que él mismo contrastaba con respecto al período reformista anterior:

Vino el Frente Popular. Lo combatimos arduamente ... pero nunca tuvimos el temor cierto de que pudiera prosperar un espíritu contrario a esa plataforma sobre la cual desarrollábamos nuestras luchas. Para el vencedor y para el vencido regían la ley.

El punto que quiero enfatizar es que el respeto irrestricto a la legalidad, proclamado como una virtud

cívica fundamental por las fuerzas de derecha, constituye un gran muro de contención frente a las demandas sociales. Para peor, hacia 1950, éstas comenzaban a desbordarse fuera de los canales de representación que proveían los partidos Radical y Socialista, con los que la derecha había ya aprendido a negociar. Con respecto al Partido Comunista y su brazo sindical, la derecha, como bien se sabe, había optado, ya iniciada la Guerra Fría, por acorralarlo en la ilegalidad, es decir, por dejarlo fuera del referente común a todos los partidos, fuera del espacio legitimado para la negociación política y social.

Durante el gobierno de Ibáñez, las estrategias ya probadas de la cooptación y la negociación tienen un éxito sólo parcial, y ante la emergencia de una sociedad de masas que desborda los canales partidistas, la derecha opta por jugársela para consolidar su posición a través de una modernización capitalista en base a mercados abiertos y competitivos, con el Estado concentrado en realizar inversiones en infraestructura. Se esperaba que con este modelo se lograra la estabilidad monetaria y se crearían las bases para el crecimiento económico constante, para, de ese modo, expandir el consumo y neutralizar las demandas sociales. Eso sí que los límites de este proyecto de modernización capitalista estaban en la transformación de las relaciones laborales en el campo, aunque ya a mediados de los años 50, *El Mercurio* advirtiera que el agro debía dejar de ser “un modo de vida” para transformarse en “un modo de producir”.

Con Jorge Alessandri en La Moneda, la derecha intenta liberalizar la economía para provocar la modernización productiva, pero los éxitos iniciales son barridos a medio camino por el fracaso político. El fracaso del gobierno fue en gran parte precipitado por las nuevas circunstancias internacionales marcadas por el giro de la política de Estados Unidos hacia América Latina, y por las nuevas alianzas que construye la Iglesia Católica chilena. En efecto, Jorge Alessandri había esperado que su política favorable a la empresa privada atraería un flujo sustantivo de recursos provenientes de los Estados Unidos, tanto en forma de inversiones privadas como de créditos gubernamentales, con los cuales podría financiar su proyecto de modernización productiva. Sin embargo, a consecuencia de la Revolución Cubana, las inversiones privadas norteamericanas tienden a alejarse de América Latina, a la vez que, alarmada frente al potencial revolucionario del continente, la Administración Kennedy puso sus ojos en el reformismo carismático que encarnaba Eduardo Frei, y canalizó apoyo financiero e influencias hacia su futura candidatura presidencial, dejando a sus otrora aliados de derecha en el camino. Con la Iglesia Católica sucedió un proceso similar, condicionado en gran medida por las nuevas estrategias anticomunistas de los Estados Unidos y del Vaticano. El nuevo lenguaje sociológico que comienzan a utilizar los jesuitas impregnará los documentos de la jerarquía chilena, al punto que una de las cartas pastorales de 1962 le enrostró explícitamente a los católicos de derecha su

responsabilidad por las condiciones de injusticia social imperantes y por el atraso del país; su llamado a los católicos a comprometerse con las reformas estructurales daba un sólido respaldo a la Democracia Cristiana y dejaba al Partido Conservador en la más absoluta orfandad.

Habiendo perdido referentes tan sustanciales, corroidos por la inseguridad, y minados por la crítica presidencial a los partidos, Conservadores y Liberales perdieron su capacidad de negociación política. Así, a pesar de contar con una decisiva fuerza electoral —sumaron entre ambos más de un 23% de los votos en la elección municipal de 1963, a los que habría que agregar más de un 20% de los votos de sus aliados Radicales—, terminaron por dar un apoyo incondicional a la candidatura de Eduardo Frei en 1964, para luego desaparecer del sistema político chileno tras los desastrosos resultados que obtuvieron en la elección parlamentaria de 1965, en la cual su electorado se volcó a la Democracia Cristiana.

Sin embargo, la presunción demócratacristiana de que con la Reforma Agraria se asestaba un golpe mortal a la derecha y de que ésta desaparecía como expresión política, resultó ser un error de enorme magnitud. Los terratenientes estrecharon lazos con el empresariado urbano, y la derecha política se rearticuló bajo el liderazgo de sectores nacionalistas otrora marginales. El recién creado Partido Nacional nació en un escenario político en el cual la negociación parlamentaria no tenía ninguna eficacia frente a la imposición de políticas diseñadas tecnocrática e ideológicamente por un Ejecutivo que no estaba dispuesto a transar ni una coma de su programa. El nuevo partido de derecha nació en y para un escenario confrontacional. Concitó el apoyo de aquellos sectores medios que temían los efectos de una movilización popular que se volvía cada vez más intensa y rupturista, con lo cual, en las elecciones parlamentarias de 1969, logró situarse como el segundo partido más votado después de la Democracia Cristiana. Durante el gobierno de la Unidad Popular, junto con su postura confrontacional, el Partido Nacional retomó con éxito las estrategias de cooptación, lo que fructificó en una alianza política y electoral con la Democracia Cristiana para llevar a cabo una implacable oposición al gobierno de izquierda. Ambas estrategias, confrontación y cooptación, fueron funcionales para el desenlace en un golpe de Estado.

III. Habiéndose los militares tomado el poder, el partido de la derecha se autodisolvio, como gesto supremo de respaldo a la Junta, y sus dirigentes asumieron en calidad individual los cargos y tareas que les fueron solicitados por los militares. Su actuación, sin embargo, fue opacada por una nueva figura, probablemente la más importante de la derecha en el siglo XX, que se levanta como teórico legitimador del nuevo régimen y como el hombre que diseña el proceso político de modo de llegar a consolidar un nuevo orden institucional, que él mismo contribuye sustantivamente a crear, sobre los supuestos

de la economía de libre mercado y de la contención de las mayorías electorales. En efecto, si hemos de hablar de un pensamiento político de derecha en el siglo XX, tenemos que detenernos en Jaime Guzmán. Su trascendencia, paradójicamente, se asienta, no en su carácter teórico, sino en su asombrosa capacidad para elaborar y reelaborar sus posturas doctrinarias en función de las necesidades históricas; en otras palabras, en su lucidez para visualizar y preservar los intereses de largo plazo de la derecha, a través de un nuevo orden institucional, de larga duración.

De la mano del libro que escribiera Renato Cristi sobre el pensamiento político de Jaime Guzmán, podemos seguir su trayectoria desde que fuera un joven integrista católico, defensor del corporativismo e hispanismo franquista, hasta su actuación como Senador electo por Santiago, en representación de la UDI, partido que él mismo creara en 1983. Jaime Guzmán había militado en la Juventud Secundaria del Partido Conservador, y le cupo vivir como estudiante universitario la debacle de los partidos históricos de la derecha a mediados de los años 60. Su interés por la política no lo condujo a integrar, junto a los dirigentes Conservadores, el recientemente creado Partido Nacional, sino que se concentró en organizar otro referente, de muy distinta naturaleza, que congregara a los estudiantes de la Universidad Católica en torno a un discurso sumamente crítico de los partidos y de la politización de los cuerpos intermedios, tal fue el Movimiento Gremial. Durante el gobierno de la Unidad Popular, Guzmán se dio a conocer al país, a través de la televisión, destacándose por su capacidad argumentativa para defender los puntos de vista de la derecha; e inmediatamente después del Golpe de Estado fue llamado por los militares para articular un discurso que diera legitimidad al Golpe y al régimen militar. Así, Jaime Guzmán redacta la Declaración de Principios de la Junta de Gobierno.

Renato Cristi nos lo muestra desde los primeros días después del Golpe abocado a la creación de una nueva institucionalidad política que reemplazara a la Constitución de 1925. En realidad, la reforma de la Constitución era una idea que, desde el gobierno de Jorge Alessandri, rondaba en los círculos de derecha. En efecto, en 1962, al naufragar el proyecto de modernización económica, Alessandri había postulado que la única alternativa para evitar el colapso de las instituciones radicaba en la aprobación de una reforma constitucional que asegurara poder “abordar con eficacia los fundamentales problemas en el orden económico-social”, como planteaba en su último Mensaje Presidencial. Quería con ello decir que era necesario limitar constitucionalmente los alcances de la acción parlamentaria, demasiado sensible a presiones electorales. De modo que la nueva Constitución que se redacta durante la dictadura recoge una aspiración de larga data en la derecha. Por lo mismo, no podía constituir un experimento corporativista. De hecho, a mediados de la década del 70, Guzmán abandona el ideario

corporativista, convencido de las virtudes de la economía neo-liberal y de cuan inevitable era aceptar el sufragio universal y la democracia representativa, si se quería crear una institucionalidad de larga duración.

Diferenciándose de la retórica utilizada por la derecha política tradicional, Jaime Guzmán es explícito respecto al carácter instrumental que le otorga a la democracia. Como lo ha hecho ver Renato Cristi, para Guzmán la democracia es fundamentalmente un método para generar la representación política, en la cual puede haber sufragio universal o bien sufragio censitario, como era en el Chile decimonónico. Por lo mismo es que Guzmán sostiene que la soberanía debe quedar limitada por dos fuentes de valores superiores: por los derechos naturales del ser humano que son anteriores y superiores al Estado; y por la tradición histórica de la nación, reflejo del alma nacional. Citando a Vásquez de Mella, Guzmán aseguraba que “el sufragio universal de un día” no puede negar el legado de “el sufragio universal de los siglos”. De allí que, argumenta Cristi, la Constitución del 80 afirme que la soberanía radica en la nación y no en el pueblo.

En la medida en que la democracia es instrumental, debe estar al servicio de valores superiores, que son los valores permanentes del alma nacional. Aquí entonces Guzmán se vincula con la tradición historiográfica nacionalista e hispanista, y define los contenidos del alma nacional en función del ejercicio del poder, a saber: libertad y prosperidad, lo cual le permite hacer un puente con los neoliberales, y condicionar el ejercicio político a las exigencias de una economía de mercado; justicia, entendida según la tradición católica; y seguridad como sinónimo de autoridad fuerte e impersonal, haciéndose eco del mito portaliano construido por la historiografía nacionalista. La misma referencia hay que tener presente cuando se lee en Guzmán una afirmación como “la economía impersonal” en alusión al mercado. En la medida en que la democracia es meramente instrumental, y es legítima sólo si preserva los valores permanentes del alma nacional, entonces cabe introducir en la Constitución del 80 restricciones al sufragio universal, ya sea a través del sistema binominal o por medio de elementos corporativistas en la composición del Senado.

Habiéndose asegurado que estos principios políticos quedaban plasmados en la nueva Constitución, Guzmán tomó distancia de Pinochet, única forma de despersonalizar la institucionalidad recién creada, y en 1983 organizó un partido político, la UDI, sobre la base de sus seguidores de años, agrupados en el Movimiento Gremial de la Universidad Católica. Hasta hoy, a más de 12 años desde que fuera asesinado, este grupo de sus más cercanos conforman el liderazgo indisputado del partido, ejerciendo un control que les permite asegurarse de que el pragmatismo político, del cual son herederos, mantenga como límite preciso que no podría ser transgredido, el diseño institucional de democracia restringida y mercados abiertos elaborado por el mismo Jaime Guzmán.

## Rodrigo Baño

Académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile

(...) Durante un largo tiempo, la estrategia política de la derecha estaba fundada básicamente en su control del sector agrario. Todos los contadores de votos sabían que había una relación muy estrecha entre la votación que favorecía a la derecha y el predominio de las estructuras agrarias, por ejemplo, en el Sur. Casi entrando a la década del 70, todavía se mantenía un control de la derecha en el sector del campesinado de acuerdo a esta relación entre la estructura de la economía y el posicionamiento político de las poblaciones. Se producen algunas transformaciones en este esquema de correspondencia entre sectores sociales y representación político-partidaria dentro de los sectores dominantes (la aristocracia terrateniente será poco a poco reemplazada por otro tipo de burguesía y de empresariado nacional), de las capas medias (la burocracia pública se ve poco a poco sustituida por un crecimiento de la pequeña burguesía privada), etc... Me interesa fundamentalmente aquí las transformaciones que se van produciendo en los sectores populares. Va a crecer lo que se denomina gruesamente el proletariado industrial que va a tener su representación política en el Partido Comunista y también en el Partido Socialista pero, también, va a surgir otro sector popular urbano muy importante que es lo que se conoce como masa marginal o masa informal (algunos la denomina como "sectores en situación de riesgo" o bien, simplemente, los "pobres"). Este sector marginal está conformado básicamente por desempleados, trabajadores por cuenta propia, personal de servicio doméstico, etc... Me interesa señalar la forma en que irrumpe en la política chilena este sector marginal o heterodoxo, que se diferencia de la representación de "clase" del proletariado industrial.

Las masas entran en la política inicialmente el año 1952, con Carlos Ibáñez del Campo a través de un movimiento típicamente populista que copia exactamente el peronismo argentino. Recordemos que la democracia chilena funcionaba con muy poca gente, no más del 10% de la población, y ese año 52, se duplica la participación electoral que se había mantenido constante durante decenios alrededor de los 300 o 400.000 votantes. Y no se duplica, como algunos podrían creer porque se incorpora el voto femenino porque en realidad votan muy pocas mujeres. El aumento de la votación es principalmente masculino, y corresponde a sectores populares que se sienten atraídos por la figura de Ibáñez con su emblemática escoba que iba a barrer con los poderosos. Por primera vez, se ve a los marginales apoyando una candidatura presidencial y ellos son muchos. Los datos muestran que es la irrupción de estos sectores populares urbanos la que logra el triunfo de Ibáñez quien gana con mayoría absoluta en las grandes ciudades: Santiago, Valparaíso, Antofagasta, etc..

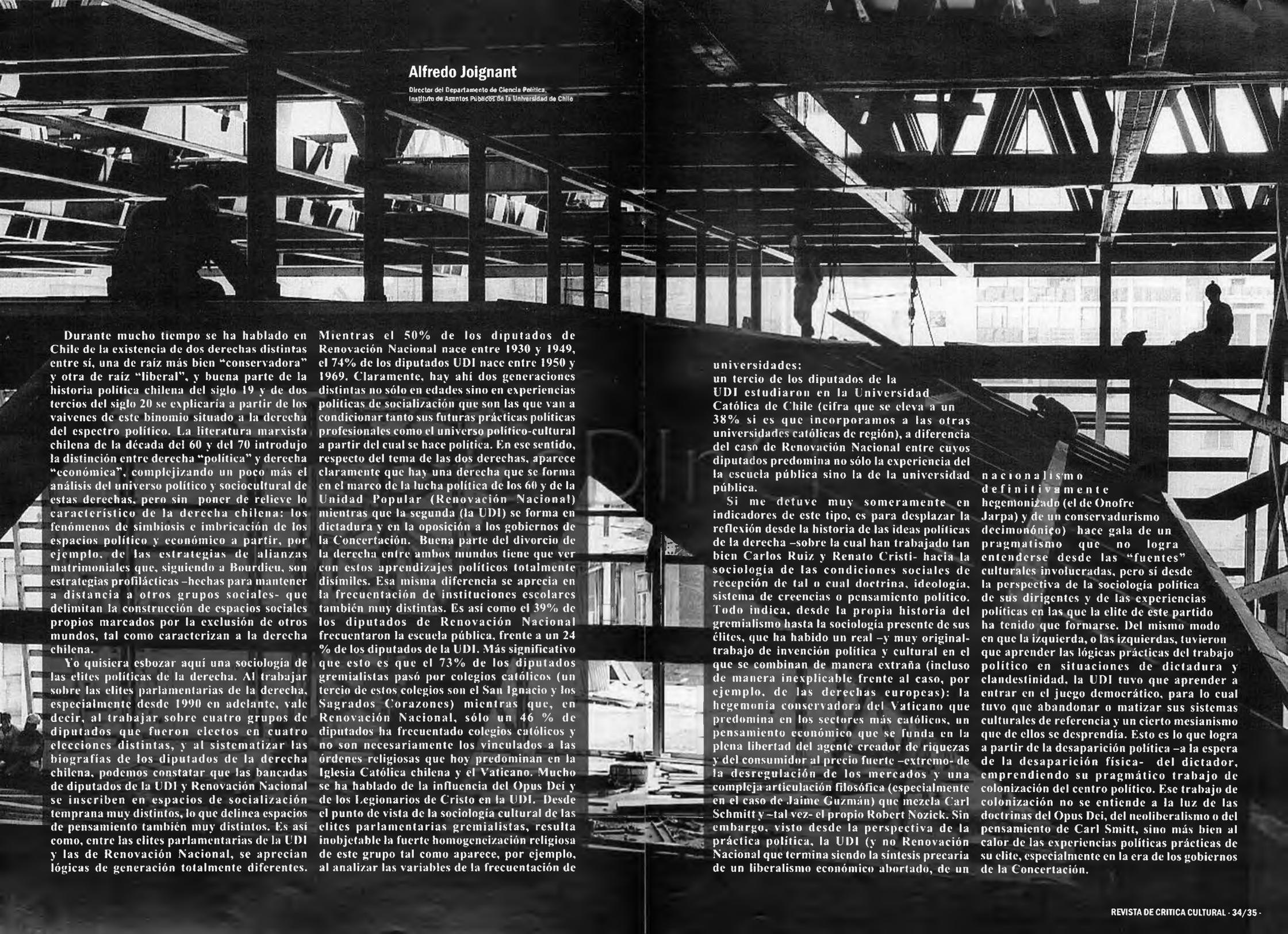
El otro fenómeno que se produce con la incorporación de este sector es el crecimiento de la Democracia Cristiana. Nace como Falange el año 1938, y se mantiene con una pequeña votación sin hacer mayor ruido político. Sin embargo, el año 1957, se crea la Democracia Cristiana con el liderazgo del sector ibañista

que le da su carácter "popular". El triunfo de Eduardo Frei Montalva, en 1964, que va más allá del apoyo de la derecha, marca la entrada de la Democracia Cristiana en las masas populares, en estos sectores marginales que desbordan la representación de clase que identifica a los que están con Allende. Recién en 1971, estos sectores marginales se matriculan con Allende y la Unidad Popular. Junto con las medidas de alcance popular e incluso populistas, les atrae el accionismo: la posibilidad de sentirse reconocidos e integrados como un sector social a la marcha del país.

El régimen militar toma nota rápidamente de esta división de los sectores populares, y su discurso se elabora diciendo que los trabajadores integrados a las industrias, los sindicatos y los partidos políticos han obtenido muchos privilegios y que no son ellos los verdaderos pobres sino que los otros, los marginales, en cuyo sector el gobierno busca su apoyo. Por primera vez, se focaliza el gasto social en los más pobres a través de subsidios y otras ayudas. Es así como se va configurando un núcleo de pinochetismo popular, pese a la crisis de las políticas económicas, la recesión y la cesantía, además de la represión, que impiden un apoyo masivo.

En las elecciones de 1989, si bien gana fácilmente la Concertación y la derecha no obtiene más que un 30%, recordemos el 15% de apoyo a un líder populista de derecha: Francisco Javier Errázuriz. Esta es la primera metida del populismo de derecha que, en las elecciones de 1993, se inclina hacia Eduardo Frei, más bien hacia el apellido Frei, haciendo que la derecha no obtenga más de un 30% nuevamente. Después de eso, los sectores populares se van a la casa y sube el porcentaje de abstención, hasta que aparece el fenómeno Lavín, con su estilo personalista y anti-partido, hecho para movilizar aquel sector políticamente disponible para ese populismo de derecha. Es ahí cuando notamos que las bases de apoyo de la derecha han cambiado radicalmente y también su discurso: la ideología del discurso de la derecha hoy no es más que el sentido común de ese sector popular. (...)





## Alfredo Joignant

Director del Departamento de Ciencia Política,  
Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile

Durante mucho tiempo se ha hablado en Chile de la existencia de dos derechas distintas entre sí, una de raíz más bien “conservadora” y otra de raíz “liberal”, y buena parte de la historia política chilena del siglo 19 y de dos tercios del siglo 20 se explicaría a partir de los vaivenes de este binomio situado a la derecha del espectro político. La literatura marxista chilena de la década del 60 y del 70 introdujo la distinción entre derecha “política” y derecha “económica”, complejizando un poco más el análisis del universo político y socio-cultural de estas derechas, pero sin poner de relieve lo característico de la derecha chilena: los fenómenos de simbiosis e imbricación de los espacios político y económico a partir, por ejemplo, de las estrategias de alianzas matrimoniales que, siguiendo a Bourdieu, son estrategias profláticas —hechas para mantener a distancia a otros grupos sociales— que delimitan la construcción de espacios sociales propios marcados por la exclusión de otros mundos, tal como caracterizan a la derecha chilena.

Yo quisiera esbozar aquí una sociología de las elites políticas de la derecha. Al trabajar sobre las elites parlamentarias de la derecha, especialmente desde 1990 en adelante, vale decir, al trabajar sobre cuatro grupos de diputados que fueron electos en cuatro elecciones distintas, y al sistematizar las biografías de los diputados de la derecha chilena, podemos constatar que las bancadas de diputados de la UDI y Renovación Nacional se inscriben en espacios de socialización temprana muy distintos, lo que define espacios de pensamiento también muy distintos. Es así como, entre las elites parlamentarias de la UDI y las de Renovación Nacional, se aprecian lógicas de generación totalmente diferentes.

Mientras el 50% de los diputados de Renovación Nacional nace entre 1930 y 1949, el 74% de los diputados UDI nace entre 1950 y 1969. Claramente, hay ahí dos generaciones distintas no sólo en edades sino en experiencias políticas de socialización que son las que van a condicionar tanto sus futuras prácticas políticas profesionales como el universo político-cultural a partir del cual se hace política. En ese sentido, respecto del tema de las dos derechas, aparece claramente que hay una derecha que se forma en el marco de la lucha política de los 60 y de la Unidad Popular (Renovación Nacional) mientras que la segunda (la UDI) se forma en dictadura y en la oposición a los gobiernos de la Concertación. Buena parte del divorcio de la derecha entre ambos mundos tiene que ver con estos aprendizajes políticos totalmente disímiles. Esa misma diferencia se aprecia en la frecuentación de instituciones escolares también muy distintas. Es así como el 39% de los diputados de Renovación Nacional frecuentaron la escuela pública, frente a un 24% de los diputados de la UDI. Más significativo que esto es que el 73% de los diputados gremialistas pasó por colegios católicos (un tercio de estos colegios son el San Ignacio y los Sagrados Corazones) mientras que, en Renovación Nacional, sólo un 46% de diputados ha frecuentado colegios católicos y no son necesariamente los vinculados a las órdenes religiosas que hoy predominan en la Iglesia Católica chilena y el Vaticano. Mucho se ha hablado de la influencia del Opus Dei y de los Legionarios de Cristo en la UDI. Desde el punto de vista de la sociología cultural de las elites parlamentarias gremialistas, resulta inobjetable la fuerte homogeneización religiosa de este grupo tal como aparece, por ejemplo, al analizar las variables de la frecuentación de

universidades:

un tercio de los diputados de la UDI estudiaron en la Universidad Católica de Chile (cifra que se eleva a un 38% si es que incorporamos a las otras universidades católicas de región), a diferencia del caso de Renovación Nacional entre cuyos diputados predomina no sólo la experiencia de la escuela pública sino la de la universidad pública.

Si me detuve muy someramente en indicadores de este tipo, es para desplazar la reflexión desde la historia de las ideas políticas de la derecha —sobre la cual han trabajado tan bien Carlos Ruiz y Renato Cristi— hacia la sociología de las condiciones sociales de recepción de tal o cual doctrina, ideología, sistema de creencias o pensamiento político. Todo indica, desde la propia historia del gremialismo hasta la sociología presente de sus élites, que ha habido un real —y muy original— trabajo de invención política y cultural en el que se combinan de manera extraña (incluso de manera inexplicable frente al caso, por ejemplo, de las derechas europeas): la hegemonía conservadora del Vaticano que predomina en los sectores más católicos, un pensamiento económico que se funda en la plena libertad del agente creador de riquezas y del consumidor al precio fuerte —extremo— de la desregulación de los mercados y una compleja articulación filosófica (especialmente en el caso de Jaime Guzmán) que mezcla Carl Schmitt y —tal vez— el propio Robert Nozick. Sin embargo, visto desde la perspectiva de la práctica política, la UDI (y no Renovación Nacional que termina siendo la síntesis precaria de un liberalismo económico abortado, de un

nacionalismo definitivamente hegemonizado (el de Onofre Jarpa) y de un conservadurismo decimonónico) hace gala de un pragmatismo que no logra entenderse desde las “fuentes” culturales involucradas, pero sí desde la perspectiva de la sociología política de sus dirigentes y de las experiencias políticas en las que la elite de este partido ha tenido que formarse. Del mismo modo en que la izquierda, o las izquierdas, tuvieron que aprender las lógicas prácticas del trabajo político en situaciones de dictadura y clandestinidad, la UDI tuvo que aprender a entrar en el juego democrático, para lo cual tuvo que abandonar o matizar sus sistemas culturales de referencia y un cierto mesianismo que de ellos se desprendía. Esto es lo que logra a partir de la desaparición política —a la espera de la desaparición física— del dictador, emprendiendo su pragmático trabajo de colonización del centro político. Ese trabajo de colonización no se entiende a la luz de las doctrinas del Opus Dei, del neoliberalismo o del pensamiento de Carl Schmitt, sino más bien al calor de las experiencias políticas prácticas de su elite, especialmente en la era de los gobiernos de la Concertación.



## Antonio Cortés Terzi

Director ejecutivo Centro de Estudios Sociales AVANCE

(...) En Chile ningún otro partido o vertiente política tiene, como la UDI o la neoderecha, una tan convencida y arraigada idea de ser destinatario y continuador de una misión histórica refundacional totalizadora, esto es, que comprende una reconversión integral del país.

Por cierto que una de las matrices de tal convicción se encuentra en la filosofía, explícita o implícita, que subyace en el neoliberalismo económico. Pero hay otro antecedente que gravita tanto como aquel y que lo potencia por sus características más empíricas. En efecto, el pensamiento de la UDI no se hace enteramente comprensible si no se toma en cuenta la influencia culturizadora y educativa que tuvo en ella su experiencia como partícipe del régimen militar y la atmósfera ideológica que la dictadura creó y desarrolló para cimentarse y justificar su prolongación en el tiempo. A mi juicio, esa influencia fue determinante en la configuración de su sentido de misión refundacional y, sobre todo, en el sesgo maximalista que ese sentido reviste.

Tres rasgos del proyecto, de la experiencia y del discurso refundacional practicados durante el régimen militar son los más sobresalientes en cuanto a influencia culturizadora de la neoderecha.

El primero es que la necesidad y ambición de producir una transformación radical del país. (La "Revolución silenciosa" de Joaquín Lavín) devino en el más relevante argumento justificador histórico de la extensión de la dictadura y, a su vez, del hecho dictatorial mismo. Es decir, no fue un simple argumento más dentro del discurso oficial de entonces. Fue una idea-fuerza mayor, eje y ordenadora de la discursividad global y sólo comparable en acento y reiteración a la idea-fuerza que la dictadura fue un acto de salvación de la amenaza comunista. Con la diferencia, respecto de ésta última, que fue una idea-fuerza "positiva" y convocadora de acción para el futuro.

Segundo, en aras de la finalidad transformadora, el proyecto de cambio se inició con medidas aceleradas, irruptivas y, esencialmente, destructivas en todos o casi todos los planos de la vida social. La dictadura acompañó su radicalidad destructiva con un discurso, más que crítico, despreciativo del pasado histórico-nacional. A la economía y al desarrollo económico se les llamó "mediocres". Al régimen democrático y al sistema político ancestral se les responsabilizó de una crisis político-institucional que supuestamente se arrastraba por décadas y que habría culminado en la crisis del 70-73. Se denostaron rabiosamente las prácticas políticas y los partidos políticos tradicionales. Al sindicalismo y a las organizaciones sociales se les negó autenticidad social. Los valores culturales que inspiraban la media conductual de la chilendidad fueron juzgados como fuentes de conformismo, de resignación, de apocamiento, de falta de empuje e iniciativa, etc. Es decir, ideológicamente la refundación fue concebida y difundida, de facto, como un proceso de ruptura histórica, al menos con la historia transcurrida en el siglo XX, que no podía ni debía buscar herencias ni continuidades históricas, salvo en tiempos más remotos, en los que, políticamente imperaba el portalismo y el régimen oligárquico y en los que el orden social se sustentaba en el modelo de relaciones de la hacienda tradicional.

Tercero, buena parte de las medidas más caras al proyecto refundacional fueron ideadas y lideradas por civiles adscritos a la cultura y orgánica de la neoderecha que se plasmaría en la UDI. (Vg., sistema político, modelo económico, sistema previsional, leyes laborales, etc.) Es decir, en el plano empírico, la UDI puede reclamar para sí propiedad y protagonismo en el proceso refundacional.

Y cuarto, es innegable que, con el tiempo, muchos de los resultados de la acción refundacional de la dictadura y de sus actores civiles fueron adquiriendo grados no menores de legitimidad social y política, fueron siendo reconocidos como acertados y exitosos, incluso, por sectores importantes de sus antiguos detractores. Quiérase o no, tales legitimidades y reconocimientos le conceden racionalidad a la idea, a la percepción, al sentimiento que posee la neoderecha en cuanto a que su "obra refundacional" alcanzó la condición de proyecto nacional.

Ahora bien, la convicción de la UDI de ser una fuerza refundacional -auto convencimiento nutrido por los factores reseñados- no es algo que aluda al pasado. Es una convicción que rige en el presente. Para la UDI su misión refundacional no ha terminado, simplemente, porque el proceso no alcanzó a ser finiquitado por el régimen militar y ha sido interrumpido o mediatizado en su dinámica natural por los gobiernos de la Concertación. (...)

## Carlos Ruiz Schneider

Académico y Director de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Chile

(...) I. Querría partir por sostener que, a mi juicio, el pensamiento político de la derecha chilena experimenta, desde fines de la década de los 60, una importante renovación, de tanta o mayor radicalidad que la que vive la izquierda, y que apenas es percibida por los analistas políticos que no pertenecen a ese sector.

Parte de esa renovación proviene de una revitalización de tradiciones de antigua data en la derecha, pero que habían pasado a ser marginales a partir de la década de los 40 y 50 y que cobran nueva vigencia conforme se ahonda la crisis hegemónica que viene afectando a las bases sociales de la derecha con el proceso de profundización de la democracia que vive Chile desde mediados de la década de los 60. Las más importantes de estas tradiciones se vinculan a un tipo de pensamiento nacionalista y autoritario, vinculado en su época a figuras políticas como la del General Ibáñez, y a un proyecto de estilo corporativista con influencia sobre todo en los sectores más conservadores del catolicismo. Ambas vertientes conservadoras cobran de nuevo gran importancia en la década de los 60 y se hacen presente en dos de los hitos del desarrollo político de la derecha en la época, la fundación del Partido Nacional en 1966 y del movimiento estudiantil gremialista en la Universidad Católica. Ambas tendencias tienen en común una crítica radical de la política partidista chilena y más en lo profundo, el rechazo del paradigma democrático-liberal tradicional en el país y la búsqueda de formas de hacer política y de organización opuestas al esquema democrático parlamentario, que estos grupos perciben como obsoleto. El primer destinatario de esta crítica son precisamente las organizaciones político-parlamentarias de la propia derecha, los partidos liberal y conservador, que experimentan en este momento las más bajas votaciones históricas del sector.

Hacia fines de la década, los grupos y tendencias que han privilegiado esta forma de respuesta nacionalista y corporativista al avance de la democratización del país, se fusionan con una expresión renovada del pensamiento conservador, esta vez de origen internacional, el neo-liberalismo o el neo-conservantismo de tecnócratas que siguen las enseñanzas políticas de economistas como Milton Friedman y Friedrich Hayek. Entre 1967 y 1971 ambas expresiones de este pensamiento de derecha renovado van ganando las páginas y editoriales de los más importantes medios de comunicación del país, como el diario *El Mercurio* y el Canal 13 de Televisión de la Universidad Católica, y ganando presencia en sus más importantes instituciones culturales, como es precisamente la misma Universidad Católica, cuya Federación de Estudiantes y muchas de sus Escuelas comienzan a ser controladas por los gremialistas.

En trabajos anteriores he sostenido también que estas vertientes conservadoras tienen elementos importantes en común: coinciden en declarar intangibles, ajenos a

toda ingerencia de la deliberación política y de la voluntad colectiva, a las instituciones que dan forma a la sociedad. Esto se expresa, en esta tradición conservadora, en un doble rechazo: el rechazo a la política y la democracia, en el campo político, y en el rechazo al constructivismo en el plano filosófico y epistemológico.

El rechazo conservador del constructivismo supone un rechazo más fundamental a toda ingerencia de la voluntad humana en los asuntos políticos y sociales, una especie de "horror a la voluntad" en palabras de Stéphane Rials. En un importante artículo en que muestra la afinidad esencial que existe entre neo-liberalismo y tradicionalismo, entre Hayek y de Maistre, el cientista político francés sostiene que este rechazo se funda en que "el hombre no puede construir a la sociedad" (Rials, 1985, p.39). Este tipo de conservantismo consistiría así en un "horror... a la idea que la voluntad humana pueda cambiar los nudos, a la vez demasiado complejos y demasiado simples de la condición humana" (Ibid., p. 39). Así habría que interpretar, según Rials, la defensa de Hayek, de lo que llama órdenes espontáneos, y en primer lugar del orden del mercado que habría que proteger frente a la amenaza constructivista y voluntarista de la acción política y la deliberación. De este modo el conservantismo es sobre todo "una duda acerca de lo político" (p.40), en último término, "un rechazo de la política porque la política es siempre la puesta en obra de una voluntad" (p.41).

Radicalizando el gesto original del liberalismo, el neo-liberalismo es también un rechazo a la democracia. Para el liberal, según Hayek, de nuevo, "la democracia (es) esencialmente un medio, un instrumento utilitario para salvaguardar la paz interna y la libertad individual" (Hayek, 1944:52). Se refiere a "un método o procedimiento para determinar decisiones gubernativas, y no se refiere a algún bien o propósito sustancial del gobierno (tal como un tipo de igualdad material), tampoco es un método que puede ser significativamente aplicado a organizaciones no-gubernamentales (tal como educacionales, médicas, militares o establecimientos comerciales). Estos dos abusos privan a la palabra "democracia" de cualquier significado claro" (1980:28). Si se combina con intentos de implementar derechos sociales y económicos o de establecer medidas de justicia social, "una democracia puede muy bien hacer uso de un poder totalitario" así como resulta perfectamente concebible "que un gobierno autoritario actúe sobre la base de principios liberales" (citado en Arturo Fontaine Aldunate, 1980: 131). Por ello también "la democracia necesita de restricciones aún más severas que otras formas de gobierno, ya que está más sujeta a la presión efectiva por parte de intereses especiales... de los cuales depende su mayoría" (Ibid., 47). En este sentido me parece que tienen razón Chantal Mouffe y Ernesto Laclau cuando aducen que el neo-liberalismo



es un intento de terminar con las democracias liberales de postguerra que intentaban articular derechos sociales y económicos democráticos con derechos individuales liberales, a través de la eliminación de todo contenido democrático de los Estados liberales.

II. Es exactamente esta articulación de neo-liberalismo y corporativismo la que domina los documentos políticos más importantes en que se expresa la ideología del régimen militar, y especialmente su texto político fundacional, la *Declaración de Principios del Gobierno de Chile*, de 1974.

Durante el transcurso del régimen dictatorial, sin embargo, irá desdibujándose progresivamente el corporativismo gremialista, útil en la fase insurreccional contra el gobierno de la Unidad Popular, pero que representa de alguna manera limitaciones importantes, por parte de los gremios y colegios profesionales, al intento de imponer el dominio incontrarrestable del capital nacional y transnacional y a la construcción de una sociedad de mercado total, cuya legitimación teórica es el pensamiento neo-liberal.

Un hito de este abandono progresivo es una columna editorial de *El Mercurio* titulada "Un hermoso discurso equívocado", en la que Jaime Guzmán, uno de los líderes políticos e intelectuales más destacados del gremialismo, discute las ideas corporativistas de José Antonio Primo de Rivera, cuestionando su rechazo de la democracia política a la que Guzmán propone aceptar de una manera instrumental, en términos similares a los que veíamos en Hayek.

Un síntoma importante de esta nueva postura aparece con ocasión de la discusión, en el seno de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, del tema del sufragio universal, objetado como método político por muchos miembros de la Comisión. En un artículo de 1979 publicado por la revista *Realidad* titulado "El sufragio universal y la nueva institucionalidad" Guzmán propone aceptar tácticamente el sufragio universal "como método ampliamente predominante pero no excluyente para generar las autoridades políticas" (1979:39-40). Contra las objeciones corporativistas (o militaristas) a esta postura, Guzmán elabora una respuesta pragmática que incluye el sufragio universal limitado en la nueva institucionalidad en gestación, a pesar de sus múltiples inconvenientes y peligros. Entre estos peligros subraya especialmente que "establece una igualdad irreal" entre los hombres, que desata "una lucha permanente por el poder...con la consiguiente tendencia a las promesas demagógicas" y permite que "a través de la demagogia penetren ideas totalitarias que pueden conculcar la libertad" (34-35). Para enfrentar estos peligros, diseña en el artículo todo un conjunto de dispositivos que aparecerán después en la Constitución de 1980. Entre estos dispositivos se destaca que el sufragio universal genere sólo parcialmente el poder legislativo. En segundo lugar propone un conjunto de límites al pluralismo político que convergen en la exclusión de las ideas marxistas. Por último, establece también que "una institucionalidad concebida al servicio de la libertad y el progreso debe robustecer una economía libre, sin la cual una democracia política puede terminar

reduciéndose a una fórmula hueca" (41). Como si esto no fuera aún suficiente, este sistema institucional debe reforzarse con un presidencialismo fuerte, con un Consejo de Seguridad Nacional que institucionaliza la presencia militar en decisiones políticas importantes, con un Tribunal Constitucional que limita las atribuciones del parlamento y sólo parcialmente democrático y con la autonomía del Banco Central que hace que el sistema económico de mercado no esté sujeto a las decisiones democráticas. Finalmente, piensa Guzmán que el tránsito hacia la democracia así definida no debiera comenzarse sino a partir del momento en que el país haya alcanzado un nivel de desarrollo económico efectivo con el fin de conseguir "un compromiso ciudadano masivo con el sistema que impere"(43).

III. Creo que nuestra visión actual de la Constitución misma de 1980, es hoy bastante más completa gracias a los trabajos de Renato Cristi sobre el pensamiento político de Jaime Guzmán y la génesis del texto constitucional mencionado.

En primer lugar, la interpretación de Cristi contribuye a desautorizar cualquier interpretación del golpe militar de 1973 en términos de restauración de la legalidad quebrantada por el gobierno de Allende. Aparentemente, ya desde una fecha tan temprana como el 13 de septiembre de 1973, y en el Acta de la primera reunión de la Junta Militar, se consigna que "se encuentra en estudio la promulgación de una nueva Constitución Política del Estado, trabajo que está dirigido por el profesor Dn Jaime Guzmán" (p.122). Poco después, en el Acta N° 7, se nombra a una Comisión de Juristas de 4 miembros lo que se completa en el Acta 10 y 17 en que el número de miembros se eleva a 8. Esto quiere decir, pues, que ya desde ese momento, se busca, no modificar la Constitución de 1925, sino que establecer dictatorialmente en Chile un nuevo tipo de institucionalidad, básicamente antagónico de la Constitución liberal y democrática vigente hasta 1973.

En la justificación de esta manera de proceder se utiliza, en segundo lugar, un aparato conceptual específico, en el que el concepto más importante es el de Poder Constituyente elaborado en la década de 1930 por el teórico constitucional del nacional-socialismo alemán, Carl Schmitt y que había tenido mucha difusión en la España de Franco a través de discípulos como Alvaro d'Ors, Luis Legaz y Lecambra y Luis Sánchez Agesta, cuyos trabajos han contribuido probablemente a su difusión en Chile.

Schmitt había definido a este Poder Constituyente como "la voluntad política cuya fuerza o autoridad es capaz de adoptar la concreta decisión de conjunto sobre el modo y forma de la propia existencia política" (Schmitt, 1982, 93-94). Este Poder Constituyente no tiene carácter normativo y formal, como las decisiones constitucionales o inconstitucionales de algún poder constituido, sino puramente fáctico.

Los análisis de esta Comisión y los trabajos preparatorios de la propia Constitución van desarrollando esta lectura schmitteana a partir de la cual el Poder Constituyente, en definitiva el fundamento del



poder político, tras el texto de 1980, no corresponde ya al pueblo, como en una Constitución democrática, sino a una suerte de dictadura soberana cuya cabeza son las autoridades militares de facto.

Según la lectura de Cristi, el hecho de que el Poder Constituyente de la Constitución del 80 no es el pueblo, queda nuevamente de manifiesto en la Consulta a la que se somete el texto en ese año, la que carece de poder resolutorio y que no hay que entender en modo alguno como un plebiscito. Este carácter meramente consultivo de la votación de 1980 queda claramente de manifiesto, por ejemplo, en una carta titulada *Declaración de Profesores de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile respecto de la Convocatoria a Plebiscito para Ratificar la Constitución* publicada por *El Mercurio* el 24 de agosto de 1980 y firmada por Jaime Guzmán, Hernán Larraín Fernández, Jaime del Valle y Gustavo Cuevas Farron entre otros. En esta *Declaración*, analizada por Cristi se afirma que: "el Poder Constituyente originario no reconoce limitación formal alguna en su ejercicio, ya que el ordenamiento jurídico positivo fundamental será precisamente el resultado de dicho ejercicio, sin que preexista otro alguno vigente al cual deba sujeción". En consecuencia, señala la *Declaración* en referencia a la Consulta: "bien pudo la Honorable Junta de Gobierno, en cuanto titular del Poder Constituyente originario, haberse limitado en su ejercicio a los estudios efectuados por la Comisión Constituyente, el Consejo de Estado y ella misma haber dictado y puesto en vigencia la nueva Constitución sin más trámite. Luego mal puede restarse validez a la convocatoria a plebiscito que por razón de prudencia y no de necesidad jurídica se ha estimado del caso llevar a cabo, cuando pudo haberse prescindido de este trámite". Paradójicamente, según Cristi, es recién el Plebiscito de 1988 el que indirectamente vuelve a introducir al Poder Constituyente del pueblo en la Constitución de 1980. Por otra parte esta confusión conceptual entre Consulta y plebiscito no carece de consecuencias, ya que hasta 1998 hay fallos del Tribunal Constitucional en que se sostiene la idea de que el Poder Constituyente originario surge con ocasión del quiebre institucional de 1973.

La consecuencia que podría sacarse de estos análisis es que, si bien es cierto que la Constitución de 1980 y su modificación por el plebiscito de 1989 - en parte como consecuencia de la fuerza política alcanzada por la oposición a la dictadura y en parte por las concesiones de parte fundamental de esta misma oposición - instituyen un sistema democrático limitado, y no un poder militar permanente o un régimen corporativo integral, dejan subsistir aún una peligrosa indefinición constitucional en lo que se refiere al poder constituyente originario, al que una sentencia del Tribunal Constitucional tan tardíamente como en 1998 identifica indirectamente con el poder fáctico militar.

IV. En los análisis que se hace a veces sobre el componente neo-liberal o neo-conservador de la ideología de la derecha se lo considera como un aporte a la modernización de la sociedad chilena, que la pone a tono con el fenómeno de la globalización o la

mundialización y en todo caso como un elemento progresista o incluso liberalizador, que sería uno de los pocos - tal vez el único - legado positivo de la dictadura militar a la política del futuro. Me parece que se debiera mirar de una manera mucho más cauta y ciertamente también mucho más crítica a este componente del discurso que analizamos, sobre todo si consideramos su significación a nivel de políticas sociales.

Para fijar ideas desde el comienzo, querría sostener sobre este punto dos hipótesis: la primera es que el neo-liberalismo es, por lo menos, tanto una teoría económica como una política, y la segunda, ligada con la primera, es que no hay que asociar al neo-liberalismo con ningún proyecto de libertad sino más bien con un intento de control social global.

Creo que se puede mostrar esto que digo si estudiamos en el caso chileno la lógica de estas transformaciones de la sociedad según el modelo neo-liberal, en las llamadas Modernizaciones que comienzan en 1979 con la aplicación del Plan Laboral y con la Directiva Presidencial sobre Educación y continúan en 1980 con la Ley de Universidades y la Reforma Previsional.

En un comentario de la revista oficialista *Realidad*, de julio de 1979 dedicado al análisis del Plan Laboral del Ministro José Piñera se subraya que lo principal de este plan tiene que ver con el hecho que: "la despolitización sindical... ahora se fomenta atacando los pilares sobre los cuales se apoyaban tanto el poder de ciertas camarillas... como la acción corrosiva del marxismo... Un sindicalismo libre tendrá todo el poder que los trabajadores le confieran, pero a la vez se levantará como un dique infranqueable para la instrumentalización comunista" (Nº 2, p. 4-5). Del mismo modo, sobre las políticas de privatización de empresas públicas, la revista *Estudios Públicos* Nº 27 de 1989 recoge un comentario de sir Alan Walters, principal asesor económico de Thatcher en que sostiene que "Es sabido que los sindicatos laborales prosperan enormemente en el sector público... Lógicamente, no se puede garantizar que la privatización vaya a neutralizar totalmente a los dirigentes sindicales o a restarles poder... La privatización parece ser más bien una condición necesaria que suficiente..." (p.9).

Del mismo modo, a propósito de la Ley de Universidades dice, por ejemplo, Alvaro Bardón en una columna de *El Mercurio* del 10 de julio de 1980 y titulado "Otra vez el activismo estudiantil" que lo más notable "es que en nuestro país el Estado ayuda a la organización de los agitadores. En lugar de dejar en libertad a los estudiantes para organizarse como quieran, les dicta normas para que se junten y les obliga a afiliarse. ¿por qué no se aplica la lógica de libertad del Plan Laboral? ¿Por qué no se aplica la lógica económica más elemental a la educación superior?"

Como creo que puede verse en estos ejemplos, lo que menos puede decirse es que la lógica económica del neo-liberalismo es indisolublemente una lógica de control social. No es una lógica de progreso ni menos aún una especie de revolución. Como lo dice José Piñera en un número de *Qué Pasa* de 1979 "La última revolución es arrebatar el poder del Estado y devolverlo

a los individuos, para terminar con todas las revoluciones"

Me parece que el proyecto neo-liberal no incluye este contenido autoritario y conservador por azar. Es en su núcleo significativo mismo que -me parece- el neo-liberalismo es en primer lugar una política y no una receta técnica. Una política -además completamente planificada- que apunta a desmantelar la Economía Política del Estado de Bienestar que si ha sido, en cambio, según Karl Polanyi una especie de producción espontánea de defensa frente a la precariedad y a la vulnerabilidad a la que la economía de mercado autoregulada somete a todas las categorías de asalariados.

Se trata, probablemente, como lo muestra, por ejemplo, M. Burawoy de una nueva etapa del desarrollo de la economía de mercado caracterizada por la extrema movilidad y transnacionalización del capital, como respuesta estratégica a la institucionalización de los derechos sociales y económicos, la que se expresa en la ideología neo-liberal y sus consignas de flexibilidad laboral y desregulación.

Es en este sentido que sostenemos entonces que el neo-liberalismo es una política, una nueva forma de relaciones de poder en la economía, la que redundará según Burawoy en una nueva forma de despotismo. Este nuevo despotismo, según este autor, no es, como el antiguo despotismo del mercado, la tiranía sobre los trabajadores individuales. Es la tiranía "racional" de la movilidad del capital sobre el trabajador colectivo. En esta nueva etapa el miedo a ser despedido es reemplazado por el miedo a la fuga de los capitales, del cierre de fábricas... y de la desinversión". Ahora "los estados y comunidades luchan unas con otras en sus intentos por atraer al capital. Los estados y comunidades se superan unos a otro en la oferta de protección contra impuestos y en la relajación de la legislación laboral". (1985:150, 151,152). El mercado no parece, pues, representar en este sentido la promesa de una nueva libertad sino más bien la construcción de una nueva forma de poder y de control sobre el trabajo y la vida cotidiana de la gente común, basada en la amenaza constante de la pesadilla del desempleo y una permanente inseguridad en trabajos cada vez más precarizados.

Para concluir diré solamente que si esta descripción es cierta, se hace difícil concebir las razones por las cuales el modelo político ideado para la transición, aparte de su compromiso con una concepción elitista y consensual de la democracia, incluyó también la aceptación de una ideología económica que tiene un contenido antidemocrático tan fuerte y contra la cual el movimiento de oposición a la dictadura militar se enfrentó con tanta fuerza como la que lo opuso al autoritarismo de la derecha en el poder.

#### REFERENCIAS

- Rials, Stéphane, "La droite ou l'horreur de la volonté" en *Le Debat*, 1985.
- Fontaine Akumate, Arturo "Mas allá del Leviatán", *Estudios Públicos* 1, 1980
- Burawoy, Michael, *The politics of production*, Londres, Verso, 1985
- Schmitt, Carl, *Teoría de la Constitución*, Madrid, Alianza Editorial, 1982
- Cristi, Renato, *El pensamiento político de Jaime Guzmán. Autoridad y Libertad* Lom Ediciones, 2000.



# TRANSFORMACIONES HISTÓRICAS

## Y CAMBIOS DE IDENTIDAD CULTURAL

Jorge Larraín

Director del Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Alberto Hurtado

Como lo han sostenido algunos autores, "la identidad sólo es un tema cuando está en crisis, cuando algo que se supone fijo, coherente y estable es desplazado por una experiencia de duda e incertidumbre." La identidad se convierte en un problema en los periodos de inestabilidad y crisis, cuando hay una amenaza a los modos establecidos de vida. En situaciones de paz, prosperidad y confianza en el futuro, la identidad se da por sentada, no hay motivos para que surja la pregunta por la identidad. Por eso nuestros últimos 30 años han sido especialmente ricos en discusiones sobre la identidad nacional. Hay que reconocer, sin embargo, que la amenaza a los modos establecidos de vida, las dudas y la incertidumbre empezaron antes de 1973. Para muchos comenzaron con la elección de Salvador Allende en 1970. No me cabe duda que ella precipitó al país en una crisis, pero el golpe militar en vez de solucionar la crisis la profundizó aún más, haciendo surgir nuevas dudas sobre la identidad. Esas dudas tienen que ver con la capacidad de los chilenos para seguir considerándose miembros de la misma comunidad imaginada.

Las personas pueden sentirse miembros de una comunidad cuando son reconocidas como tales por los demás, cuando su integridad física, sus derechos y su contribución son respetados, garantizando así la auto-confianza, el auto-respeto y la auto-estima que son la base tanto de la identidad de cada cual como de la identidad colectiva que se comparte. Aquí se juegan dos elementos esenciales de toda identidad: la presencia del "otro" y de las posesiones materiales. Los otros son cruciales en

la construcción de toda identidad porque toda auto-imagen está basada tanto en las evaluaciones de los demás que se internalizan como en la diferenciación con los otros que se consideran fuera de la comunidad. Los elementos materiales como el cuerpo y otras posesiones, son también fundamentales para toda identidad porque le entregan al sujeto elementos vitales de auto-reconocimiento. Los seres humanos proyectan su sí mismo, sus propias cualidades en su cuerpo y en sus otras posesiones, se ven a sí mismos en ellas y las ven de acuerdo a su propia imagen.

El problema más serio para una identidad nacional surge cuando algunos de los miembros de la nación dejan de ser reconocidos como parte de la comunidad sea porque su integridad física o la de sus posesiones más preciadas no es respetada, sea porque sus derechos y sus contribuciones son sistemáticamente desconocidos. En otras palabras, un conjunto de personas que eran miembros de la comunidad pasan a ser considerados como otros de oposición, como individuos que están fuera de la comunidad. Se les niega como otros internos con los que hay que mantener un sentido de mínima fraternidad. Si bien hay que reconocer que el periodo de Allende divide al país políticamente y eleva los niveles de hostilidad y agresividad entre los dos bandos opuestos, lo que dificulta un sentido de fraternidad compartida, el régimen militar pasa de la agresividad y hostilidad a la tortura y la eliminación física del "otro" derrotado, al que ya no se le considera parte de la comunidad. La exclusión de la comunidad se extiende también de modo físico a los que se exilia, a los que no se deja

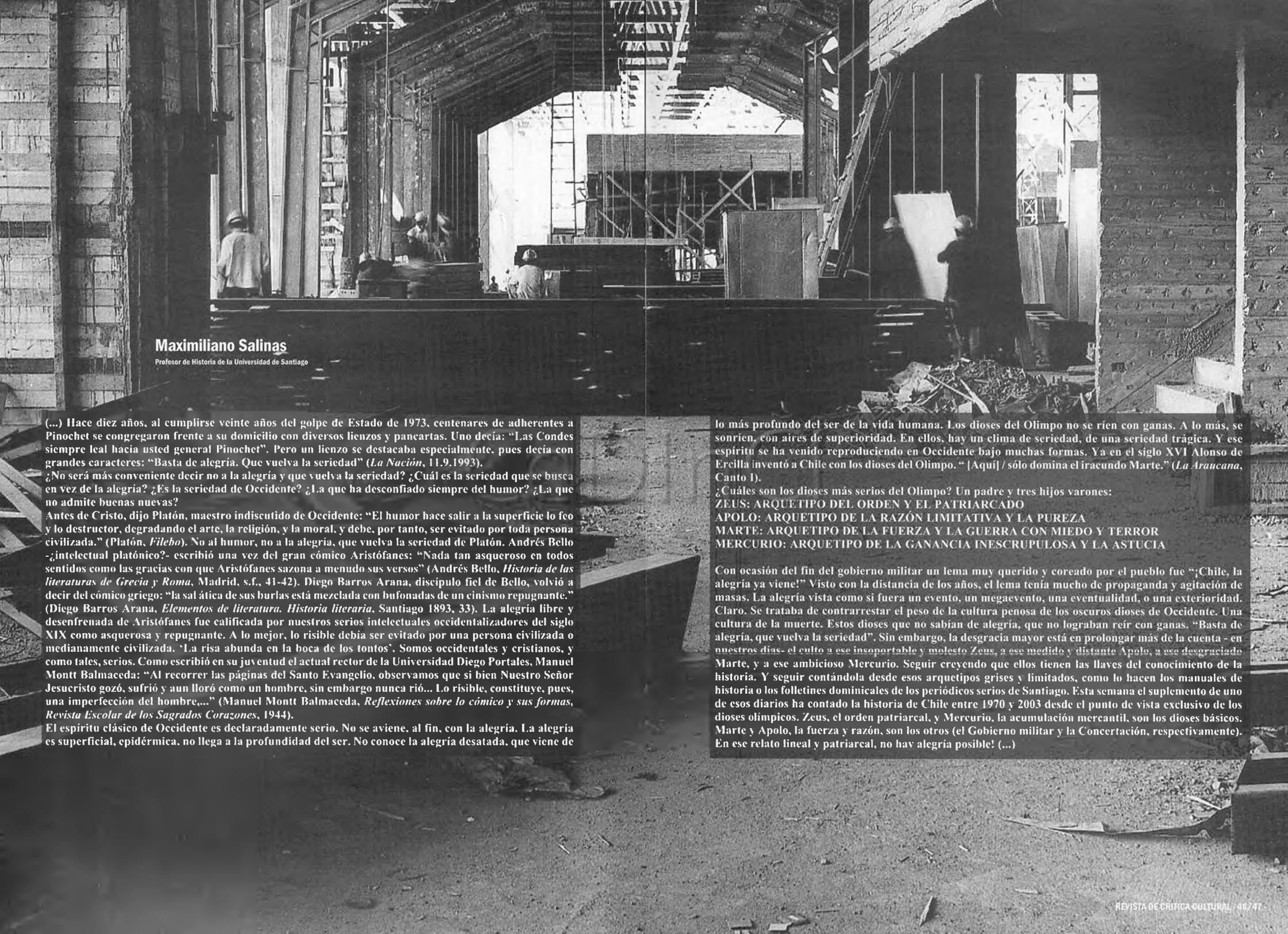
regresar, a los que no se les da pasaporte, a los que se priva de la nacionalidad. Simbólicamente se extiende también a todos los que apoyaron al régimen anterior y permanecen en el país: se les delata, se les vigila, se les expulsa del trabajo, se les denomina "humanoides" o "enemigo interno" o se les aconseja que se vayan a Cuba.

Desde el punto de vista de la identidad nacional no cabe duda que hay una importante diferencia de grado entre las tensiones que introduce la Unidad Popular y la dislocación que produce el régimen militar. En la primera se estigmatiza y estereotipa al contrario y se dificulta el sentido de fraternidad; en la segunda, el contrario derrotado es excluido de la comunidad y se acaba toda fraternidad. Sin embargo, también es necesario explicar el porqué de la escalada, el porqué de ese tránsito de los "errores" a los "horrores" (como lo han puesto algunos) con respecto al otro bando. Y aquí es donde, para entender esto más a fondo, quizás sea necesario recurrir a la importancia de los elementos materiales de la identidad. Si es cierto que los seres humanos se proyectan a sí mismos en sus posesiones materiales y se reconocen en ellas, no es algo menor el sentirse injusta o arbitrariamente despojado de ellas porque es la propia identidad la que es vicariamente negada y el sentimiento de rabia e impotencia que produce tal atentado puede fácilmente transformarse en una reacción desmedida contra el supuesto culpable.

No es tan difícil entender que para muchos expropiados por la Unidad Popular, las pérdidas materiales se entendieron también como un

atentado a su ser más íntimo. La expropiación fue más que una pura pérdida material, fue un atentado contra su misma dignidad como persona. Esto pasó con mucha gente y se acumuló mucha rabia y temor. Como lo ha dicho Lechner, "la subjetividad importa", "los miedos son una motivación poderosa de la actividad humana y, en particular, de la acción política". Dentro de los miedos, el "miedo al otro" juega un rol especial. De allí que, aunque no se pueda justificar éticamente, al menos es posible entender que la respuesta contra la Unidad Popular haya tenido el carácter brutal y despiadado que tuvo.

Pero a esa brutalidad se agrega un elemento nuevo que también tiene que ver con la base material de la identidad. Con las víctimas del régimen militar se realiza un atentado que va más allá de la pura exclusión, se intenta hacer desaparecer la base material misma de su identidad individual: los cuerpos. No sólo se los asesina, sino que se busca obliterar de la memoria histórica nacional hasta el último rastro identitario de esos otros internos. La eliminación física y las otras formas de exclusión son los elementos claves que fracturan en forma inevitable esa comunidad imaginada que es la nación. El desaparecimiento de los cuerpos logra algo más: que la fractura perdure en el tiempo hasta hoy, porque a un grupo significativo de la comunidad no se le reconoce la existencia misma de sus muertos. Negación más total de su identidad no puede haber. En tales circunstancias es imposible esperar un nivel mínimo de fraternidad con aquellos que perpetraron y avalaron esas acciones. (...)



## Maximiliano Salinas

Profesor de Historia de la Universidad de Santiago

(...) Hace diez años, al cumplirse veinte años del golpe de Estado de 1973, centenares de adherentes a Pinochet se congregaron frente a su domicilio con diversos lienzos y pancartas. Uno decía: "Las Condes siempre leal hacia usted general Pinochet". Pero un lienzo se destacaba especialmente, pues decía con grandes caracteres: "Basta de alegría. Que vuelva la seriedad" (*La Nación*, 11.9.1993).

¿No será más conveniente decir no a la alegría y que vuelva la seriedad? ¿Cuál es la seriedad que se busca en vez de la alegría? ¿Es la seriedad de Occidente? ¿La que ha desconfiado siempre del humor? ¿La que no admite buenas nuevas?

Antes de Cristo, dijo Platón, maestro indiscutido de Occidente: "El humor hace salir a la superficie lo feo y lo destructor, degradando el arte, la religión, y la moral, y debe, por tanto, ser evitado por toda persona civilizada." (Platón, *Filebo*). No al humor, no a la alegría, que vuelva la seriedad de Platón. Andrés Bello -¿intelectual platónico?- escribió una vez del gran cómico Aristófanes: "Nada tan asqueroso en todos sentidos como las gracias con que Aristófanes sazona a menudo sus versos" (Andrés Bello, *Historia de las literaturas de Grecia y Roma*, Madrid, s.f., 41-42). Diego Barros Arana, discípulo fiel de Bello, volvió a decir del cómico griego: "la sal ática de sus burlas está mezclada con bufonadas de un cinismo repugnante." (Diego Barros Arana, *Elementos de literatura. Historia literaria*, Santiago 1893, 33). La alegría libre y desenfrenada de Aristófanes fue calificada por nuestros serios intelectuales occidentalizadores del siglo XIX como asquerosa y repugnante. A lo mejor, lo risible debía ser evitado por una persona civilizada o medianamente civilizada. 'La risa abunda en la boca de los tontos'. Somos occidentales y cristianos, y como tales, serios. Como escribió en su juventud el actual rector de la Universidad Diego Portales, Manuel Montt Balmaceda: "Al recorrer las páginas del Santo Evangelio, observamos que si bien Nuestro Señor Jesucristo gozó, sufrió y aun lloró como un hombre, sin embargo nunca rió... Lo risible, constituye, pues, una imperfección del hombre,..." (Manuel Montt Balmaceda, *Reflexiones sobre lo cómico y sus formas*, *Revista Escolar de los Sagrados Corazones*, 1944).

El espíritu clásico de Occidente es declaradamente serio. No se aviene, al fin, con la alegría. La alegría es superficial, epidérmica, no llega a la profundidad del ser. No conoce la alegría desatada, que viene de

lo más profundo del ser de la vida humana. Los dioses del Olimpo no se ríen con ganas. A lo más, se sonríen, con aires de superioridad. En ellos, hay un clima de seriedad, de una seriedad trágica. Y ese espíritu se ha venido reproduciendo en Occidente bajo muchas formas. Ya en el siglo XVI Alonso de Ercilla inventó a Chile con los dioses del Olimpo. " [Aquí] / sólo domina el iracundo Marte." (*La Araucana*, Canto I).

¿Cuáles son los dioses más serios del Olimpo? Un padre y tres hijos varones:

ZEUS: ARQUETIPO DEL ORDEN Y EL PATRIARCADO

APOLO: ARQUETIPO DE LA RAZÓN LIMITATIVA Y LA PUREZA

MARTE: ARQUETIPO DE LA FUERZA Y LA GUERRA CON MIEDO Y TERROR

MERCURIO: ARQUETIPO DE LA GANANCIA INESCRUPULOSA Y LA ASTUCIA

Con ocasión del fin del gobierno militar un lema muy querido y coreado por el pueblo fue "¡Chile, la alegría ya viene!" Visto con la distancia de los años, el lema tenía mucho de propaganda y agitación de masas. La alegría vista como si fuera un evento, un megaevento, una eventualidad, o una exterioridad. Claro. Se trataba de contrarrestar el peso de la cultura penosa de los oscuros dioses de Occidente. Una cultura de la muerte. Estos dioses que no sabían de alegría, que no lograban reír con ganas. "Basta de alegría, que vuelva la seriedad". Sin embargo, la desgracia mayor está en prolongar más de la cuenta - en nuestros días- el culto a ese insoportable y molesto Zeus, a ese medido y distante Apolo, a ese desgraciado Marte, y a ese ambicioso Mercurio. Seguir creyendo que ellos tienen las llaves del conocimiento de la historia. Y seguir contándola desde esos arquetipos grises y limitados, como lo hacen los manuales de historia o los folletines dominicales de los periódicos serios de Santiago. Esta semana el suplemento de uno de esos diarios ha contado la historia de Chile entre 1970 y 2003 desde el punto de vista exclusivo de los dioses olímpicos. Zeus, el orden patriarcal, y Mercurio, la acumulación mercantil, son los dioses básicos. Marte y Apolo, la fuerza y razón, son los otros (el Gobierno militar y la Concertación, respectivamente). En ese relato lineal y patriarcal, no hay alegría posible! (...)

# REDEMOCRATIZACIÓN Y PACTO NEOLIBERAL

**Manuel Antonio Garretón**

Sociólogo, Universidad de Chile

Más que repetir cosas ya escritas, voy a tratar de reflexionar sobre el tema planteado en el título de la mesa: "Redemocratización y pacto neoliberal". Yo hablaría más bien de "Neoliberalismo y pacto de redemocratización", en el sentido de que yo no creo que exista algo así como un pacto neoliberal.

Cuando hablamos de pactos, hablamos de algo complejo que posee distintas significaciones. Es diferente, por ejemplo, es hablar de pacto electoral, de pacto de gobierno, del pacto fundante de un régimen político. Cuando los sociólogos o los científicos políticos hablan del pacto que funda el Estado de bienestar, por ejemplo, están hablando más bien de un pacto de clases. Podríamos decir, entonces, que cuando hemos hablado del Estado de compromiso en Chile, entre los años treinta y sesenta, hablábamos de un cierto pacto, a veces ni siquiera explícito, que conllevaba industrialización, expansión del Estado, democracia política y social. Aunque también significaba la exclusión del campesinado y del mundo poblador, básicamente, ese pacto —que, obviamente, no se firmó nunca como acuerdo— era un pacto de inclusión social, de incorporación creciente de la población a la modernización social.

¿En qué sentido se podría hablar de "pacto", en el paso del régimen militar a la democracia en Chile? Yo creo que si hubo una negociación que significó aceptar los términos de una Constitución que había sido impuesta por un plebiscito fraudulento de la dictadura, y luego tratar de reformar esta constitución, o algunas normas de ella, entre el momento en que se triunfa en el plebiscito y las primeras elecciones presidenciales. Pero no creo que el pacto como acuerdo político vaya mucho más allá que eso.

Si miramos las cosas desde una perspectiva más sociológica y menos política, diríamos que se constituyó un cierto orden que, desde fuera, se puede leer como un pacto pero habría que insistir en que este país no tiene un real consenso sobre los fundamentos del orden socioeconómico y político. No es cierto que haya consenso en Chile respecto del orden constitucional, y desde ya la mayoría del país opina que la Constitución debe ser cambiada enteramente. No es cierto que haya consenso respecto del modelo neoliberal tal como lo había antes, en lo económico, respecto del proceso de industrialización. No hay consenso en materia ética, como lo demuestra el actual debate sobre los derechos humanos, ni sobre el sistema educacional: ¿quién dice que estamos de acuerdo en tener el sistema universitario que tenemos hoy?

Tenemos un orden impuesto y heredado que sólo hemos sido capaces de cambiar parcialmente, aunque lo hemos usado para hacer correcciones bastante significativas. El gran problema es que, como no nos ha ido mal —comparativamente— en lo económico (al menos en la superación de la pobreza aunque no en disminuir la desigualdad), no sólo aceptamos por necesidad lo heredado sino que empezamos a defenderlo como modelo. ¿Este es el único país del mundo que tiene una Constitución heredada de una dictadura y que tuvo a su dictador como Comandante en Jefe durante 7 años y como Senador Vitalicio! No parece que eso sea una transición "exitosa" ni "ejemplar".

Creo que hay dos responsabilidades en la ausencia de debate para fundar un nuevo orden constitucional. Por un lado, los "enclaves autoritarios" que sí significaron un chantaje de poder, un chantaje institucional, de la derecha para que no se modificara el sistema. Este chantaje de la derecha y sus poderes fácticos se manifiesta, por ejemplo, en el hecho de que en Chile la agenda del país la dicta el diario *El Mercurio*.

Pero, por otro lado, hay un problema en la conducción de la Concertación.

Yo soy una persona estrictamente de la Concertación, una persona que cree que el único producto de exportación que vale la pena de la transición chilena es la Concertación de partidos por la democracia tal como, en el caso de la transición española, lo más valioso es el diario *El País*.

Sin embargo, me parece que la Concertación ha tenido una conducción muy errada en la posibilidad de re-fundar un orden socioeconómico y político, y ésta sigue siendo una tarea pendiente. En efecto, ¿se podría haber cambiado la Constitución? Yo estoy convencido de que sí. Hay que preguntarse si era realmente necesario aceptar el quórum de tres quintos para cambiar la Constitución, con un sistema binominal que nunca iba a poder garantizar ese quórum. Era posible haber tenido una alternativa. No era necesario agregarles a los "enclaves autoritarios", los amarres de las negociaciones de la transición. No eran necesarias las negociaciones a las que nos llevaron nuestros amigos quienes condujeron el primer gobierno democrático. No era necesario haber hecho una tan pésima reforma laboral ni una tan mala reforma tributaria. No era necesario que la Comisión Rettig no incluyera los casos de tortura. No era necesario haberle entregado a la derecha el 50% de Televisión Nacional con el principio de autofinanciamiento —transformando un canal público en canal privado— ni haber liquidado explícitamente la posibilidad de medios de comunicación alternativos cuando existían todas las posibilidades de promoverlos y desarrollarlos: No era necesario haber claudicado en la reforma de la educación superior ni, en general, en el cambio de la mayor parte de la institucionalidad heredada.

Lo que deseo enfatizar es que el que la Concertación haya sido la única opción posible, y así lo creo, no quiere decir que todas las opciones que su conducción tomó sean igualmente válidas ni que éstas eran las únicas opciones. Si eso que se hizo era lo único posible, quiere decir que la política no existe, que no hay política, ya que la política debía consistir, precisamente, en expandir los límites políticos y sociales de la transición.

## Carlos Huneeus

Profesor del Instituto Internacional de la Universidad de Chile, Director ejecutivo de la Corporación CERC

(...) El contexto político de la transformación económica tiene considerables consecuencias en el sistema económico que surge de ésta, dependiendo si se trata de un régimen democrático o uno no-democrático, ya sea autoritario o totalitario.<sup>1</sup> Esto es así, porque determina algunos de los principales elementos de la arquitectura institucional económica que se mantienen en el tiempo, más allá de los cambios de regímenes políticos, y condiciona los grupos sociales y políticos que se benefician de las decisiones de la autoridad y sus efectos en el desarrollo político son diferentes.

En aquellos países en que la modernización económica fue de la mano con el desarrollo democrático, como Inglaterra y Holanda, el orden económico y el orden político se apoyaron y complementaron, creando una diversificada institucionalidad que permitió la articulación de los intereses de los principales grupos sociales y con amplios canales de participación de los trabajadores, con lo cual ambos consiguieron una alta legitimidad. Aquí se encuentran las principales fuentes de la fortaleza de sus instituciones pluralistas, y, particularmente, de la madurez de la cultura cívica de sus élites y de sus habitantes. Ella permitió a Inglaterra no ceder a las amenazas del fascismo con ocasión de la crisis económica de los años 20 del siglo XX y a Holanda no tener en su población un sector que hubiera apoyado al nazismo cuando la Alemania de Hitler la invadió en 1940.

El caso más citado de modernización económica hecha en un contexto no-democrático fue el de Alemania realizada a fines del siglo XIX, a partir del impulso realizado por Prusia. Esta modernización se caracterizó por el activo protagonismo del estado, por el surgimiento de un empresariado dependiente de éste que se mantuvo ajeno al desarrollo de la democracia, y un movimiento sindical que se le concedió derechos políticos limitados, en comparación a los de los empresarios, con una débil integración al sistema político, que fue de carácter negativo. Esto repercutió en que un importante sector de los trabajadores, que perdieron sus puestos de trabajo por la gran crisis económica de 1929, acogiera el discurso demagógico del nacional socialismo, apoyándolo en las elecciones que le conducirán a la toma del poder en 1933. Hay una amplia bibliografía que atribuye el éxito electoral de Hitler y su acceso al poder en 1933 a estas condiciones de la modernización económica.<sup>2</sup> La industrialización alemana, realizada tardíamente y en forma acelerada, condujo a una poderosa economía, pero dejó importantes limitaciones en el sistema político. Ellas dificultaron la

consolidación de la democracia durante la república de Weimar, conduciendo al régimen de Hitler (1933-1945). España también fue un caso de desarrollo prusiano.

La modernización chilena se puede comparar con la que hubo en Alemania y España porque se hizo en un régimen autoritario, el que fue un estado dual caracterizado como tal porque, junto a la alta coerción, tuvo una racionalidad económica de carácter neoliberal que buscó echar las bases del despegue económico del país a través de profundas y ambiciosas reformas que se proponían contribuir a la legitimidad del orden político.<sup>3</sup>

Los dos rostros del autoritarismo estuvieron estrechamente vinculados entre sí y se complementaron. La cara coercitiva proporcionó óptimas condiciones políticas al equipo económico para llevar adelante su programa, disponiendo de una amplia discrecionalidad para actuar sin interferencias por parte de los militares.<sup>4</sup> Las reformas económicas permitieron a los uniformados presentarse como eficaces gobernantes, capaces de superar la gravísima crisis económica que tenía el país al momento del golpe de estado. De ahí que ese período de la historia de Chile no sólo está asociado a los crímenes, sino también a la modernización económica.

El programa económico que guió las reformas fue de orientación neoliberal y formulado e implementado por un numeroso y cohesionado grupo de tecnócratas, "los Chicago boys", que no eran neutrales políticamente, sino que tenían claras posiciones políticas, desarrolladas a lo largo de su vida profesional y en la oposición al gobierno de Salvador Allende. Esta adhesión política se tradujo en el empuje y el entusiasmo con que participaron en el régimen autoritario, asumiendo como un hecho que tuviera una cara coercitiva. Explica, además, el que Pinochet les diera una considerable autonomía para actuar y les entregó un apoyo total, decisión que no modificó en los momentos más difíciles, como en la crisis económica de 1982/1983.

Las ideas de este equipo de tecnócratas se aplicaron más allá de la economía, pues el neoliberalismo fue considerado como una cosmovisión.<sup>5</sup> La política, la economía y la sociedad fueron analizadas a través de sus categorías, predominando en ellas una visión idealizada del mercado y de los empresarios, junto a una percepción satanizada del estado, por lo cual rechazaban su intervención en la economía. Esto se manifestó en un prejuicio hacia las regulaciones, un nuevo ámbito estatal en los países que han tenido un vasto programa de privatización de sus empresas públicas, como ha argumentado Giandomenico

Majone a partir de la experiencia de Gran Bretaña y Oscar Muñoz con el caso chileno. Estas visiones sesgadas hacia el estado se mantienen y se expresan en políticas y en posiciones académicas, como el reduccionismo en el análisis de las complejidades de la modernización del estado a las medidas tendencias a excluir las influencias "partidistas" en los nombramientos de los altos funcionarios de la administración pública.

El poder político de "los Chicago boys" también se apoyó en el contexto político, pues no tuvieron que enfrentar a la oposición que cuestionaba sus medidas y denunciaba sus altos costos sociales, aunque se permitiera un cierto debate público sobre las políticas económicas, y en el respaldo que les entregaron los medios de comunicación, que los apoyaron en todo momento. El pluralismo limitado les permitió no tener que enfrentar a un movimiento sindical, pues sus dirigentes estaban severamente controlados por los militares, con una clara persecución en contra de los opositores. El pluralismo limitado que caracteriza al autoritarismo, según la clásica definición de Linz fue muy funcional al programa transformador del equipo económico.

La transformación económica iniciada por el autoritarismo dejó limitaciones institucionales en el sistema económico que han disminuido su legitimidad y marcó la cultura económica y cívica de una buena parte de los empresarios, que entienden las relaciones entre el poder político y el poder económico como de estrecha cooperación, en que se sienten poseer el derecho a recibir incentivos y ventajas económicas e institucionales por sobre los demás agentes económicos, los consumidores y la sociedad. Este tipo de cultura económica y política no favorece la legitimación de la democracia y del propio sistema económico.

Tres aspectos del impacto en la democracia del contexto autoritario en que se realizó la modernización económica consideramos en esta oportunidad: la insuficiente legitimidad del orden económico, especialmente por la visión ciudadana sobre la distribución de los beneficios del crecimiento; en segundo lugar, un empresariado politizado y con alto espíritu corporativo, que busca influir directa e indirectamente en el proceso político y, en tercer lugar, su efecto negativo en la política, contribuyendo a apoyar el alto grado de cinismo político que caracteriza la cultura cívica de los chilenos. (...)

### Notas

<sup>1</sup> Seguimos la clásica distinción siguiendo a Linz (2000).

<sup>2</sup> Me remito a Dahrendorf (1971) y a Lepsius (1978).

<sup>3</sup> La legitimidad del autoritarismo en torno al éxito económico lo analizamos en Huneeus (2000).

<sup>4</sup> Esto constituye una demostración del enorme poder que tuvieron, muy superior al que dispuso en Argentina el ministro de economía José Martínez de Hoz durante el régimen militar en conocido como "el proceso" (1976-1983), el cual en diversas oportunidades debió convencer a los militares acerca de la bondades de sus propuestas (Novaro y Palermo 2003).

<sup>5</sup> Usamos el término cosmovisión siguiendo a Ralf Dahrendorf (1997).



## José Antonio Viera-Gallo

Senador de la República, Partido Socialista

Quisiera precisar el lugar de mi reflexión en esta mesa. Primero, es el lugar de una persona que sobrevivió a la tragedia política enorme que dividió a este país. Y segundo, el lugar de quién atravesó un cambio civilizatorio y de época, marcado por la caída del muro de Berlín, la globalización, etc.. No es fácil haber pasado por dos épocas tan diferentes.

Quiero hablar de la política que hago todos los días, pero con clara esperanza y no con el desánimo permanente que recorre los ambientes de la izquierda. Ayer, estuve en una reunión amplada en el Partido Socialista y lo único que escuché son quejas, lamentos, críticas y desazones. De ahí a no hacer nada, hay sólo un paso. Y, por cierto, es muy difícil votar por fuerzas políticas tan quejumbrosas.

La forma que adoptó la Transición chilena se debió, a mi juicio, a un empate social y político. Nosotros no fuimos capaces de derrocar a Pinochet ni él fue capaz de perpetrarse en el poder. Y cuando se produjo este empate, no quedó otra que aceptar la Constitución y usarla. Ahí iniciamos un camino profundamente incierto, que no estaba escrito en ninguna parte. Había, al menos en algunos de nosotros, un fantasma: Alfonsín y el fracaso del primer gobierno democrático. Si eso pasaba no iba a ser como en Argentina donde Alfonsín tuvo que renunciar y hubo un recambio democrático. Lo más seguro es que aquí se fuera a producir una involución autoritaria. Y por parte de la derecha, ¿cuál era el fantasma? El fantasma de la revancha, de la venganza. Estos dos fantasmas moderaron a las dos fuerzas que nos habíamos enfrentado tan brutalmente en el período dictatorial. Y creo que hay que consignar otro hecho: la Concertación no pretendió nunca reeditar los caminos de Allende ni de Frei Montalva. Se unió la Democracia Cristiana con la izquierda, habiéndose entendido cabalmente que cuando se bombardeó la Moneda y cayó el muro de Berlín cayó también el segundo camino al socialismo del Presidente Allende, y que la revolución en libertad había concluido. Y entonces la Concertación tuvo la sabiduría de seguir un camino diferente, que llamó de "crecimiento con equidad". Ese camino ha sido, en lo básico y sustancial, muy exitoso en los planos del crecimiento económico, del progreso social y, también, en el afianzamiento de la cultura democrática. En el país hoy día respiramos aires de libertad y de pleno respeto hacia los derechos de las personas. Estos aires son tan fuertes que llevan incluso a las fuerzas políticas que respaldaron al régimen militar a tener que tomar distancia respecto de este régimen y a evolucionar.

Si hoy día terminara esta transición por efecto de algún congelamiento fotográfico, yo creo que mi generación sentiría haber saldado una deuda con este país porque nosotros también, con nuestra ingenuidad o irresponsabilidad, con nuestra verborrea revolucionaria, contribuímos a la crisis

que sumió al pueblo de Chile en una enorme tragedia.

Le he dedicado semanas y meses de trabajo al tema de la Constitución. Lo que advierto es que hay un consenso institucional muy arraigado en las fuerzas políticas chilenas, más allá incluso de la ciudadanía a la que se refiere M.A. Garretón. Hoy día tenemos no sólo los acuerdos de 1989, no sólo la democratización de los municipios, no sólo las reformas constitucionales posteriores sino una reforma en marcha que termina en la práctica con todos los "enclaves autoritarios". Permanece sólo como punto de discrepancia el sistema electoral. Pero hay que reconocer que son muchos los países donde no hay acuerdo sobre el sistema electoral. No se puede invalidar la democracia chilena a partir de que no hay consenso sobre la reforma del sistema electoral. Que la Constitución sea hoy respetada y, en gran medida, aceptada, no quiere decir, obviamente, que las fuerzas de cambio no aspiren a reformas constitucionales cada vez más profundas.

La paradoja es que este proceso que podríamos evaluar como exitoso, este proceso admirado en América Latina y en el mundo, sin embargo, genera desconfianza, malestar e insatisfacción en vastos sectores de la población. Yo mismo tengo la oportunidad de comprobarlo ya que, como parlamentario, recorro 26 comunas muy distintas (desde Talcahuano, Coronel hasta el Chile profundo de los campos), aunque es cierto que ese malestar no es igual según la estratificación de las clases sociales ni el grado de ruralidad o urbanización de las comunas. No tengo una respuesta contundente para explicar por qué, si Chile ha prosperado tanto en varios niveles, la población chilena no se siente satisfecha con lo hecho. En el campo estrictamente político, me preocupa esta visión exageradamente crítica. Uno de los mayores problemas de la Unidad Popular era que las fuerzas que sostenían el gobierno del Presidente Allende no creían en el proceso que él conducía. El Partido Socialista quería el enfrentamiento que iba a convertirse en algún momento en enfrentamiento armado, lo mismo el MIR, y el Partido Comunista aceptaba la gradualidad para algún día instalar la "dictadura del proletariado". Resulta que hoy día los partidos de la Concertación parecen no creer en el proceso que han impulsado. No lo defienden ni están orgullosos de él, más bien se avergüenzan. ¡Así no se gana elecciones! Sin convicciones fuertes, sin ganas y coraje, no hay apoyo popular. Pareciera que la Democracia Cristiana y el Partido Socialista no creen en la Concertación porque todavía añoran lo que dejaron atrás definitivamente. Hoy día la gente reivindica a Allende, pero ¿qué decía el Partido Socialista de Allende antes del golpe? Que era un "traidor". Sueñan hoy con lo que no fueron capaces de legitimar ayer. (...)





# EL DISCURSO PUBLICO SOBRE LA MORAL SEXUAL

## Kathya Araujo

Palcoanalista: Directora del Programa de Estudios de Género y Sociedad de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano

En 1996 los diarios santiaguinos consignaron, unos con más fervor que otros ciertamente, la airada respuesta de la iglesia católica a la propuesta por parte del gobierno de un programa de prevención en sexualidad: las llamadas Jornadas de Conversación en afectividad y sexualidad (JOCAS). Entre 1996 y 1997, voceros de la iglesia participaron en la disputa calificando esta propuesta como una simple cobertura para la entrega de condones a los jóvenes. Al mismo tiempo, usaron como argumento en contra, la supuesta ausencia de preocupación moral que lo orientaba. Del mismo modo, denunciaron el carácter perturbador de los principios familiares que implicaban las Jocas, pues consideraban que al poner en el mismo nivel la palabra de los padres, de los profesores y la de los jóvenes, desdibujaba lo que debería ser la preeminencia de la función parental. La iglesia, no sólo consiguió postergar el inicio de la implementación de este programa, sino que obligó al gobierno a sentarse a negociar con ella. El programa fue modificado, pero, además, la iglesia consiguió que el gobierno reconociera, con satisfacción, había que acotar, que había "conversado con ella y llegado a un acuerdo", admitiendo públicamente, de esta manera, el peso de esta institución y su derecho a intervenir e influir decisivamente en el ámbito de los asuntos públicos sobre sexualidad.

Dos o tres años después, una funcionaria del Servicio Nacional de la Mujer, se vio obligada a renunciar a su cargo porque el concurso para jóvenes que estaba bajo su responsabilidad debió ser cancelado por la intervención pública e informal de voceros de la iglesia. Se trataba de un concurso de cuentos sobre sexualidad, relatos de jóvenes en torno a sus experiencias o experiencias cercanas. La iglesia católica calificó el concurso de inapropiado y una amenaza para el desarrollo moral de los jóvenes.

A lo largo de la década pasada hemos sido testigos de la censura de campañas de prevención del VIH/SIDA, estimuladas por la iglesia y sus voceros políticos, nuevamente sostenidos en un casi sintomático horror al látex. También hemos testificado que en este lapso se ha mantenido, en mucho gracias a la presión eclesial, la prohibición del aborto, de espaldas a los calculados 100.000 o 150.000 abortos clandestinos anuales y al hecho de que el aborto es la primera causa de mortalidad materna, y, lo que ya es de una irresponsabilidad criminal, tanto del Estado como de la Iglesia, se ha dejado intocada la prohibición del aborto terapéutico.

Y éstas son sólo algunas perlas del rosario.

He empezado por recordar estos ejemplos para subrayar la importancia e influencia que ha seguido manteniendo la iglesia católica en el campo de los asuntos públicos relativos a la sexualidad en la década del noventa y hasta este momento, es decir, en los años de los regímenes democráticos concertacionistas. Es en torno a este punto que se organiza mi exposición Partiendo de la idea de que esta situación es resultado de fenómenos interconectados que se sitúan a nivel del Estado, de la iglesia y de la propia sociedad, quisiera en lo que sigue presentar algunas tesis acerca del papel del estado, y en este sentido de los gobiernos de la Concertación en tanto responsables de la política estatal de la última década, en este contexto.

Voy a ordenar mi exposición en tres tesis principales.

1) Los estados nacionales en América Latina, lo que incluye Chile, realizaron una delegación histórica a la iglesia católica del ámbito de la moral, lo que ha pervivido y deja sentir sus efectos hasta nuestros días. Esta dimensión histórica explicaría el carácter indiscutible y naturalizado de su presencia en la esfera pública e influencia en asuntos públicos en la actualidad.

La sexualidad no es un tema cualquiera como tampoco es un tema de mujeres, aunque haya sido principalmente el movimiento de mujeres y feminista el que haya insistido y llamado la atención respecto a que la sexualidad es una marca a partir de la cual se define el orden de lo que es incluido o excluido, así como cuáles

son las condiciones para la inclusión. La sexualidad, de este modo, es un instrumento de control y ordenamiento social extremadamente poderoso. Hay incontables evidencias históricas que demuestran la clara conciencia que ha habido siempre sobre este tópico, pero no voy a detenerme aquí en ellas. Más bien me gustaría subrayar, como lo ha señalado Guillermo Nugent<sup>1</sup>, autor que inspira el desarrollo argumentativo de esta primera tesis, lo sugerente que resulta destacar que, en la actualidad en América Latina: 1) los discursos explícitos sobre sexualidad sean un monopolio casi indisputado de los sectores conservadores y clericales, y 2) que este monopolio aparezca de algún modo desapercibido o naturalizado, y aparentemente tolerado por la sociedad en su conjunto y por la clase política en particular.

Sin duda, en parte, la naturalización de esta hegemonía, puede explicarse como resultado de que los afectados y afectadas sean principalmente grupos de mujeres, menores y minorías sexuales, los que por largo tiempo han sido invisibilizados y mantienen aún un menor acceso y legitimidad en la esfera de debate público.

Pero, por otro lado, y me parece que esta es la tesis más importante del autor que he citado, se puede considerar que es posible esta naturalización de la presencia e influencia de la iglesia en asuntos públicos, porque se ancla y legítima en la función cumplida históricamente por ella en nuestras sociedades, sociedades cuya historia se ha desenvuelto bajo la sombra de lo que Nugent llama, un "pacto tutelar". Sociedades tuteladas, orden tutelar del que los dos actores centrales habrían sido la iglesia y los militares. Los estados nacionales en la América latina hispanohablante, como lo ha mostrado la historiografía, armaron de manera más o menos explícita, más o menos reconocida, una triangulación en la cual la iglesia tuvo como función principal el tutelaje moral de la población. De esta manera se entiende que, aún cuando entrando al siglo XX estos estados empiezan a dar los pasos necesarios para establecer de manera definitiva el carácter laico del estado, ello no supusiera, con excepción del caso de México y Uruguay, el fin de la influencia y participación eclesial en asuntos públicos.

No obstante, si es cierto que a lo largo del siglo el número y tipo de asuntos públicos en los que ha tenido injerencia la iglesia católica ha ido reduciéndose y/o transformándose, hasta concentrarse prioritariamente, en la década pasada, en los temas más vinculados con la intimidad de las personas, entre los cuales el de la familia y el de la sexualidad han sido elementos privilegiados. Este proceso explica parcialmente el hecho que, en este lapso, se haya densificado la participación de la iglesia católica en el debate sobre sexualidad y se haya tornado políticamente más activa y agresiva en torno a este tema. Es así, entonces, que se puede entender la naturalización de la presencia de la iglesia católica en asuntos públicos como herencia de la delegación hecha por el estado a ésta en cuanto responsable de la tutela moral de la población.

Lo que me gustaría presentar ahora son algunas consecuencias que podemos deducir de este gesto de delegación por parte del estado, el que tiene como efecto colocar a la iglesia como representante moral de la sociedad.

En primer lugar, al estar colocada en el lugar de representar privilegiadamente en el espacio público a cada uno de nosotros en la definición de lo bueno y lo malo, lo conveniente e inconveniente, consigue aparecer siendo como de suyo el derecho a expropiar nuestra capacidad de elaboración moral y decisión. Pero de manera todavía más importante, me gustaría señalar una segunda consecuencia: este gesto del estado avala una configuración restrictiva, contradictoria y excluyente del espacio de debate público, afectando no sólo el carácter democrático esperable de nuestras sociedades, como ha sido argumentado frecuentemente, sino que avalando la configuración de un tipo de concepción de la moralidad en ellas.

Esto me permite pasar a la segunda tesis que pretendo argumentar:

2) La delegación realizada a la iglesia católica en el ámbito moral, deviene en el abandono por parte del estado de una reflexión sobre la dimensión moral y ética en la sociedad, lo que lo lleva a impulsar formas problemáticas de ordenamiento de este campo.

Es claro que el Estado no tiene ni puede tener entre sus funciones definir la orientación moral de una sociedad, instruyéndola con un

código de orientación para las conductas. Plantear una posición como ésta sería reconocer la pertinencia de soluciones absolutistas o fundamentalistas. No obstante, los estados tienen una función primordial en la medida en que sostienen ciertas concepciones de moral, en el sentido abstracto de lo que es la moral, y también ciertas concepciones de lo que es un sujeto pensado desde el ámbito de la moral. Es en función de estas concepciones que se van a proponer las vías y procedimientos en relación con los cuales los sujetos encuentran o no modalidades de ubicarse como sujetos morales y de desarrollar su experiencia moral.

Si, como en el caso que nos ocupa, se delega a la iglesia católica la opinión sobre estas cuestiones, lo que el Estado está sosteniendo, a comienzos del siglo XXI, es la vigencia de una moral orientada por el código. Una moral que viene definida desde fuera, pero de manera importante una moral orientada por un código monopolizado por una instancia institucional que se sostiene en un dogma y una interpretación doctrinaria que no corresponde a la experiencia social e histórica contemporánea.

Por supuesto que aquí caben dos posibles interpretaciones. O se considera que esta delegación se realiza debido a la convicción de la clase política gobernante de lo acertado de esta concepción de la moral y de la legitimidad del papel eclesial, o se puede suponer que el privilegio dado a la iglesia católica es resultado de un cálculo político pragmático para no entrar en el conflicto de las llamadas "cuestiones valóricas".

Sea como fuere, en ambos casos, se trata de posiciones que aparecen desfasadas de las respuestas que las sociedades parecen requerir. En el primer caso, es más que evidente que insistir en la pertinencia de morales orientadas por el código no constituye una respuesta a una situación socio cultural que se caracteriza por la caída de referentes simbólicos históricos en el campo de la orientación de las conductas y los sentidos subjetivos y sociales, y aún más, que está definida, por el debilitamiento del espacio de referencia socio simbólico mismo. En un momento en que estos procesos son estimulados y radicalizados, la pertinencia correspondería a morales orientadas por la ética. En el segundo caso, si se trata de un cálculo político y de soluciones pragmáticas, habría que decir que éstas no parecen haber llevado muy lejos, pues se correlacionan con la casi inexistencia de políticas estatales explícitas respecto a la sexualidad. En los consultorios, por ejemplo, es absolutamente discrecional si una adolescente recibe anticonceptivos manteniendo la confidencialidad. Como es discrecional, en algunos les piden la autorización de los padres, lo cual sabemos es prácticamente una negativa. Así, la decisión queda sometida a la voluntad de prestadores de salud. Lo que debería ser resuelto en términos de ciertos principios, recae en la voluntad personal. Muchas veces, este pragmatismo no interventor del estado, empuja a acciones por parte de las personas en contra de la normativa general (ley), las que son admitidas cómplice en función de criterios mínimos de humanidad. Un ejemplo flagrante lo entrega el caso de la obligación por parte del personal médico de denunciar (dado que el aborto está penalizado) a mujeres que llegan a los hospitales por complicaciones abortivas, es decir a mujeres que llegan normalmente con alto riesgo de muerte. Lo que esta situación produce es colocar al personal médico en el centro de la contraposición entre la obediencia a la ley y principios mínimos de humanidad y/o deber ético médico. Así que no sólo no es eficiente este pragmatismo, sino que, de manera grave, impulsa formas de conducta y acciones en los sujetos que, dada la contraposición entre la experiencia social y la ley, se ubican en la paradójica situación de estar en un más allá de la ley, pero en el corazón mismo de la comunidad. En este sentido, los gobiernos chilenos de la última década tienen entre sus responsabilidades haber preservado estas dimensiones contradictorias en las que es obligada a desarrollarse la experiencia moral y ética de las personas en torno a la sexualidad. También de haber estrechado el espacio de debate público promoviendo una idea de la moral exteriorizada y más cercana a la obediencia que a la experiencia ética individual. De paso, y no es menor, tienen en su haber la responsabilidad de permitir que, por razones ideológicas, problemas de salud pública, como el aborto o la contracepción en jóvenes adolescentes, queden desatendidos sumando así a su haber las víctimas de esta oblicua,

informal, pero eficiente connivencia moral.

3) La adjudicación de autoridad privilegiada a la voz de la iglesia católica se da en el contexto de la hegemonía de posiciones conservadoras con tintes fundamentalistas al interior de esta institución. Así, apelar a la iglesia para el cumplimiento de la función de responsable y representante moral de la sociedad, no sólo es inadecuado sino que peligroso, pues supone que el estado se coloca como sostén de posiciones que son en sí mismas una amenaza para la propia sociedad.

Ciertamente, no es posible considerar a la iglesia católica una institución monolítica, no es mi intención, y precisamente porque no lo es, resulta necesario insistir en reconocer el momento histórico institucional que atraviesa en la actualidad y no tratar a la iglesia católica como si fuera un continuo inalterado, a-histórico, exento de pugnas de poder. La hegemonía de ciertas posturas al interior tiene consecuencias. Me parece que vale la pena recordar que la iglesia católica, en su devenir de las últimas décadas, como ha puntualizado Roger Garaudy<sup>2</sup>, está marcada por la hegemonía de posiciones ultra conservadoras. La iglesia católica, ha evidenciado la vocación de vehicular una posición universalista que se reafirma en una doctrina que no atiende ni responde a las realidades sociales en que se ubica, o para citar textualmente a Garaudy, que no cumple "con inscribir la ley divina en la ciudad terrenal". Los signos que presenta este momento de la institución eclesial pueden resumirse en: el retorno al pasado, la voluntad de imponer su ley autoritariamente, un retorno al conservadurismo en el plano social y en el político una estructura caracterizada por el centralismo autoritario.

Así, el modelo que nos presenta esta posición hegemónica en la iglesia católica, institución a la que se le delega la función de representante privilegiado de la moral social, se encuentra precisamente a contrapelo de los ideales democráticos de pluralismo y observancia del paradigma de los derechos humanos.

La iglesia, en su intervención política en relación con las sexualidades, ha buscado de manera sistemática desconocer las transformaciones sociales acontecidas insistiendo, para decirlo de manera gruesa, en el modelo de asociación sexualidad/reproducción así como en el modelo heterosexual en el ordenamiento de los cuerpos y de las relaciones entre ellos. Esta insistencia debe ser leída como un ejercicio para reinstalar y fortalecer criterios de inclusión y exclusión que van en el sentido, para hacer uso de una expresión prestada de Judith Butler, de determinar los cuerpos que importan. Insistir en generar un nuevo y más estricto mapa de la exclusión es una vía que va en la dirección de alterar y resquebrajar el lazo social.

De esta manera, avalar la intervención e influencia privilegiada de la iglesia en dominios como la regulación de los cuerpos y las sexualidades, es una falta cometida por los gobiernos respecto al cumplimiento de uno de sus deberes básicos: el de reconocer el tipo de sociedades que deben gobernar, a saber, sociedades crecientemente complejas, plurales y heterogéneas.

(...) Mi argumentación supone que el ámbito de la moral debería ser un campo relevante de preocupación del estado, no en el sentido de definirla, sino de enfrentar su tarea de posibilitar sujetos y experiencias morales. Las "cuestiones valóricas", desde la perspectiva de lo que atañe al Estado, no se reducen a tratar sobre temáticas. Las "cuestiones valóricas" se juegan en procedimientos, acciones, sanciones simbólicas. Las "cuestiones valóricas" no son sólo el divorcio o el aborto en sí, como ha sido planteado de manera reduccionista en esta década. Las "cuestiones valóricas" se refieren a la dimensión ética de la actuación del propio estado, por supuesto, pero también a su preocupación por sostener y hacer posible la percepción de los propios sujetos como sujetos éticos así como el desarrollo de experiencias morales particulares, múltiples y heterogéneas, en el marco mínimo definido que permita el mantenimiento de lo común, del lazo social.

Notas  
1 Sociólogo peruano, autor de diversos libros y ensayos. Las referencias específicas para este texto fueron recogidas de El Orden tutelar. Para entender el conflicto entre sexualidad y políticas públicas en América Latina. Lima: julio 2002 y de Estado Laico. Pluralismo y Libertad de opinión. Lima, 2002, manuscrito.  
2 Garaudy, Roger. Los integrados. Ensayo sobre los fundamentalismos en el mundo. Madrid: Gedisa, 1992.



## Guadalupe Santa Cruz

Escritora

De alguna forma, se hace difícil ahilar palabras sobre este resbaloso tema (“El discurso público sobre la moral sexual”), no sólo por la carga que poseen todas las palabras en este momento -hay un aire en septiembre que siempre recuerda a septiembre-, no sólo porque presentimos la volatilidad de las palabras públicas -el viento del mes de septiembre, la memoria que se abre y, en los discursos oficiales, luego se clausura- sino porque las palabras se hallan todas contaminadas, todas heridas, socavadas y revueltas, hoy. Y, en este gran tiempo de obediencias en el cual se vuelve a pensar aquello que motivó las obediencias actuales, dan deseos de desobedecer a la especificidad de un tema.

Los discursos sobre la moral sexual se hallarían entonces -moralidad y sexualidad son zonas lábiles- no sólo *en*, sino *entre* lo que ocurre discursivamente en campos aparentemente otros, en la promiscuidad de las palabras cuando no se dejan domesticar en *apartados*.

Un representante histórico de la derecha chilena sale recientemente a la defensa de un torturador, responsable de sistemáticos crímenes y horrores durante largos años, desmintiendo la acusación de sus numerosas víctimas a partir de un detalle aparentemente nimio: el perfume de quien se parapeta hoy bajo el libelo de “analista de inteligencia” manifiesta, por un lado, la poderosa intimidad de aquella derecha con los agentes del terror y muestra en su cruda luz -que era, entonces, la ceguera de la venda- la impotencia de la palabra de quienes buscan a tientas hacer justicia hoy. Hay algo en esta bifurcación de los discursos -entre la frivolidad política que enmascara las violencias y la imposibilidad de brillo de las experiencias que cuestionan a lo político-, hay algo en la asimetría de la palabra, que nos fue familiar y nos sigue siendo familiar.

Una ex presa denuncia las vejaciones sexuales a las que fuera sometida, bajo dictadura, por el actual Jefe de Investigaciones y éste último suscita una cadena de espaldarazos de sus pares, interrumpida por el testimonio colectivo de otras ex presas que recuerdan públicamente -hacen memoria colectiva para sí y para el país- que las prácticas sexuales denigrantes eran sistemáticas en las formas de tortura a las mujeres.

En Alto Hospicio, las violaciones y los asesinatos en serie de mujeres jóvenes populares fueron acallados durante largo tiempo por la versión policial de que habrían huido de sus hogares por abusos sexuales de su familia y de que se estarían prostituyendo en el extranjero, mientras, tras la comprobación de su muerte, los testimonios de los parientes apuntan, soterradamente, a la complicidad de los uniformados, si no en los crímenes, al menos en su encubrimiento.

El crimen del conscripto Soto Tapia, que mantenía relaciones amorosas con un superior, permanece sin dilucidar.

Una escolar se suicida tras el nutrido *chateo* de sus compañeros que publicitan su vida sexual.

Entretanto, los discursos que se leen en el texto de la ciudad sobresaltan: no sólo el permanente telón de fondo del entrecortado y estridente alarido de las alarmas de vehículos, no sólo las balizas y bocinazos de los móviles de *Help*, de la Unidad Coronaria Móvil -que en nuestro país nacieron junto con el laboratorio de la tortura, separando el corazón del cuerpo-, no sólo las cámaras de filmación apostadas en las enrejadas urbanas de Santiago -que nacieron con la represión militar-, no sólo la interplación de las publicidades hospitalarias -hospitalarias de “hospital”, no de “hospitalidad”- y las cadenas de farmacias llevando a cabo una toma de la ciudad a través de sus esquinas estratégicas -reemplazando los húmedos rincones del encuentro y la convivialidad por una noción científica de malestar individual- sino, en estos días, micros envueltas en alambres de púa promueven una compañía de seguros, el Ministerio de Bienes Nacionales se halla envuelto en sábanas que publicitan a otra compañía de seguros -haciendo alusión al resguardo del patrimonio nacional-, la imagen del finalista de un reality-show, icono del éxito mediático, promueve una empresa de telecomunicaciones con pesadas herramientas mecánicas -o de auto-protección- entre los dientes y entre los puños. Acurrucada en múltiples paraderos de micro, la atormentada y angelical pose de la evanescente e ideal mujer que han vuelto



icono de sus campañas contra el aborto los grupos “Pro-vida”; vida que tolera la encarcelación de mujeres que, por razones materiales y sociales, quedan expuestas a la dura sanción pública de la moral sexual; vida que desprecia la vida de una mujer en favor de la adscripción de la mujer al modelo materno; vida definida a partir del paradigma católico o tecno-científico, pero nunca vida como irregulares, históricas y carnales (con todas las palabras que transpira la carne) condiciones y decisiones de vida. (Llevo tiempo, ya, comentando este afiche, esta persistente frase que se extiende por Santiago, pero ella vuelve, vuelve a inquietarnos con su violenta inocencia y con sus cambiantes leyendas. Ahora dice: “ayudarla es de vida o muerte”).

Por las calles merodean enjambres de mujeres portando uniformes -uniformes que también *vienen del miedo* (título de un libro de Michel Bonnefoy), de la misma época en que se torturaba en forma masiva en Chile y en que se constituían las cohortas de damas de color, dependientes de la “primera dama”, uniformes de las empresas o reparticiones a las cuales venden su fuerza de trabajo, arropamiento forzado y política de identificación, de reaseguro y de fichaje, mientras el desnudo de los llamados “Cafés con piernas” -cuerpos de mujeres vueltos presas, presas de consumo, presas- que hicieron su aparición en los mismos tiempos de la violencia militar, se constituyen en *juguetes rabiosos* de los discursos públicos.

Se llama *camboyanas* a las mujeres jóvenes sueltas. Una gran tienda luce la próxima colección de vestimenta femenina bajo el signo exótico de Vietnam.

Las manifestaciones callejeras son habladas en términos de “desmán” y son medidas en la escala de riesgo-país, medida que toma el discurso oficial para posibilitar la negociación de tratados internacionales de libre comercio.

Tras *Help* -en inglés- y la Unidad Coronaria Móvil, los vehículos blindados de las empresas transportadoras de “valores” que empezaron a circular con el miedo (¿o es la rayada mirada mía que las miró en medio del miedo?).

Las pasiones son sofocadas, las pasiones han estado siendo sofocadas y es de esta política de las medidas y de la medida, es de los discursos del miedo, de la concertación del miedo que deseo hablar.

Inés Hercovich plantea que el miedo es una de las formas más sutiles de dominación sexual, una tecnología de poder, más aun si este miedo es difuso, informe. Lo afirma sobre todo para la violación de mujeres, respecto de las cuales no sólo hay imágenes en bloque -narraciones ya hechas, ya “jugadas”-; o, en palabras de Suzanne Jacob, “ficciones dominantes” que impiden, cuando estas violaciones tienen lugar, abrir los relatos de las mujeres violadas, sino que el silencio -la dificultad de nombrar y narrar- realimenta aquel temor colectivo carente de suelo, carente de forma. *Vienen del miedo*.

Vivimos tiempos amedrentados, entre el escándalo y las palabras a medias. Palabras a medias ya golpeadas por el terror, luego, palabras a medias desvinculadas por el miedo, palabras medidas por una economía del control.

Tras el férreo escudo institucional -escudo eminentemente masculino-, miedo a la hegemonía del cuerpo militar; miedo a romper el consenso de la Concertación; miedo al desborde de la participación ciudadana; miedo a disentir de una Iglesia Católica (legitimada por su compromiso con los derechos humanos bajo la dictadura); miedo a la imagen internacional proyectada; miedo al desorden; miedo al debate; miedo a la ingobernabilidad. Este miedo luce hoy como trama de una política que fue sufriendo una lenta y subrepticia traducción de conspirativa en tecnificada, política de pactos que fue blindando los cuerpos y los discursos públicos.

Simbólicamente custodiado por este escudo institucional, y delegando en él el trauma de la pérdida de inmunidad vivida bajo la dictadura, un cuerpo social que ha quedado expuesto (“hay que separar camas”, le dijo brutalmente a los sindicatos territoriales un antiguo cómplice, al inicio de la Transición, “hay que separar camas”, “hay que construir Estado”, dijo antes de desarrollar la experticia en manejo de crisis políticas), un cuerpo social que ha aprendido en estos años otras formas del miedo: el miedo a la exclusión, ya no colectiva (como la conservaba la memoria histórica y la experiencia dictatorial), sino la exclusión individual -aquella que gira alocaidamente en las *sillas musicales*, en las competencias desenfundadas de la obediencia y de la obsecuencia; aquella amenaza de exclusión- que pone a competir organizaciones pares -concursos y “licitaciones” mediante-, quebrantando

la solidaridad y el lenguaje común -licitando, de hecho, la palabra-. Miedo al error, sobre todo en la gramática del control que se ha impuesto en la discursividad pública (errores sin los cuales, según Sebastian Brett, no es posible, tampoco, la libertad de expresión). Miedo a la inseguridad. Miedo a la memoria. Miedo a la soltura. Miedo al otro.

Sabemos que el modelo de sociedad que instaura el neoliberalismo se funda en este orden que moldea las subjetividades en torno a una paranoia productiva que hace de los otros una amenaza, que las modeliza en torno a economías individuales del riesgo, en torno al cálculo. Entre *sillas musicales* y *ascensores*. Sabemos también que este corte, del deseo colectivo al deseo individual, fue operado -literalmente, operado- violenta y paulatinamente por la dictadura y que ha sido proseguido, bajo otras formas, por los gobiernos de la Transición: en la tecnificación de la política, con la consecuente privatización de los asuntos comunes, en los pactos políticos y la persecución del consenso que ha castigado las voces disonantes -las voces desconcertadas- y las subjetividades que no obedecen a la sintaxis blindada del discurso oficial.

De la derecha conservadora, de su monopolio informativo y de su creciente influencia en los centros intelectuales -entre estos, la inversión ideológica en los centros universitarios-, así como de su poder para diferir, no sólo las deliberaciones, sino el más elemental debate en torno a las políticas sexuales, sabemos suficientemente. Lo que permanece insuficientemente explicado es el abismo entre las posiciones que manifiesta la sociedad civil y los términos de la negociación interna de la clase política (este abismo es conocido en relación a la voluntad colectiva de una ley de divorcio, y es menos conocido en cuanto a la tolerancia social, mayoritaria, respecto de la despenalización del aborto). Aquello que no ha sido explicado es la primacía, en el campo discursivo público, de un paradigma moral conservador, o de un paradigma moral, a secas, que exilia del debate la posibilidad de una postura ética. (Pediré prestado de quienes buscan hoy problematizar en Chile este campo de silencio -Icner, Corsaps, Con-spirando, entre otras, y, entre otros, Gloria Salazar, Claudia Dides, Sergio Zorrilla-, la reflexión inspirada en Miguel Bensayat, que contrapona la noción de *individuo*, vinculada a la moral, a aquella de  *sujeto*, articulada más bien a una ética, las que suponen -y, diríamos, construyen- figuras de disímil movilidad: el individuo sería, para Bensayat, expresión de lo *sedentario*, en la medida que se desenvuelve en base a lo adquirido, se adscribe al imaginario social imperante -los estereotipos y "buenas costumbres" que supone la moral- y desprecia el presente en función de un futuro "inalcanzable y alienado"; mientras el o la sujeto figurarían lo *nómada* en cuanto se toma a sí mismo como objeto de reflexión y "asume las fracturas vividas y explicitadas" por sus propios gestos que "no siempre son coherentes con la moral imperante", así como entreve el presente no sólo cual espacio de materialización del futuro, sino como instancia de decisiones ante las inesperadas dificultades).

Cuando ciertas prácticas son abordadas desde una mirada criminal, cuando se confunden con acciones delictuales, estas inspiran gestos de tipo policial, construyen una sociedad de la vigilancia, pendiente de una sociedad en estado de miedo: así la colusión entre miembros del cuerpo médico y la policía, para denunciar abortos clandestinos -en hospitales públicos, en mujeres populares. (Lo que hace que una de las campañas en vigencia, hoy en día, sea la instauración de un derecho elemental, el de la confidencialidad en las atenciones de salud, confidencialidad que hubo y ha de ser cautelada legalmente, también, para las y los portadores de VIH-SIDA).

¿Pero qué hay de vigilancia en esta vigilancia si no es la inamovilidad de un orden de fondo que no debe ser cuestionado?

Alto Hospicio, la bancarrota de la palabra civil ante el cuerpo uniformado, ante el blindado discurso estatal, la dominante cofradía masculina y el dominante menosprecio clasista, se ha saldado, hasta el presente, en la inamovilidad de ciertas figuras de la fuerza (uniformados sin uniforme, guión simbólico entre los uniformados y los no uniformados). Tal vez en aquella inamovilidad institucional se siga jugando aun el miedo a la memoria, el miedo a ser vencidos -utilizo intencionadamente el adjetivo en masculino- y la necesidad de proyectar la imagen inquebrantable de un hombre frente a un hombre armado (título de una novela de Mauricio Wacquez). Alto Hospicio se ha saldado también en la posible multiplicación y difusión del miedo para las



mujeres, para las mujeres jóvenes, para las mujeres jóvenes del mundo popular. Como si -voy a parodiar los discursos públicos que privilegian la declinación económica de la medida-, como si el miedo fuese desigualmente distribuido, desplazado hacia los eslabones más débiles del cuerpo social.

El evitamiento del debate en torno al aborto corresponde, también, a una política del cálculo y al temor electoral, en la medida que esta práctica, que responde a una realidad innegable, se encuentra no sólo estigmatizada como crimen, sino que se ubica en la vertiente oscura del deseo: como lo señalara Raquel Olea, el poder de la maternidad puede bifurcarse en deseo y no deseo, y es a aquel no deseo de maternidad que se teme, como si se temiera la desobediencia de las mujeres al mandato, aun inapelable en los discursos públicos, del modelo materno. He sugerido, en otro campo, aquel de los imaginarios literarios en algunas escrituras contemporáneas de mujeres latinoamericanas, que los lugares simbólicos construidos allí para las mujeres se han desplazado de tal modo -subvirtiéndolo que María Emma Mannarelli llama la idea "higiénica y moderna" de *pilar del hogar*, de pilar moralizador-, que se podría proyectar como el resquebrajamiento de un orden, sólido y anclado orden en Chile, que mantenía, entre otros, la sensación de "seguridad ciudadana". Desde esta perspectiva de los imaginarios, y respecto al alarmismo con que nutre la derecha sus crecientes proyectos de vigilancia social, sería posible cruzar con los otros temores propios de esta posdictadura el miedo a aquella pérdida, finalmente decisiva: el orden doméstico -en el sentido más radical del término- y la política que éste vuelve posible, más que amenazado por la delincuencia, se ve amenazado por la desertión de las mujeres de su puesto de vigías. Y allí reside una infima y portentosa hecatombe. Para el poder de género y para los otros poderes que se anudan a él.

En estas fechas, no he podido más que referirme a uno de los reversos del deseo, que son, a nivel social, las políticas del miedo. No he podido sino mover la tinta hacia las zonas que dictan -ya no dictadura, sino dictado- la compostura de la discursividad dominante que es nuestra hoy.

Permanece la distancia entre las palabras y nosotros, el enorme intervalo que se ha instalado entre la experiencia y los controlados discursos públicos, entre el cálculo político institucional y el derroche, el ímpetu o el descampado -el *fuera de campo*- de múltiples cuerpos librados a sí mismos, en su más bella acepción y, también, en su más desolado sentido de abandono, de abandono social y cívico. Permanece la cultura del abandono que dobla la cultura de la promiscuidad que es nuestra: la dificultad de mantener la fiesta, de *sostener* aquella fiesta que conocemos. La fiesta -la farra, el carrete, lo imprevisto, lo no regulado- se topa contra la gramática del lugar común: en nuestra lengua, la decencia constitucional, la normativa de la apariencia y de la pertenencia, la domiciliación social. *Sostener* lo que he llamado la fiesta sería tender puentes entre la desperdigada experiencia que sucede en los territorios de la "CH" -la *chacota*, las *chaladuras*, el *chipe* libre y la buena *racha*, territorios que no domicilian sino que viven las *chapas* de cada cual- y el apretado discurso familiar, eclesiástico y legal que prima en los discursos oficiales. Y también, tender puentes entre la homofobia y el temor a otras preferencias sexuales que emerge promiscuamente, desde aquella *chacota* y la censura pública a la homosexualidad -censura que, arriesgo conjeturar, es sobre todo propia de generaciones adultas. Sería tender puentes entre la soltura de las experimentaciones de las y los jóvenes -que, en conceptos de Francesca Lombardo, son quienes, en definitiva, construyen el lazo social, el riesgoso lazo social de una sociedad cruzada y secamente compartimentada en todas sus diferencias, puentes entre esta apertura a la apertura y la consideración ciudadana -ni demonizada ni infantilizada- de esas vidas, de esos gestos, de esas invenciones.

Terminaré con un homenaje a la historia, a la nuestra y mía historia: haciendo un puente entre lo vivido antes del Golpe militar y hoy. Si no tuviera memoria corporal, también, de aquella fiesta, si con las palabras y con el cuerpo no hubiese tenido que hilvanar, hilvanar con hilo rojo, el antes, el durante y el después, sin olvidar la fiesta -"primera noche de amor", dijo Cohn-Bendit de mayo 68; "farra", nos ha lanzado en cara la derecha desde la Unidad Popular-, no hablaría hoy de las políticas del miedo. Estaría en el miedo de evocar la fiesta. Pese a. Digan lo que digan. También sucedió.

# REIMAGINAR

# LA IZQUIERDA

Carlos Ruiz

Coordinador Nacional de la SurDA:  
Profesor de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile

Esta invitación a reimaginar la izquierda implica el supuesto -compartido- de que la izquierda actual está agotada. Reimaginar la izquierda implica el desafío de pensar más allá de los *convencidos*. Implica pensar una alternativa para amplios sectores que no se definen de izquierda. Implica pensar el país -no sólo una parte de éste- y forjar una vocación de disputa de conciencias con una derecha que avanza.

La izquierda concertacionista dejó de hacerlo porque se redujo a administrar un modelo económico y político heredado (esto último, olvidado a menudo). La izquierda extraparlamentaria no lo hace porque está consumida en un afán de resistencia, de sobrevivencia (reducida a afirmar un *existimos*, arrastra una prolongada *crisis de incidencia*).

La reiterada caracterización -que se da con más fuerza en el resto de América Latina que en Chile- entre una *izquierda política* y una *izquierda social*, revela el eterno problema de articulación entre la izquierda histórica y las nuevas izquierdas. La *izquierda política -o politizada-* es aquella que se ha centrado en la lucha por el control del Estado, ya sea por las urnas o por las armas. La *izquierda social* aun no tiene programa, fisonomía orgánica ni estrategia definida. Aunque no lo ignora, se plantea más allá del Estado; es anticapitalista en una forma más amplia. Pero no se articula, se dispersa, y a menudo se va a los extremos (como el apoliticismo o el basismo).

En este contexto, me atrevo a aventurar algunos elementos y requerimientos para construir una nueva izquierda para un nuevo ciclo de luchas populares. Ante todo, asumir la crisis del socialismo, las limitaciones de los *socialismos reales*, de cursos que no socializan el poder, que generan nuevas clases dominantes. En tal línea, asumir además las derrotas y los fracasos de la izquierda; no evadirlas para buscar una tramposa *fuerza moral*, ni responsabilizar completamente de ellas al enemigo, victimizándose. Es el fracaso de las estrategias pasadas para derrocar y superar el capitalismo. Asumirlo, es un paso básico para repensar la izquierda.

Esto remite a la necesidad de una nueva estrategia. Más que la *toma del poder*, nuestro objetivo es la transformación de la sociedad. A estas alturas del desarrollo capitalista está claro que el problema del poder no se reduce a la *conquista del Estado*. La capacidad de los poderosos de organizar la sociedad va mucho más allá del Estado y sus aparatos coercitivos. Hoy se le exige a Pinochet que pida perdón por la masacre que arrojó una decisión política, pero a nadie en la clase política se le ocurre exigirle lo mismo a Agustín Edwards, cabeza de un

clan y un medio -El Mercurio- decisivo en la adopción de esa decisión política. A nadie espanta que figuras concertacionistas como Brunner se unan a Edwards en espacios como Paz Ciudadana; pero de seguro crearía gran revuelo que el mismo Brunner coincidiera en esos términos con Pinochet. Se nos dice así que perdón ha de pedir el capataz, mas no el patrón del fundo. La lucha transformadora de la izquierda ha de apuntar en contra de la esencia del poder, y no sólo de sus excesos. Al no hacerlo, permite que de la *transición a la democracia* resulte no sólo la consabida injusticia política sino -a menudo obviada- una reconstrucción de la *fronda aristocrática*. Si el orden del capitalismo es tan fuerte, no es sólo porque es capaz de evitar lo que no quiere, sino porque es capaz de producir el orden que requiere.

Por tanto, el esfuerzo transformador no puede reducir toda su lucha a la disputa por el control del Estado. Duramente, el siglo XX ha enseñado que la nueva sociedad no se inventa después de la *toma del poder*. Que la nueva sociedad no es un problema meramente teórico para el presente, sólo abordable a partir de la *conquista del Estado*. La posibilidad de una nueva sociedad se define desde el presente. Esta determinada por los rasgos de los actores políticos y sociales que impulsan la lucha transformadora (si no son democráticos hoy, difícilmente lo serán después de la *toma del poder*).

Esto significa asumir que desde hoy se prefigura, en nuestras luchas y nuestras conductas, el futuro buscado. Por tanto, lo que hay que poner en el centro del debate es la construcción de una fuerza política y social transformadora, constructora de nuevas dinámicas y espacios, lo que implica superar el esfuerzo centrado desmesuradamente en el fortalecimiento del partido.

Pero resulta que tenemos más claro lo que queremos destruir, que aquello que queremos construir. Somos más *anti-neoliberales*, *anti-capitalistas*, *anti-sistémicos*, que pro-libertad, democracia, felicidad. Superarlo implica enfatizar nuestra capacidad constructiva, transformadora, como principal arma de superación del orden actual.

En tanto la liberación remite a la refundación de la sociedad, implica forjar en la lucha actual instituciones de democracia, de poder y soberanía popular. Y fundar también la capacidad de defenderlas. Un futuro todopoderoso Estado socialista no realiza esa tarea, no socializa el poder; no lo ha hecho en la historia. Hay que asumir, de una vez por todas, que un verdadero socialismo democrático sólo triunfará a partir de un máximo de expansión -y no de constricción- de la democracia popular organizada.

Por tanto, nuestra principal característica e identidad tiene que cifrarse no en la opción por la fuerza ni en definirnos *antisistémicos*, sino en el hecho que nuestra lucha y nuestra prácticas inmediatas apunten a la democracia, a la libertad, a la felicidad, a terminar con la explotación y las miserias materiales y espirituales que impone el capitalismo a la especie humana.

Esto remite a superar las viejas concepciones de construcción de la organización política. Hay un agotamiento y una necesidad de superar la lógica representativa y suplantadora de la lucha social y de los actores sociales. Las fuerzas sociales ya no pueden seguir siendo consideradas como base de apoyo del partido político, como *correas de transmisión* de sus decisiones. Los movimientos y las fuerzas sociales son el actor insoslayable de un proceso de transformación social. Son determinantes. Sus procesos de construcción, maduración y proyección son insustituibles.

No se puede aspirar a ser *brazo armado o brazo político* de estos movimientos sociales. La organización política tiene que centrarse en una función de conducción, también insoslayable, de síntesis como *intelectual colectivo* inmerso en esas dinámicas, pero de ningún modo aspirar a un rol sustitutivo, suplantador de los movimientos sociales,

del proceso de transformación generalizado que sólo pueden sostener inmensas mayorías concientes y determinadas a hacerlo. En esto no hay atajos, ni armados ni electorales. La creencia ilusoria en esos atajos sólo alarga esta marcha. Eso es lo que ha acontecido hasta ahora.

Esto significa repensar la organización política. No negarla. ¿Partido o movimiento? El problema es flexibilizar y ampliarse, pero sin diluir la posibilidad de la unidad de acción política y la capacidad transformadora. Ese es el reto, en una sociedad heterogenizada y desarticulada por la transformación capitalista de las últimas décadas. Sobre todo en un contexto en que la mantención de la desarticulación social heredada de la dictadura ha sido una de las condiciones basamentales de la *exitosa transición chilena*, de la celebrada *gobernabilidad democrática*.

¿De qué otra forma superar la llamada *crisis de incidencia* de la izquierda en todos estos años? Especialmente hoy, en que quien avanza con más celeridad es la derecha. El desafío, hoy, es pensar una fuerza más allá de la subcultura de izquierda. Más allá de los *convencidos*.

La SurDA no cree en un camino propio, sino en una articulación amplia. Posible de pensarse como un polo de oposición resuelta a un muy probable gobierno de derecha. Una articulación -eso sí- que no sea más de lo mismo. No somos sangre nueva para viejos fracasos.

Se trata de concentrarnos, sin distracciones, en enfrentar principalmente a esa Generación de Chacarillas. No sólo electoralmente, sino a lo largo y ancho de sus condiciones de acumulación de fuerzas. Esta ya está siendo nuestra experiencia en mundos universitarios, gremiales y poblacionales. Por cierto, queda mucho por avanzar en ello, y aun faltan muchas manos y cabezas. Pero la decisión de concentrarnos todos en esto, de golpearlos directamente, desnudándolos, mostrando su vulnerabilidad, esa decisión no puede seguir esperando.



### Tomás Moulian

Sociólogo, Rector Universidad ARCIS

(...) Ahora en Chile, tenemos un neoliberalismo triunfante cuyos aparatos ideológicos son los diarios y las universidades. En Chile, hay cerca de 30 o 35 universidades que están en mano de movimientos conservadores católicos o de grupos de derecha organizados. Hay un neoliberalismo que ha generado creencias que se difunden en el sentido común de las masas gracias a poderosos aparatos de socialización que nos dicen que la sociedad de mercado (no la sociedad *con* mercado sino la sociedad *de* mercado), es la única forma racional de organización de la vida humana, como si se tratara de una "necesidad histórica". Hoy hasta los pobres votan por alguna de las dos ramas del modelo neoliberal: la rama originarla (la derecha) o su rama reproductora (la Concertación). Pese a ser este un país con pésima distribución del ingreso, Chile es un país sin movimientos sociales y esto sólo se explica por esta gigantesca máquina de vaciamiento de sentidos que es el consumo. La máquina neoliberal ha demostrado en Chile que no necesita de una dictadura, que puede convivir con una democracia pero sólo con una democracia protegida que cuenta con la despolitización masiva de la población a la que le hace creer que la discusión sobre los fines está zanjada. Así ocurre con la Alianza por Chile y la Concertación que no tienen mayor diferencia en cuanto a las finalidades (las dos quieren una sociedad de mercado) sino sólo en cuanto a los medios para realizarlas. Tenemos una izquierda capturada por el modelo neoliberal (la concertacionista) y una otra izquierda (la de Gladys Marín) que es creíble sólo en clave romántica como una izquierda honesta y valiente, pero que no ha sido capaz de proponer una alternativa.

Creo que efectivamente estamos frente a la necesidad de una reinención de la izquierda, de sus teorías, de sus prácticas y de sus utopías. Tenemos para esto que dejar el paradigma clásico con el que la izquierda chilena pensó la política y el futuro. Este paradigma clásico era el de la revolución, cuya noción debe ser remplazada por la de transformación. La idea de revolución supone que uno empieza a hacer política socialista cuando se ha tomado el poder del estado. Debemos arreglar cuentas con esta idea clásica de revolución porque es una idea estatista que sólo hace posible las reformas una vez destruido el aparato del estado anterior, y porque los socialismos a los que dio lugar esa idea de revolución han sido socialismos deformados, "degenerados", para usar el término que Trotsky le aplicó desde el principio a lo que ocurría en la Unión Soviética. Chile es un país donde el marxismo ruso nos convirtió en estatistas prácticos que pensaban que cualquier solución pasaba por un reforzamiento del estado y de su rol arbitral en la sociedad. La concepción del socialismo que tenemos que perfilar tiene que ser resueltamente distinta a la de antes. No podemos seguir definiéndola como "dictadura del proletariado" ni como "nacionalización de los medios de producción" porque eso produce estatismo y no socialismo. La idea de "revolución", en vez de debilitar al estado como soñaba Lenin, lo que hace es reforzarlo y ahogar a la sociedad civil. Tenemos que hacernos cargo de la derrota de esta forma de concebir el cambio social, y reemplazarla por la idea de "transformación". Esto no es reformismo. El reformismo es el anverso moderado de la idea de revolución que, también, busca resolver el problema social a través de un estado benefactor.

Yo pienso que la idea de transformación –una idea que la izquierda chilena empezó a pensar intuitivamente y, después, de un modo teóricamente formulado en algunos discursos comunistas y socialistas– nos enfrenta con la Unidad Popular. La idea de transformación supone pensar la utopía a realizar como una democratización radical de la sociedad que se hace en el interior del capitalismo, contra sus principios de funcionamiento. La política de transformación es una lucha por democratizar la sociedad en todos los frentes. En el frente económico, como modo de organización de los ciudadanos contra el mercado y las estructuras capitalistas (por empresas autogestionadas y sistemas cooperativos) que trata de instalar la idea de una economía de necesidad en contra de la idea de una economía del lucro. En todo caso, quiero disipar el malentendido de que se crea que yo estoy contra el mercado en sí. Estoy en contra del mercado capitalista sobre todo bajo su forma de libre mercado, porque creo que hay otras formas de organización capitalista en las que el movimiento popular ha obtenido más beneficios. A mí no me basta la regulación del mercado por el estado porque el estado son los grupos que lo dominan. El mercado tiene que ser regulado simultáneamente por el estado y la sociedad civil.

Las políticas de transformación deben también democratizar lo político, cambiando una democracia puramente representativa por una democracia participativa: una democracia donde los ciudadanos se implican en la cuestión pública, una democracia politizada, no como la de hoy que es una democracia de baja intensidad, despolitizada, donde el sistema genera abstencionismo. Una democracia politizada es la que vemos en "La Batalla de Chile" donde los obreros dirigen sus destinos, o la que vemos en este Coloquio donde un público de universitarios reflexiona y cuestiona, o la del PT en Brasil donde los ciudadanos son llamados a participar de la confección del presupuesto municipal.

Este diseño de transformación es un diseño de largo plazo. Se hace en el nivel macro de la lucha por espaciar estas ideas en la sociedad y al nivel micro de las múltiples experiencias populares que hoy día existen (pese a que no salen a la esfera pública) y deben ser articuladas horizontalmente. Este diseño de transformación le da tanta importancia a la política local de abajo como a la política de arriba. Después de la época de las certezas –el partido de vanguardia y su anuncio teórico de cuál debía ser el futuro– estamos en un período de experimentos, de experimentaciones con el movimiento social en toda su multiplicidad. Hay que pensar en nuevos movimientos sociales (ecologistas, de género o minorías sexuales) pero también, creo, hay que revitalizar a los viejos movimientos sociales. Hoy día la desarticulación del movimiento obrero chileno, que se sitúa en el clivaje capital-trabajo, debilita cualquier voluntad de atacar el sistema en uno de sus núcleos centrales. El modelo neoliberal necesita de este sindicalismo fragmentado, despotenciado, que sólo puede negociar a nivel de la empresa y donde a ningún trabajador le interesa entrar porque le va mejor con un curso de Inglés o de computación. Si no hay una activación del movimiento sindical, no va a haber modo de luchar contra la precarización del trabajo que es el otro nombre de la flexibilización.



# DEBATE HISTORIOGRÁFICO Y PASADO NACIONAL

**María Eugenia Horvitz**

Historiadora, Universidad de Chile

A treinta años del Golpe de Estado, una parte importante de los secretos de los poderes públicos y privados ha quedado al descubierto. La explosión de la memoria de las víctimas de la fuerza y del encubrimiento del pasado reciente de los chilenos ha traspasado los límites de los resguardos púdicos e impúdicos de nuestras fotos de familia. En el álbum de los recuerdos aparece la imagen y la letra de “la intervención encubierta” y sistemática -agrego yo- de la C.I.A. Tampoco han estado ausentes los hechos ocurridos el 11 de setiembre de 1973: el Presidente Allende con pocos de los suyos, defendiendo los símbolos de la democracia, entre ellos su investidura, ofreciendo su vida para dejar las pruebas de las traiciones y del abandono de los deberes éticos de militares y civiles. Ya no podremos ser los mismos de antaño. La paz que muchos pensaban haber alcanzado se les fue y se nos fue de las manos.

Lo que podemos constatar es que, con y sin historiadores, los sujetos históricos se han tomado la palabra y la imagen para sobrepasar “las verdades” abstractas, los consensos políticos y mostrar a cada cual, sobretudo a los más jóvenes, que la unanimidad nacional es dudosa, o a lo menos está resquebrajada.

En Chile como en Argentina los intentos para conciliar una y otra vez los reclamos por la verdad de lo ocurrido en los tiempos de la dictadura, no producen el resultado esperado de la reconciliación, idea cristiana, del encuentro de víctimas y victimarios, ofendidos y ofensores. La culpa y el perdón no han podido ser aceptados por las víctimas del terrorismo de estado. La separación de lo público y lo privado al que incitan los conceptos pierde su sentido y el reclamo por la justicia al total de la sociedad adquiere todo su sentido, en un proyecto más amplio que es la búsqueda de la solidaridad perdida entre nación y sociedad civil. Los ciudadanos perdedores, los vencidos de 1973 han exigido en el espacio público llegar a ser ciudadanos en entera disposición de sus intereses, de sus deseos de justicia social para, finalmente, insertar a los suyos en la memoria de todos. Quieren memoriales, panteones, nombres de calles, relatos propios, libros de historia.

Los reiterados llamados a la unidad perdida de la patria se han topado con la resistencia de vastos sectores de la sociedad -más allá de los familiares de las víctimas del terrorismo de estado- que no están dispuestos, esta vez, a perder sus derechos a la memoria. Las fórmulas de antaño por las vías de la amnistía político-jurídica perdieron su poder de convocatoria. “Las suaves cenizas del olvido” -parafraseando a Loveman y Lira- ya no asientan el futuro nacional como en 1891. Los ciudadanos actuales reclaman una polifonía de voces que permita crear un espacio ético común, y si fuera posible una democracia que se pareciera a la que buscábamos en los años 60 para hacernos cargo de las violencias y sojuzgamientos de la mayoría que no había podido acceder a los medios culturales, económicos y sociales, que sobran en las sociedades contemporáneas.

La explosión de la memoria histórica que presenciamos no sólo es la del dolor y el duelo, por el contrario se reclama verdad y justicia pública, se

recuerda y restablece un proyecto social inconcluso. Era lo que hacía recientemente Luis Sepúlveda, cuando escribía "El memorial de nuestros años felices", relatando las alegrías, la creatividad desplegada en el tiempo en que muchos veíamos posible mejorar las condiciones de vida de la mayoría y queríamos solidaridad nacional para lograrlo. A lo mejor, sin saberlo, pensaba como Andreas Huyssen que la "memoria es más que la cárcel de un pasado infeliz".

En estas circunstancias, "los magos del olvido" poco podrán hacer para comparar o equilibrar con tesis abstractas, que lo impensable asoló nuestras tierras, dejándonos "los archivos del mal"<sup>12</sup>. Los que pensaron desde la dictadura que Goebels tenía razón cuando decía que "hemos hecho posible lo impensable" (cuyos efectos conocemos: asesinatos de opositores, ocultamiento de cuerpos e identidades, torturados, campos de concentración), también perdieron su apuesta, como le pasara al autor de la idea. Tampoco, se pueden olvidar los sufrimientos sociales que no han terminado. Los éxitos económicos de la Dictadura se ponen en duda cuando desempolvamos los archivos y nos hacemos cargo de la situación de cerca del 40% de cesantes que se mantuvieron en Chile o de la falta de inversión pública en educación y salud. En verdad el éxito fue para los que usufructuaron con las privatizaciones de las empresas públicas, la creación de ISAPRES y AFP para deshacer los fondos solidarios.

En estas condiciones, se hace difícil comparar o absolver lo que fue "la noche y la niebla" de nuestros años infelices con los comportamientos y los deseos nacidos de una ética social, o comparar el proyecto inconcluso de los años 60 con el imperio de los buenos negocios.

Mirada esta explosión de memoria desde la historiografía, estamos obligados en la profesión a aceptar la precariedad de nuestros métodos, la carencia en las hipótesis y análisis para responder a las demandas de la sociedad. Frente a nuestros ojos, la memoria tomó su revancha.

Convocados en esta oportunidad a debatir sobre la asociación posible entre memoria e historiografía en la historia reciente del país, podríamos presentar un largo listado de obras doctas sobre la materia o de proyectos de investigación en curso, pero a mi parecer,

todavía nos falta reflexión para enfrentarnos a "la catástrofe" nacional que significó la Dictadura, colocándola en plazos temporales mayores. Este planteamiento de ningún modo me acerca a los historiadores positivistas que habitualmente piensan que nos faltaría distanciarnos temporalmente para hacer "el juicio histórico objetivo" que requerirían las circunstancias. Por el contrario, abogo por una reflexión crítica que permita en primer término poner en el debate las ideas recibidas sobre la "paz social chilena"; y en segundo lugar, dejar en claro que el discurso historiográfico no es "un juicio" definitivo o definitorio, como tampoco la objetividad del historiador deja de ser hija de su tiempo, su rango social o sus intereses culturales y políticos.

Mirando de este modo las distintas construcciones historiográficas que adquirieron por algún tiempo un carácter de panacea oficial, se puede entender su develamiento por los antecedentes que han salido a la luz treinta años después. ¿Cómo se podría continuar asegurando que el Golpe de Estado representó el colapso de las instituciones en búsqueda de su estabilidad? Lo menos que cualquiera podría pensar de semejante aseveración es que la Constitución de 1925 no murió de muerte natural, sino que a causa de un Golpe -un bombardeo para precisar la imagen- que tuvo instigadores y realizadores conocidos. Tampoco es posible asegurar que el Plan Z o los quince mil cubanos oponiéndose al Golpe de Estado existieron, situaciones menores por su importancia en los textos, pero mayores por sus consecuencias en el sufrimiento humano.

Estos ejemplos -podríamos adjuntar muchos más- demuestran que la reflexión crítica necesita la existencia de libertad de opinión, sacando de los espacios académicos las otras miradas. Además, se necesita que se pueda acceder a las pruebas sobre las que se basa la disciplina para interpretar sin censura, los distintos enfoques que los historiadores le dan a su trabajo. Lo mismo vale para una enseñanza de la historia que contribuya a la formación de ciudadanos, demitificando el juicio historiográfico único y absoluto sin presentar un abanico de posibilidades de interpretación, siempre basadas en la comprobación de las fuentes utilizadas.

Sin embargo, las falencias más serias en la investigación historiográfica provienen de la relación

con la memoria social. No basta con adjuntar testimonios, o por el contrario, desconfiar de los recuerdos de los actores sociales.

Como ha escrito Hohsbawm, "nuestra profesión consistiría en recordar lo que otros olvidan". No obstante, teórica y técnicamente, memoria e historiografía no han convivido en común. Por larga data, la memoria fue la expresión de lo subjetivo, ciertamente discolorada, fiel a sus afectos, no comparable al análisis docto. San Agustín, Hegel así lo pensaban. Pero los embates históricos, más que la teoría, llevaron a los historiadores a constituirla en uno de sus archivos. Por cierto, el psicoanálisis y la antropología han tenido su influencia.

En Chile reciente, así como "las catástrofes" humanas, las del siglo XX y las más actuales -léase la guerra contra Irak-, han roto las expectativas de la Modernidad de lograr "la felicidad de todos", dejando a la vista de la sociedad y del historiador la necesidad de abrir los archivos plagados de sufrimiento y del horror de la fuerza humana que extermina a las *otras* y *los otros*: los marginados, los opositores, los distintos. Siempre estos "archivos del mal", son un binomio de víctimas y victimarios, enfrentando los poderes a los ciudadanos inermes o vencidos.

En cualquiera de estas situaciones, los historiadores reciben la presión de la demanda social de explorar, reconocer e interpretar los pliegues que se presentan en el mundo uniforme que aparece desde "la normalidad" de las huellas que provienen de lo resguardado públicamente. La apertura del campo de la subjetividad, trae consigo un conjunto de interrogantes: ¿Existe un espacio plural para las memorias? ¿Los monumentos, los lugares, los símbolos, los gestos de las memorias cohabitan en el espacio público? Finalmente, ¿cuáles son los mecanismos sociales de control de la memoria y su historicidad?

También otras necesidades de la sociedad contemporánea impactan a la historiografía, al demandarle el conocimiento de las referencias perdidas, esfumadas en los cambios rápidos e incasantes que trae la modernización y la globalización cultural. En distintos lugares se dedican esfuerzos a recuperar las memorias privadas y públicas, haciéndose cargo el historiador de una idea-fuerza planteada hace 150 años por Carlos Marx: en las

sociedades capitalistas modernas, *todo lo sólido se desvanece en el aire*.

Estos requerimientos sociales se dan con fuerza en Chile actual. Los velos descubiertos, abierta la caja de Pandora, descongeladas las imágenes del pasado nos han puesto nuevamente a preguntarnos sobre la trascendencia de las víctimas, sobre el proyecto que propusieron. Los conceptos y abstracciones para explicarnos lo ocurrido han ido tomando rostro, carne y palabra. ¿Cómo relatar a las víctimas y a los sobrevivientes de la catástrofe? ¿Sólo son sujetos históricos de un pasado concluido?

A este respecto Paul Ricoeur propone a los historiadores una posibilidad que se mueve entre la ética y el trabajo profesional: "Acordarse de que los hombres de otros tiempos tenían un futuro abierto y que nos dejaron sueños incumplidos, proyectos inacabados: tal es la lección que la memoria enseña a la historia"<sup>13</sup>.

Desde esta perspectiva, la historia-memoria no concluye, más bien asume la existencia de los sujetos históricos, abierta hacia la continuación de proyectos y expectativas sociales. Por cierto, el resguardo de la trascendencia de las víctimas de la violación de los derechos humanos es un deber y una tarea necesaria para incluirlos en la totalidad de la memoria social.

Del mismo modo, el historiador debería dar cuenta de que no existe el poder omnimodo, una vez que se reconoce la racionalidad de sus formas de operar. La fatalidad del terror institucional y el silenciamiento de sus víctimas ha ido cambiando.

El poder ciudadano dependerá en el futuro de que se construya el discurso historiográfico en múltiples dimensiones, discontinuas, como se presentan en el movimiento histórico. Sería un aporte, más que un juicio definitivo, contribuir desde la historia a restablecer la ética social con el fin de reconstruir las solidaridades democráticas perdidas después de la catástrofe.

Explicar conceptualmente un pasado incierto sin considerar las demandas de los sujetos históricos, acaba de demostrarse como irrisorio. A la historia como "materia de uso público" no le queda más remedio que hacerse cargo de las diversidades sociales y de los distintos proyectos inacabados o nuevos que provengan de las memorias que conforman la sociedad civil.





# CRÍMENES, JUSTICIA Y REPARACIÓN

## Carmen Hertz

Abogada de Derechos Humanos

(...) En Chile, el desafío de imponer principios como la verdad y la justicia —soportes ineludibles de la reconstrucción moral de nuestras sociedades— ha sido un camino lleno de obstáculos ligados a las características propias de los procesos de transición a la democracia en que la permanencia de los llamados “poderes fácticos” ha asegurado la impunidad de los crímenes cometidos. Esta actividad ha limitado considerablemente la plena vigencia del estado de derecho y el alcance de la plena democracia, propiciando la intervención del poder político para buscar salidas “políticas” al tema de las violaciones a los derechos humanos, salidas que han intentado siempre excluir el tema de la justicia. Las presiones de los denominados “poderes fácticos” fue especialmente patente durante la detención de Pinochet en Londres y el desarrollo del caso Pinochet en Chile.

La detención de Pinochet en Londres produjo una fractura del compromiso del estado chileno con la impunidad. Durante el período de la dictadura militar, el estado represor obviamente no sancionaba a los perpetradores de crímenes que se cometían precisamente desde el aparato del estado. El poder judicial no investigó ni ejerció sus funciones, particularmente los tribunales superiores de justicia que no acogieron ni un sólo Habeas Corpus en las épocas en que las detenciones eran masivas. Hubo excepciones notables de algunos jueces que se atrevieron a investigar y que, incluso, fueron por ello sancionados, pero la mayoría de los integrantes de los tribunales superiores eran afines a la ideología de la dictadura y en los demás había temor y falta de coraje. Había una impunidad de facto y jurídica.

Iniciada la transición, no obstante que el programa de la coalición de gobierno democrática contenía promesas de justicia y reparación, no fue posible derogar la amnistía ni limitar la competencia desmesurada de la justicia militar que juzgaba civiles (opositores políticos) porque, por un lado, la fórmula de la transición significó pactar con el régimen de Pinochet la salida institucional y, por lo tanto, un compromiso tácito de garantizar la impunidad frente a las violaciones de derechos humanos. Durante el gobierno de Aylwin se constituyó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación por la vía administrativa, la que dio cuenta de los principales episodios represivos, estableció una nómina de víctimas del régimen militar, pero sin dar nombres de agentes perpetradores. Fue sin duda un aporte a la verdad histórica, aunque parcial. Esa Comisión no tenía facultades jurisdiccionales y existió el compromiso histórico de no divulgar nombres de agentes. Fue un paso significativo pero insuficiente, porque no abordó el tema de la justicia.

Por otra parte, la correlación de fuerzas políticas impidió derogar en el parlamento el decreto de amnistía dictado por el propio régimen militar. Pero tampoco existió la voluntad política de hacerlo, por la preeminencia de la llamada “política de los consensos” que consistió en sólo impulsar aquellos temas que contaban con el apoyo de la derecha.

La detención de Pinochet en Londres horada por primera vez el blindaje jurídico y legal que el dictador había tejido en torno suyo para asegurarse la impunidad. La detención de Pinochet en Londres puso el tema de las violaciones de los derechos humanos en forma prioritaria en la agenda nacional. No obstante, el avance en esta materia se hizo por fuera del sistema político. Produjo una dinámica interesante en el poder judicial que sintió la obligación, al ser liberado Pinochet en Londres, de ejercer sus facultades jurisdiccionales con independencia y reivindicó en parte su rol en la sociedad. La detención de Pinochet en Londres marcó sensiblemente un cambio en el contexto político de la lucha contra la impunidad ya que, no obstante el sobrescimito, Pinochet quedó transformado en un cadáver político y una ruina moral.

La lucha contra la impunidad va de la par con procesos de democratización y acceso a la participación política. Esta lucha no sólo se realiza dentro de la esfera jurídica o judicial. El ejercicio de los derechos es principalmente consecuencia de la voluntad política de los gobernantes como de los gobernados. ¿Pero, en definitiva, qué es la impunidad? De una manera estricta, la impunidad es la falta de sanción penal, pero no sólo estamos frente a la impunidad por la ausencia de sanción de los crímenes, sino también de la falta de verdad que conduce a escamotear incluso la sanción moral y social y que, a fin de cuentas, intenta borrar la memoria colectiva, imponer la desmemoria y el olvido. Las definiciones jurídicas de la impunidad no abarcan todas las dimensiones políticas y simbólicas. No basta con la letra de la ley para luchar contra la injusticia. Esta es indispensable, pero lo son también la recuperación del pasado, el trabajo sobre la memoria y la reparación moral y social de las víctimas. La verdad, la justicia y la reparación constituyen anhelos no sólo de los familiares de las víctimas sino de quienes componían sus redes sociales y políticas. Se ha mantenido en una suerte de limbo oscuro a quienes, por ejemplo, intentaron hacer sobrevivir a los partidos políticos de la izquierda en la década de los setenta. No se rescata el proyecto político de las víctimas: se ha intentado borrar de la memoria colectiva a quienes protagonizaron las protestas populares de mediados de los ochenta, a los que arriesgaron sus vidas para terminar con la muerte optando por caminos políticos militares porque estimaron un deber moral hacerlo y, en definitiva, a todos quienes conformaron un vasto movimiento popular que permitió el tránsito a la democracia. Todos esos afanes de resistencia antidictatorial son mirados hoy con distancia ignoradora o bien estigmatizados.

(...) “Criminales” son ellos. Aquí se cometen, se han cometido “crímenes”. Estos son “crímenes de lesa humanidad”. Son palabras cargadas de una densidad histórica que el historiador o madre o hijo o mirón o víctima no entiende de buenas a primeras.

¿Qué significa “crimen”? ¿De qué “crímenes” son todos estos “criminales”? ¿Qué está involucrado en la condición “criminal” de ciertos eventos, en la seña de “crimen” que emiten algunos actos singulares, mas no por tales menos complejos y plurales, actos en los que está implicada la historia plural y en gran parte anónima de los seres humanos?

La voz latina *crimen* que persiste e insiste en nuestra lengua castellana significa “acusación” y “reproche”, pero también el “acusado” o “inculpado” y aun el “autor” o la “causa” de un mal; más frecuentemente el delito mismo, la falta, el vicio y hasta lo inconveniente o desfavorable de ciertas condiciones o cosas. *Crimen* tiene que ver con el mal y con aquello que lo causa, con una condición que se exhibe como *auctor* y como responsable de un mal o unos males que son asunto de enjuiciamiento común. Y esta voz remite a la expresión griega *to krima*, el “juicio”, la “sentencia”, la “condena”, la “pena”, sustantivo verbal que procede del verbo *krino* (“separar”, “discernir”, “juzgar”, “pensar”), el cual también da origen al término *krisis*, que es criba, separación y a la vez juicio, proceso, sentencia y aun aquella coyuntura decisiva que consiente designarse en castellano mediante el vocablo “crisis”. Al respecto recuérdese que en el libro primero de la *Política* sostiene Aristóteles que la *arkhé politiké*, el poder político, a diferencia del poder meramente despótico, que es pura dominación, consiste en la participación en las magistraturas de la *polis* y en el ejercicio de la *krisis*, es decir, del enjuiciamiento público de los asuntos de interés común.

“Crimen”, por consiguiente, es seña que indica una serie de condiciones enlazadas: unos acontecimientos y acciones conexas con un mal o unos males que exigen un público y común enjuiciamiento destinado a establecer en esos acontecimientos y acciones una condición causal que emerge como *auctor* responsable de esos males, de tal suerte que de tal enjuiciamiento resulte la pública y común posibilidad o potestad de suspender ese mal y esos males, o al menos la de su reparación, restitución o retorno.

Creo que muchos de los obstáculos que históricamente han impedido o restringido el ejercicio de tal potestad de enjuiciamiento público y común consagrandolo la *irresponsabilidad* (o impunidad) de los criminales proceden de la compleja serialidad que está implicada en la seña “crimen”. Sin considerar el fenómeno histórico de una cierta impotencia de juicio (asociada tal vez a la moderna destitución de la potestad política y de lo político mismo que describe Hannah Arendt) o el de la distorsión o manipulación del mismo por efecto de su absorción por la tecnocracia capitalista “salvaje” de la comunicación; sin considerar tampoco el hecho de que frecuentemente el mal resulta irreparable y se consolida como *fait accompli* de aspecto o “naturaleza” cuasi inmovible, de

suerte que la restitución o “retorno” (vuelco, inversión) del mal debe reducirse a una reparación “simbólica”, “histórica” o meramente “política”, hay sin embargo dos aspectos o elementos en la serie implicada por la seña “crimen” que merece la pena retener, a mi juicio. Está, por una parte, la cuestión del reconocimiento y la apreciación fina de la dimensión, extensión, intensidad, duración, profundidad del mal. Por otra, el problema del análisis histórico radical de unos acontecimientos y acciones que por su carácter conspirativo internacional y doméstico que envuelve corporaciones, sociedades y agencias diversas parecen tender a sustraer de cualquier responsabilidad a la larga serie de autores, cómplices y encubridores presuntamente implicados en los crímenes.

La vasta serie de los crímenes perpetrados por los modernos regímenes militares latinoamericanos y, en la especie, por la tiranía militar instaurada en Chile el 11 de septiembre de 1973, suele reunirse en la fórmula “violación” o, en plural, “violaciones” “de los derechos humanos”, muchas de las cuales configuran “crímenes internacionales” o de persecución penal internacional o “crímenes contra la humanidad” desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. El genocidio, el hacer desaparecer a las personas o “desparecimiento” o el *Nacht und Nebel* hitleriano, las ejecuciones sumarias, la tortura, la deportación no son, empero, simple violación de la ley o del derecho. ¡Son la violación de los hombres mismos, hombres y mujeres, violación de su integridad humana, violación de sus cuerpos singulares y colectivos, violación de su alma individual y plural! Y no sólo ello. En esos crímenes se configura la violación sistemática del *cuerpo histórico* de unos pueblos, unas culturas, unas sociedades históricas. La moderna tortura practicada por los regímenes militares latinoamericanos, por tomar tan sólo este ejemplo, tortura que no es la *quaestio* que perseguía forzar la confesión y establecer una “verdad” forzada, sino, a más de técnica médico-policíaca de obtención de información, una forma sistemática de terrorismo de Estado dirigida no sólo al suplicio singular del cuerpo de los torturados, mas a inducir y provocar una conducta constante en el conjunto del cuerpo social, tal forma moderna de la tortura no es entendida ni apreciada en toda la densidad, duración y extensión del mal que produce cuando se la encara, de una manera que podría sonar como un eufemismo, a través de la fórmula “violación de derechos humanos”. Pero la violación del *cuerpo histórico* de una República, de un pueblo, una cultura, una sociedad civil histórica asumió también muchas otras formas cuya *criminalidad enorme* podría resultar excluida o amparada en la irresponsabilidad y en la impunidad por el concepto de “violación de derechos humanos”. La privatización fraudulenta de la energía y el agua, la destrucción de la Universidad de Chile, el desmantelamiento de los Ferrocarriles del Estado configuran una violación del cuerpo estratégico, económico, cultural y político del Estado de Chile que implica un atentado contra su densidad e integridad histórica. ¿Han de quedar todos estos crímenes impunes? ¿Acaso se sustraen a toda responsabilidad aquellas corporaciones, entidades, funcionarios, directivos y profesionales que resultan implicados en los referidos eventos? (...)

## Roberto Garretón

Abogado de Derechos Humanos

Ante un público tan joven como el que está acá, quiero, primero, emitir un juicio respecto del gobierno de la Unidad Popular. Hemos visto en la televisión durante estos días las imágenes de esa época con un clima de agitación e incluso de alguna violencia, traducido en piedras, tarros de pintura, huevos, insultos y colas. Lo estamos viendo y eso hubo. Pero si analizamos al gobierno de Salvador Allende desde los estándares de derechos humanos vigentes en 1973 y los estándares -mucho más exigentes- del 2003, el gobierno de Salvador Allende "aprueba" porque no ocurrió ningún hecho que se pudiera calificar como crimen de lesa humanidad. Ni las piedras, ni los huevos ni las colas son factores de ilegitimidad. Un régimen deja de ser legítimo y se transforma en ilegítimo cuando usa el poder para violar los derechos humanos. Ahí sí podría justificarse un golpe de estado. En el gobierno de Salvador Allende, elegido democráticamente, no existió ni centros de tortura, ni campos de concentración, ni relegaciones y exilios forzados, ni desplazamientos forzados, ni escuadrones de la muerte ni políticas de exterminio. Lo digo yo, además, habiendo sido opositor al gobierno de Salvador Allende que, en mi concepto, nunca fue un buen gobierno pero sí fue un gobierno constitucional y democrático.

El segundo punto que quiero abordar tiene que ver con el título de la mesa: "Crímenes, justicia y reparación". Hay dos clases de crímenes, tal como se ha ido elaborando desde fines de la Primera Guerra mundial y, con más fuerza, después de la Segunda Guerra Mundial. Está, primero, el crimen común -cometido por delincuentes- donde se aplican penas privativas de libertad y donde hay un juez que juzga con igualdad de derechos para ambas partes (querellantes y querellados) y que da lugar a ciertas políticas criminales como la amnistía y el indulto. Pero hay otro grupo de delitos -que podemos examinar a partir del Tribunal de Nuremberg- que son los crímenes de lesa humanidad. Esos delitos se juzgan por otras leyes que se siguen todavía constituyendo. Primero, no es necesario que se apliquen sólo en el lugar donde se cometieron los delitos sino en cualquier parte del mundo, porque se entiende que la víctima lesionada por el delito es la humanidad entera. Y, por lo mismo, no cabe que en el país donde se cometió el delito, se lo deje sin castigo mediante instituciones como la amnistía y el indulto. Lo que ocurre es que las dictaduras pervierten incluso el lenguaje, hablando de "amnistía". La amnistía es válida para el delito común, muy válida para el delito político, pero inaceptable para el crimen de lesa humanidad. Lo que no se acepta respecto de los crímenes de lesa humanidad es la impunidad. La más común es la impunidad jurídica, penal (la ausencia de castigo para quienes cometieron crímenes de lesa humanidad) que está hoy día totalmente proscrita por las normas de los tribunales internacionales de derechos humanos. Se sostiene -sin voto en contra- que la obligación del Estado es, obviamente, no violar los derechos humanos pero, además, promoverlos y garantizarlos. Atenta contra el deber de garantía dejar sin sanción a las violaciones de derechos humanos. Hoy día ya nadie duda que ésta es una norma consagrada. La segunda dimensión de la impunidad es política. Desde los comienzos de la Transición, yo vengo diciendo que aquí se ha querido imponer un empate moral: da lo mismo ser torturador que ser torturado. Esto se traduce en que personas que han participado en violaciones a los derechos humanos son personas con las que uno convive y se encuentra en el metro, son personas que pasaron a ser diputados, senadores o alcaldes, adquiriendo títulos de honorabilidad. ¡De qué se sorprenden después de que recurran a la violencia y tiren piedras en el Estadio Nacional si el tipo que ha matado a 200 personas anda suelto! No hacer diferencia entre el bien y el mal pervierte la cultura de un país y esta perversión de los valores consagra la impunidad política.

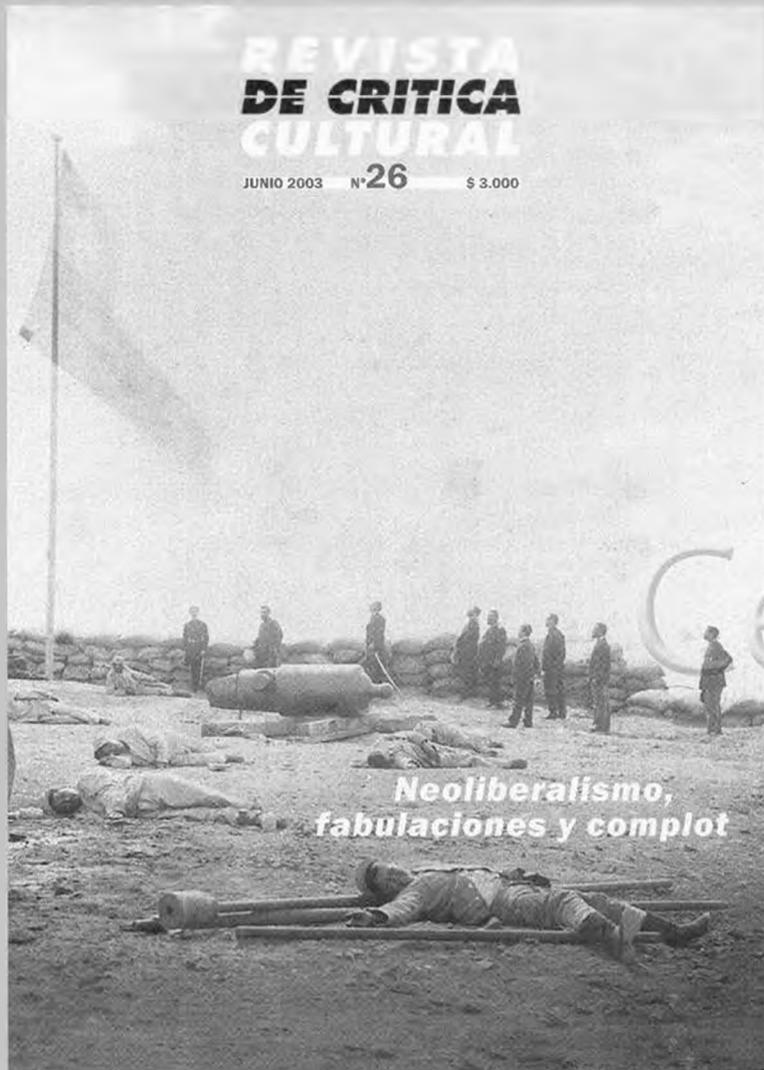
Después del 16 de octubre de 1998 -fecha que algún día declararemos feriado- y a medida que fue pasando el tiempo y que los jueces se pusieron a hacer justicia (¡buena costumbre!), el país se da cuenta de que todo lo que dijimos los defensores de derechos humanos desde la mañana del 11 de septiembre era completamente cierto y que todo lo que invocó la dictadura como verdad oficial era mentira. Cuando ya no hay cómo justificar nada, se tapa todo eso con otra mentira: la del "yo no supe nada". ¡Ni Pinochet, ni Arellano Stark ni *El Mercurio* supieron nada! ¡Ni los empresarios, a pesar de que la Dina iba a las fábricas a sacar personas que nunca volvían! Los jueces a quienes les presentábamos diariamente no sé cuántos escritos, ¡nunca supieron nada! Pero que supieran o no supieran ya no tiene ninguna importancia, porque ahora los que saben siguen apoyando a la dictadura. Mi tesis es que todos supimos todo: los que supimos estuvimos del lado de la verdad y la justicia porque lo sabíamos todo, los otros estuvieron del lado de la muerte, el atropello y la mentira, porque también lo sabían todo. Durante la dictadura, se adecuaba la información: cuando el periodista llegaba con la noticia sobre un caso de detenido-desaparecido, el editor ponía "presunto" detenido-desaparecido. El que hacía eso es hoy Premio Nacional de Periodismo, y éste es uno de los mayores escándalos de la Transición: consagrar y premiar la mentira oficial.

La tercera dimensión de la impunidad es la moral, la subjetiva. Matamos, dicen los que mataron cuando los pillan, pero no tengo que arrepentirme por que lo hice por la patria. Es así como el Guatón Romo llega a sentirse héroe. El "yo no supe" es el único resquicio del alma que le queda al que colaboró y ejecutó para salvar su propia dignidad.

La cuarta dimensión de la impunidad es la histórica. Aquí hubo una historia que se impuso durante 16 años: en Chile, hubo guerra contra los que estaban atacando a la patria y, por lo tanto, en esa guerra como en toda guerra, hay muertos. La versión de que hubo una fuerza salvadora de la patria amenazada por el marxismo genera la impunidad histórica. Cuando nosotros queremos re-escribir esa historia que nos impusieron, nos acusan de ofender a las fuerzas armadas o bien de atacar a la reconciliación haciendo revivir los odios del pasado. Pero, ¡no es posible reconciliarse con 5.000 muertos metidos en el medio! A mí lo que me ha gustado de la propuesta del Presidente Lagos es que se atreva a decir: "ésta no es una solución", porque durante la Transición se ha estado jugando a la reconciliación siempre con cartitas bajo la manga. No hay solución mágica ni un bálsamo que vaya a terminar con esta división que no lo armaron los demócratas sino los golpistas, y sin causa porque, ya lo dije, no había ninguna razón para parar un gobierno que, bueno o malo, era constitucional y democrático.



Último número publicado:



Colección completa, números anteriores y  
suscripciones: (56-2) 563 0506

[www.revista-de-critica-cultural.cl](http://www.revista-de-critica-cultural.cl)

# FACULTAD DE ARTES

## DOCTORADO EN FILOSOFÍA CON MENCIÓN EN ESTÉTICA \*

Accreditado por CONAP por 2 años (fecha de acreditación: Junio 2003)  
Apoyado por proyecto MECESUP (2003-2006)

INFORMACIONES: SECRETARÍA ESCUELA DE POSTGRADO  
FONOS 678 7515 - 678 7510 - FONOFAX 678 7514

LAS ENCINAS 3370, ÑUÑO A

E-MAIL: rleon@uchile.cl / posgarte@uchile.cl

Página web: artes.uchile.cl/postgrado

*\*El doctorado es único en su rubro en Latinoamérica.*

Postulaciones hasta 20 de Diciembre

## UNIVERSIDAD DE CHILE



# FACULTAD DE ARTES

## ESCUELA DE POSTGRADO AÑO 2003

DOCTORADO EN FILOSOFÍA Con mención en ESTÉTICA Y TEORÍA DEL ARTE

MAGISTER EN ARTES: Con mención en ARTES VISUALES · COMPOSICIÓN MUSICAL · DIRECCIÓN TEATRAL ·  
MUSICOLOGÍA\*\*\* · TEORÍA E HISTORIA DEL ARTE

POSTTÍTULOS: Especialización en GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN CULTURAL EN ARTES VISUALES\* · GESTIÓN Y  
ADMINISTRACIÓN CULTURAL EN MÚSICA\* · MUSICOTERAPIA\*\* · ARTETERAPIA\*\*/\*\* · RESTAURACIÓN DEL  
PATRIMONIO CULTURAL-MUEBLE · ARTES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS: MULTIMEDIAS INTERACTIVAS

DIPLOMAS: ARTE EN CREACIÓN GRÁFICA · FOTOGRAFÍA · REALIZACIÓN CINEMATOGRAFICA · MÚSICA DE  
TRADICIÓN ORAL CHILENA · DANZA APLICADA A LA EDUCACIÓN · IMPRONTA CERÁMICA · GESTIÓN CULTURAL  
PARA LA EDUCACIÓN · BASES PRÁCTICAS DE LA DRAMATERAPIA

\* Con Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas \*\* En cooperación con Facultad de Medicina \*\*\* Programa bi-anual. Ingreso 2004

INFORMACIONES: SECRETARÍA ESCUELA DE POSTGRADO

FONOS 678 7515 - 678 7510 - FONOFAX 678 7514

LAS ENCINAS 3370, ÑUÑO A

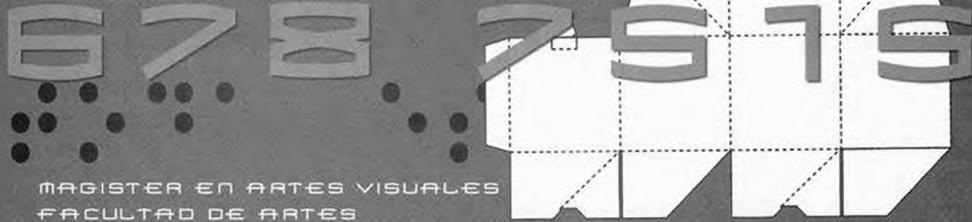
E-MAIL: rleon@uchile.cl / posgarte@uchile.cl

Página web: artes.uchile.cl/postgrado/

## UNIVERSIDAD DE CHILE



INFORMACIONES



MAGISTER EN ARTES VISUALES  
FACULTAD DE ARTES  
UNIVERSIDAD DE CHILE  
DURACION: 4 SEMESTRES  
POSTULACIONES: NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE CADA AÑO  
12 VACANTES

VACANTES ESPECIALES  
PARA ARTISTAS CON TRAYECTORIA



Arte/Diseño de la Universidad Pérez Rosales presenta la Revista:



es decir,

ARTE  
DISEÑO  
COMUNICACIÓN



04 BIENAL

[ SUBVERSIONES / IMPOSTURAS ]

PROGRAMACIÓN:

José Vicente Gajardo / Esculturas 20 de noviembre - 29 de febrero

15 de enero - 14 de marzo IV bienal "Subversiones / imposturas"

Arte alemán "El retorno de los gigantes" 16 de marzo - 30 de mayo

22 de marzo - 23 de mayo Arte y diseño alemán

Cosmografía (Cartografías) 6 de abril - 22 de mayo

6 de mayo - 20 de junio Innovaciones suecas (Diseño industrial)

Bruno Widman / Pinturas (Uruguay) 11 de mayo - 12 junio

29 de junio - 8 de agosto Fernando Prats (instalación)

Pintura española "Cinco siglos" 14 de junio - 18 de julio

Museo Nacional de Bellas Artes

## Galería de Arte | GM

**HIRANO RyO - Carlos Navarrete, 11 Noviembre - 6 Diciembre**  
Encuentro con el artista: jueves 27 Noviembre, 19 hrs.

**REGISTRO URBANO TRANSITORIO - Colectivo de Arte RUT, 18 Diciembre - 24 Enero 2004**

Video Santiago: 8 Enero, 18 hrs.  
Santiago 24: 24 Enero, 24 hrs. sobre Santiago (desde las 10 hrs.)  
Encuentro con los artistas: Jueves 15 Enero, 19 hrs.

Itinerancia Col

emporáneo

AUTOR		
TITULO		
FECHA PRESTAMO	NOMBRE DEL LECTOR	FECHA DEVOLUCION

SALA ARTE G  
H:  
S  
GALERÍA

paraíso  
Mar

Alberto Madrid, Carlos Nava

azo y Nelly Richard

# Gabriela Mistral

Area de Artes Visuales / Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

[www.artesvisuales.cl](http://www.artesvisuales.cl) - [galeria@mlneduc.cl](mailto:galeria@mlneduc.cl)

Teléfonos: (56 2) 731 9880 / 390 4108 - Fax: (56 2) 665 0797 -

Libertador Bernardo O'Higgins 1381 (metro Estación Moneda) - Santiago



GOBIERNO DE CHILE  
CONSEJO NACIONAL  
DE LA CULTURA Y LAS ARTES

Galería de Arte | GM

Gabriela Mistral

## MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO FACULTAD DE ARTES - UNIVERSIDAD DE CHILE

PROGRAMACION

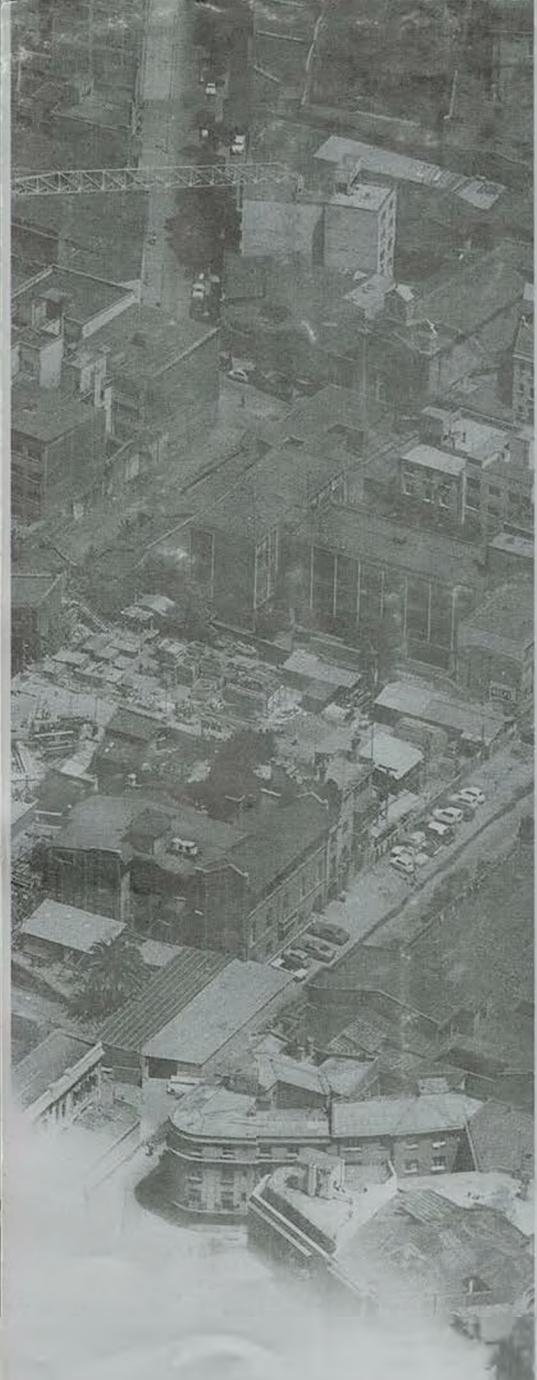
19 NOVIEMBRE-7 DICIEMBRE

6 BIENAL DE VIDEO Y NUEVOS MEDIOS DE SANTIAGO

INSTALACIONES / PERFORMANCES / WEB / VIDEO / TRANSMEDIALE - INTERNATIONALE MEDIENKUNSTFESTIVAL BERLIN /  
6° CONCURSO LATINOAMERICANO JUAN DOWNY / ARTISTAS INVITADOS NACIONALES E INTERNACIONALES  
19 DICIEMBRE-27 ENERO

EXPOSICION "TRAFICO": JUAN HIDALGO - FRANCIS NARANJO - JUAN CASTILLO - ANDERS RONNLUND -  
LOTTY ROSENFELD - ISMAEL FRIGERIO - CURATORIA: LUCIANO ESCANILLA  
/ MARIA IGNACIA FELL / OSVALDO REYES / CRISTOBAL PALMA / ESCUELA DE ARQUITECTURA - UNIVERSIDAD  
TECNICA FEDERICO SANTA MARIA / SEBASTIAN PREECE / COLECTIVA FOTOGRAFICA "SOCIEDAD TITULAR" /

Metro Bellas Artes Tel: 639 5486 - 633 1675 Fax: 639 4945 / [mac.uchile@entelchile.net](mailto:mac.uchile@entelchile.net) - [www.mac.uchile.cl](http://www.mac.uchile.cl)



**Sergio Grez  
Jacques Chonchol  
Ricardo Núñez  
Sergio Micco y Mauricio Jelvez  
Ricardo Hormazábal  
Jorge Insunza  
Jaime Gazmuri  
Sofía Correa Sutil  
Rodrigo Baño  
Alfredo Joignant  
Antonio Cortés Terzi  
Carlos Ruiz Schneider  
Jorge Larraín  
Maximiliano Salinas  
Manuel Antonio Garretón  
Carlos Huneeus  
José Antonio Viera-Gallo  
Kathya Araujo  
Guadalupe Santa Cruz  
Carlos Ruiz  
Tomás Moulian  
María Eugenia Horvitz  
Carmen Hertz  
Miguel Vicuña  
Roberto Garretón**

**Este Número especial de la REVISTA DE CRÍTICA CULTURAL  
recoge una selección editorial de algunas intervenciones  
presentadas en el Coloquio UTOPIA(S) 1970-2003,  
organizado por la Universidad ARCIS  
(10-12 de septiembre 2003, Edificio Diego Portales)**